



**UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS**

**“El Acceso de los Particulares como Sujetos Procesales ante la
Corte Centroamericana de Justicia”**

Trabajo Investigativo para obtener el Título de Licenciado en Derecho

Autor: Paola Anisabel Castillo

Tutor: Jacqueline del Rosario Gómez

Managua, Nicaragua

Octubre 2010

DEDICATORIA

Dedico esta Monografía:

A mi querida madre Isabel Castillo, porque todo lo que soy es Gracias a vos, siempre serás mi ejemplo a seguir, me has demostrado que todo se puede no importa las dificultades que la vida nos presente. Gracias por apoyarme siempre y hacer de mí una mujer de bien.

Este gran logro de mi vida solo te lo debo a ti madrecita, le doy Gracias a Dios por haberme dado a una gran mujer luchadora y cariñosa como Madre.

Te amo por Siempre.

PAOLA ANISABEL CASTILLO

AGRADECIMIENTO

En Primer lugar le agradezco a Dios, por haberme dado la oportunidad de vivir y llegar a esta etapa de mi vida con salud y tranquilidad.

A mi familia, mi madre Isabel Castillo, gracias por el esfuerzo y sacrificio que has hecho todo este tiempo para que éste día llegara, a mi abuela Mercedes Castillo, porque eres como mi segunda madre y siempre me has dado ánimos, a mi Padre Rodolfo Castillo gracias por estar presente en esta importante etapa de mi vida.

Mi más Profundo agradecimiento a mi tutora, Dra. Jacqueline del Rosario Gómez, por haber sido un apoyo incondicional para la elaboración de ésta Monografía, sin usted Querida Profesora esto no hubiera sido posible.

A la Universidad Centroamericana, por haber sido la mejor Alma Mater en estos cinco años de mi carrera, a todos los docentes por haberme transmitido gran parte de sus gran.

A la Corte Centroamericana de Justicia que me dio la oportunidad que me dio la oportunidad de realizar mis pasantías por la cual conocí a profundidad el tema que estoy presentando como mi estudio monográfico

Y en todas aquellas personas involucradas en la realización de mi Monografía, a todos aquellos que me dieron palabras de ánimos en los momentos que más lo necesita, se les agradece desde lo más profundo de mi corazón.

INTRODUCCIÓN

El Presente Trabajo monográfico centra su estudio en la importancia que tiene el acceso de los particulares a instancias internacionales, tomando específicamente los casos ante la Corte Centroamericana, como ejemplo de ello.

El tema a desarrollar en este estudio es “Importancia del acceso de los particulares como sujetos Procesales ante la Corte Centroamericana de Justicia”, en el cual se dieron a conocer cada uno de los casos presentados por particulares ante dicho Tribunal y de igual manera se analizó un caso concreto aplicando las disposiciones procedimentales ante la Corte Centroamericana de Justicia, como son la Ordenanza de Procedimiento y en cierta medida el Estatuto de la Corte.

Hay que tomar en cuenta, en primer lugar, que el hecho de que un particular, sea esta persona natural o jurídica, pueda acudir a instancias internacionales para reclamar por derechos que se les han violentado o pueda incurrir en responsabilidad internacional, es un tema muy común incluso en nuestros tiempos, ya que el Estado era considerado como el único Sujeto del Derecho Internacional. Sin embargo, con el tiempo se comenzó a reconocer la subjetividad internacional de otras figuras, tales como los pueblos, los grupos beligerantes, la Santa Sede, la Ciudad del Vaticano, la Soberana Orden de Malta y a los mismos individuos, en situaciones excepcionales, como mencionan los especialistas en la materia.

El individuo es ahora reconocido como un sujeto excepcional dentro de la comunidad internacional, y posee subjetividad internacional tanto activa como pasiva, es activa cuando implica la posibilidad de reclamar de manera directa o indirecta ante instancias internacionales por la vulneración de sus derechos y sin la necesidad de la intermediación de otras entidades, como por ejemplo el Estado, y es pasiva cuando el individuo es responsable internacionalmente de violaciones; entiéndase delitos y crímenes de carácter internacional y por lo tanto puede recibir una pena.

La Corte de Justicia Centroamericana o mejor conocida como Corte de Cartago creada el 20 de Diciembre de 1907 por las cinco hermanas repúblicas Centroamericanas (Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Guatemala) fue el primer Tribunal Internacional en su género que dio cabida a que los particulares hicieran uso de su jurisdicción y competencia. La actual Corte Centroamericana de Justicia, en funcionamiento desde 1992 es heredera del acervo jurídico de aquel Tribunal y por ende no podía dejar de permitir el acceso de los particulares a su jurisdicción.

Es de suma importancia dar a conocer a los particulares de nuestra región que contamos con una instancia ante la cual podemos hacer valer un derecho que en determinadas circunstancias se nos ha sido violentado, de igual manera hacer saber que la Corte Centroamericana de Justicia tiene atribuciones suficientes para hacer determinar la responsabilidad de los Estados de la violación de esos derechos.

En este estudio se ha dejado plasmado que con el pasar de los tiempo el individuo ha sido considerado un sujeto excepcional en el Derecho Internacional y que la teoría de que solo el Estado era el único sujeto capaz de hacer valer sus derechos frente a instancias internacionales o que era el único en incurrir en responsabilidad internacional, ha quedado en el pasado.

La investigación monográfica está compuesta por cuatro capítulos; en el primero se refiere el tema del individuo como sujeto excepcional en el Derecho Internacional; en el segundo se estudió a la Corte Centroamericana de Justicia, partiendo de su creación con el Protocolo de Tegucigalpa, se abordarán sus antecedentes históricos especialmente su antecesora la “Corte de Cartago”, sus competencias, sujetos, procesales, etc. El tercero se refiere a la jurisprudencia sobre el acceso de los particulares, conocido en el ámbito internacional como el *ius Standi*, ante la Corte Centroamericana de Justicia, y el cuarto capítulo se analiza el caso de Jeanett del Carmen Vega Baltodano contra el Poder Ejecutivo del Estado de Nicaragua, en aplicación a las disposiciones procedimentales ante la Corte Centroamericana de Justicia.

OBJETIVO GENERAL

“Dar a conocer la Importancia que tiene el acceso de los particulares, como sujetos procesales ante la Corte Centroamericana de Justicia.”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. “Identificar al Individuo o Particular como sujeto excepcional dentro de la Comunidad Internacional”
2. “Conocer importancia y funcionamiento la Corte Centroamericana de Justicia”
3. “Visualizar la Jurisprudencia del *Ius Standi* (acceso de los particulares), ante la Corte Centroamericana de Justicia”
4. “Analizar caso concreto en aplicación a las disposiciones procedimentales ante la Corte Centroamericana de Justicia”

CAPÍTULO I

EL INDIVIDUO COMO SUJETO EXCEPCIONAL DEL DERECHO INTERNACIONAL

En el este Capítulo se pretende dar a conocer la posición que actualmente tiene el individuo frente al Derecho Internacional, la evolución que esta figura jurídica ha sufrido para bien, ya que en el pasado el Estado era considerado como el único sujeto del Derecho Internacional. Actualmente goza de subjetividad internacional otras instancias reconocidas por la Comunidad Internacional como sujetos capaces de reclamar sus derechos que han sido violentados o bien incurrir en responsabilidad internacional.

El individuo o particular sea persona natural o jurídica por medio de su subjetividad activa tiene el derecho de reclamar ante instancias internacionales si se le ha o han violados derechos y garantías jurídicas reconocidas en el ámbito internacional, por otro lado también puede incurrir en la responsabilidad internacional cuando éste comete un delito tipificado directamente por la comunidad internacional y la misma deberá de juzgarlo.

1. LA SUBJETIVIDAD INTERNACIONAL EN EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

La subjetividad es considerada como una cualidad del sujeto, es todo aquello perteneciente o relativo al sujeto y su perspectiva hacia sí mismo y hacia su mundo externo.

Ser sujeto del Derecho internacional significa ser titular de derechos y obligaciones según las reglas del ordenamiento jurídico internacional las cuales atribuyen situaciones jurídicas subjetivas, activas o pasivas.

Al hacer un análisis de la evolución del Derecho internacional en los últimos tiempos nos damos cuenta de la transformación de sus sujetos. La diversificación de los objetivos y de las funciones de la comunidad jurídica internacional que ha ocasionado una “renovación cuantitativa del Derecho internacional.” (Velasco, 2007)

Nuestro campo social internacional ha sido muy complejo, por lo tanto se ha visto la necesidad de otorgar personalidad jurídica a diferentes entidades, creando así a los llamados sujetos de Derecho internacional, conservando a los Estados su carácter de sujetos originarios de este orden jurídico.

La definición clásica de Derecho internacional sostenía que solo los Estados eran sujetos de éste ordenamiento, de igual manera sustentaba que los sujetos de los derechos y obligaciones de los tratados eran los Estados contratantes y no los individuos cuyos intereses se trataba de cautelar, de modo que los intereses individuales, aunque estén protegidos por normas internacionales, no adquieren relieve en el orden internacional sino como objetos de derechos y deberes recíprocos de los Estados. Se concluía con que los individuos no se consideraban ordinariamente sujetos de derecho internacional.

Por siglos se afirmaba que las normas internacionales sólo podían tener un ámbito de validez personal (el ámbito de los Estados), incluso todavía para 1919, al surgir lo que se conocer como Sociedad de Naciones, primer organismo de carácter universal, se sostenía que era inconcebible que existan sujetos de derechos y deberes internacionales distintos de los Estados.

Si bien es cierto que los Estados son los sujetos principales y necesarios para que la actividad internacional marche debidamente, también es cierto que no son los únicos a los cuales se les atribuyen derechos y obligaciones.

En el Derecho internacional clásico o moderno, se reconoce junto a los Estados a otras entidades como la Santa Sede, los grupos rebeldes con estatuto de

beligerancia, los cuales eran poseedores de cierto grado de subjetividad internacional, entre otros.

Hoy en día el Derecho internacional ha progresado y más aún lo relativo a la subjetividad internacional por lo que ahora podemos hablar de una pluralidad de sujetos en esta rama del Derecho, pero por este motivo no se debe de pensar que la aparición de nuevas clases de sujetos internacionales ha sustituido a los Estados como sujetos principales y característicos de Derecho internacional. Los Estados son los sujetos primordiales y originarios en el sentido de que son ellos quienes por medio del reconocimiento, están capacitados para otorgar personalidad jurídica internacional a otras entidades.

En el Derecho internacional los Estados son los que aprueban o rechazan normas del derecho internacional aplicables a sus países por lo tanto ellos son los encargados de otorgar personalidad jurídica internacional a diferentes sujetos, con la aprobación de normas internacionales que de hecho así lo consideren.

Los Estados son sujetos necesarios y plenos del Derecho internacional pero junto a ellos coexisten otros sujetos, poseedores de algunos o algunos de los rasgos que integran la capacidad internacional, los cuales tienen la posibilidad de celebrar acuerdos internacionales, de disponer de un cierto grado de *ius representationis*, de acceder a instancias internacionales para reivindicar los propios derechos por vía de reclamación internacional, de ejercer ciertas competencias atribuidas por normas internacionales, de incurrir en responsabilidad internacional. (Velasco, 2007)

Al ser sujetos creadores de derecho internacional, los Estados, tienen la prerrogativa de dar existencia a nuevas instancias internacionales y la función privativa de estos es la de elaborar las normas del derecho internacional las cuales son compartidas y delegadas a estos nuevos sujetos.

En este orden de ideas, según Loretta Ortiz Ahlf, las definiciones de sujeto de Derecho internacional público pueden clasificarse en dos grandes grupos, los que se orientan por la teoría pura del derecho y los que se guían por la teoría de la responsabilidad. (Ahlf, 1998)

En la teoría pura de derecho de Hans Kelsen (Ahlf, 1998), se habla de los ámbitos de validez de las normas jurídicas; uno de esos ámbitos es el personal, el cual está dado por las personas cuyas conductas son reguladas por dicha norma, éste ámbito se encuentra muy vinculada al concepto de sujeto de derecho, y se dice que un individuo es sujeto de derecho si su conducta es referida por el ordenamiento jurídico.

La teoría pura del derecho sostiene que la conducta humana puede encontrarse regulada directa e indirectamente por el Derecho internacional.

Se regula directamente al individuo cuando el ordenamiento internacional, permite, prohíbe u obliga una determinada conducta de éste. Estas situaciones son excepcionales, ya que en la mayoría de los casos el derecho internacional se refiere a los Estados, la Santa Sede, las organizaciones internacionales, entre otros.

Por lo tanto esta teoría pura del derecho sostiene que son sujetos del orden jurídico internacional, toda entidad o individuo que sea destinatario directo de una norma de dicho orden, confirma esta postura por Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia.

La otra teoría a la que se refiere Ortiz Ahlf, es la teoría de la responsabilidad desarrollada principalmente por Eutathiades y por Wengler. (Ahlf, 1998)

En el curso de la Academia Internacional de la Haya, sobre los sujetos del derecho de gentes y la responsabilidad internacional, Eutathiades menciona que un sujeto de derecho internacional debe encontrarse en algunas de las siguientes situaciones:

- Ser titular de un derecho y poder hacerlo valer mediante reclamación internacional, o
- Ser titular de un deber jurídico y tener capacidad de cometer un delito internacional.

Los dos casos según esta jurista tienen en común el elemento de la responsabilidad, en el primero se trata de quien puede demandar y hacer valer

la responsabilidad internacional y en el segundo se habla de quien puede asumirla.

Según Ortiz Ahlf, Wengler desarrolló una teoría más amplia de la responsabilidad internacional. Sostiene que el acto jurídico es el antecedente de una sanción, en tanto que la responsabilidad consiste en ser destinatario de ella, independientemente de haber sido o no el autor del acto jurídico.

En esta teoría Wengler llegó a la conclusión de que son sujetos de Derecho internacional los destinatarios de sanciones en el orden internacional ó los sujetos responsables.

Frente a estas teóricas sobre la subjetividad del individuo, Díez de Velasco sostiene que no basta con ser beneficiario de un derecho o estar afectado por una obligación, sino que se requiere una aptitud para hacer valer estos derechos ante instancias internacionales o para ser responsable en el plano internacional en caso de violación de la obligación. (Velasco, 2007)

La calidad de sujetos del derecho internacional no depende de la cantidad de derechos u obligaciones de los que se es titular. La extensión de la capacidad internacional no es la misma en todos los casos. Los Estados en calidad de sujetos originarios, poseen una capacidad plena, mientras que otras entidades sólo disponen de una capacidad restringida, que incluye aquellas posibilidades de actuación que les han sido atribuidas en virtud del acto de su creación.

Los sujetos internacionales son muy distintos entre sí, y la cantidad de derechos y obligaciones de los que son titulares también es muy diversa.

Como ejemplo de esta postura podemos citar la Opinión Consultiva, emitida el 11 de abril de 1949, por el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), al plantearse la cuestión de si las Naciones Unidas poseen o no capacidades para presentar una reclamación internacional contra un Estado, y sobre la reparación de daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas, este Tribunal dijo: *“En un sistema jurídico, los sujetos de derecho no son necesariamente idénticos en cuanto a su naturaleza o a la extensión de sus derechos; y su naturaleza depende de las necesidades de la comunidad. El desarrollo del Derecho internacional, en el*

curso de su historia, se ha visto influido por las exigencias de la vida internacional, y el crecimiento progresivo de las actividades colectivas de los Estados ha hecho ya surgir ejemplos de acción ejercida en el plano internacional por entidades que no son Estados) (Opinion Consultiva sobre Reparación de daños sufridos al Servicio de las Naciones Unidas, 1949). En otro orden de idea la misma Opinión Consultiva expresa que *“mientras que un Estado posee la totalidad de derechos y deberes internacionales, los derechos y deberes de una identidad como la Organización han de depender de los propósitos y funciones de ésta, tal como son enunciados o están implícitos en sus textos constitutivos y desarrollados en la práctica”*

Al hacer un análisis de los preceptos jurídicos antes mencionados, podemos afirmar que el contenido de la personalidad internacional, en términos de capacidad no es el mismo en todos los sujetos, y es por eso que no sería correcto negar la condición de sujeto del Derecho internacional al individuo basándose sólo en su incapacidad para participar en los proceso de creación de normas jurídicas internacionales.

De esta forma la afirmación tradicional de ser inconcebible en Derecho internacional la existencia de otros sujetos de derecho y obligaciones distinto de los Estados, ha quedado totalmente desmentida en la práctica. (Carrión, 1998)

En conclusión, y retomando lo planteado anteriormente podemos afirmar que actualmente el Derecho internacional se caracteriza por la pluralidad y la heterogeneidad de sus sujetos, junto a los Estados, sujetos soberanos del derecho internacional, y a las organizaciones internacionales integradas por Estados, todo indica que han adquirido la subjetividad internacional otras entidades como la Santa Sede, la Ciudad del Vaticano, los pueblos, los beligerantes y los individuos.

2. SUJETOS DEL DERECHO INTERNACIONAL

Expuesto lo anterior en cuanto a la subjetividad internacional, en términos generales, nos conviene exponer el marco de actuaciones de esas entidades que hasta hoy se les ha reconocido la posibilidad de actuar frente al Derecho Internacional, por ello hare referencia a cada uno de ellos.

El Estado

Los primeros Estados Nacionales aparecen a finales de la Edad Media y a principios de la Edad Moderna con la desintegración del sistema Feudal. En efecto, ese poder fraccionado y corporizado se unifica lentamente en una nueva estructura segura, fuerte, avasallante, y viable; el Estado Nación. La aparición de Estados nacionales y su colisión de intereses provocó grandes contiendas bélicas por disidencias en lo político, económico o religioso. Por ello el primer gran paso del Derecho Internacional fue la firma de la paz de Westfalia en la que los Estados se obligaban a respetar las religiones. Observamos por tanto que el mayor jugador en el Campo del Derecho Internacional era el Estado, sujeto por excelencia.

Posteriormente, los Estados conscientes de la necesidad de cooperar para obtener beneficios abren el camino a la creación de Organizaciones Internacionales en aras del beneficio común, sin por ello desmembrar la estructura conformada. Tal estructura es el reflejo de las necesidades sociales en pos de ordenarse y lograr el bien común.

Según la Convención sobre los derechos y deberes de los Estados, adoptada por la séptima Conferencia Interamericana y firmada en Montevideo el 26 de Noviembre de 1993, en su artículo 1 dice “que los Estados como persona de Derecho Internacional debe reunir las condiciones siguientes: población permanente, territorio determinado, gobierno, capacidad de entrar en relaciones con otros Estados”

- **La Población permanente:** es el conjunto de personas que de modo permanente habitan en el territorio del Estado y están en general unidas a éste por el vínculo de la nacionalidad.

Al caracterizar a la población permanente se está haciendo referencia a su estabilidad relativa sobre el territorio del Estado, esta estabilidad podría resultar amenazada por diferentes factores como por ejemplo el genocidio o la depuración étnica, la cual se refiere al traslado forzoso de poblaciones enteras fuera de sus asentamientos naturales.

- **El Territorio determinado:** es el espacio físico dentro del cual la organización estatal ejercita en plenitud la propia potestad de gobierno, excluyendo en él cualquier pretensión de ejercicio de análogos poderes por parte de otros Estados.

El territorio abarca un conjunto de espacios (espacios terrestres, marítimos y aéreos), en los cuales el Estado despliega con el máximo de intensidad sus poderes soberanos y no meras competencias de tipo funcional.

En virtud de la soberanía territorial el Estado tiene el Derecho exclusivo de ejercer las actividades estatales, este derecho que conlleva una triple vertiente, jurídica, política y económica.

- **El Gobierno:** es la expresión de la organización política del Estado, esta organización según Díez de Velasco, se manifiesta en concreto a través de los órganos encargados de llevar a cabo la actividad social del Estado, tanto en el interior como en el exterior, a través de la creación de normas jurídicas que se impongan a la población y a la propia organización gubernamental en general dentro del territorio del Estado, a través de un poder político autónomo respecto de los otros poderes que ejercen su actividad en la sociedad. (Velasco, 2007)

- **Soberanía:** el Estado soberano se caracteriza por no depender de ningún otro orden jurídico estatal ni de ningún otro sujeto del Derecho Internacional. La soberanía se muestra como un principio constitucional y como fundamento del Derecho Internacional; su esencia consiste principalmente en el derecho de ejercer las funciones de Estado en un plano de independencia e igualdad respecto a otros Estados.

La soberanía tiene una irreductible dimensión jurídica, y en este sentido se presenta en el Derecho Internacional como un conjunto de derechos y deberes del Estado.

Los Pueblos

Anteriormente en el Derecho clásico, el cual regulaba solamente las relaciones entre los Estados, sin darles atención especial a los pueblos desde el punto de vista de sujetos del Derecho internacional. Sin embargo tras la Segunda Guerra Mundial, La Carta de las Naciones Unidas vino a incorporar entre los propósitos de la nueva Organización el de fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la libre determinación de los pueblos (arto 1, 2 párrafo). La evolución de la propia sociedad internacional, con la influencia de una serie de factores políticos favorables a la descolonización hizo que en pocos años la conservadora regulación contenida en la Carta de la Naciones Unidas mencionada anteriormente, se desarrollara con una orientación favorable a las aspiraciones de los pueblos dependientes.

El Principio de Autodeterminación, según la Resolución No. 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 14 de Diciembre de 1960 supone para un pueblo colonial su derecho a ser consultado, a expresar libremente su opinión sobre como desea conformar su condición política y económica y si tal fuere su deseo, el derecho a convertirse en un Estado soberano e independiente.

Este Principio se presenta con valor universal, ya que trasciende en su aplicación a las situaciones coloniales, alcanzando a los pueblos de cualquier otro Estado.

La Autodeterminación de los pueblos opera en distintos planos (político, social, económico, cultural, humanitario), generando para los pueblos derechos de diversas magnitudes.

Los Grupos Beligerantes

Se conoce como beligerantes a los grupos facciones organizados, que en el seno de un Estado, se alzan contra el poder constituido a través de actos de hostilidad. Este tipo de reconocimiento hizo su aparición a principios del siglo XIX y se consolida a principios de 1861 al reconocer varias potencias europeas a los confederados sudistas en tanto que beligerante en el contexto de la Guerra de Secesión Norteamericana (1861-1865), tiene efectos limitados y temporales, pues su único objetivo es reconocer a las fuerzas insurgentes los derechos necesarios para llevar a cabo su esfuerzo bélico durante la contienda.

Según Díez de Velasco el grupo rebelde que goza del estatuto de beligerancia es titular de unos ciertos derechos y obligaciones derivados del orden jurídico internacional, y en ese sentido posee un cierto grado de subjetividad internacional.

El artículo 4 de la resolución de Neufchatel de 1900 del Instituto de Derecho Internacional dice: “El Reconocimiento de Beligerancia es un acto mediante el cual, bien un Gobierno reconoce que el conflicto armado que se desarrolla en su territorio es una guerra sometida al conjunto de las leyes y costumbres de la guerra, bien un tercer Estado considera que este conflicto armado constituye una guerra frente a la cual permanecerá neutral”.

Formas y Requisitos del Reconocimiento de la Beligerancia

Las prácticas de los Estados muestran que son inusuales los casos en que ha sido formal y expreso. En 1869 Perú declaró que reconocía como beligerante al partido político que combatía por la independencia cubana. Un caso de reconocimiento explícito bastante frecuente resulta de una declaración de neutralidad como cuando durante la guerra de Secesión americana algunas potencias europeas se declararon neutrales o, explícitamente reconocieron como beligerantes a las tropas del sur esclavista. Un caso de reconocimiento de beligerancia puede ser deducido de ciertos hechos como serían, entre otros, el intercambio de prisioneros o la conclusión de ciertos acuerdos entre los oficiales superiores de los países en contienda. Al respecto la doctrina internacionalista se encuentra dividida entre los autores que sostienen el carácter eminentemente subjetivo del reconocimiento (el acto de reconocimiento es constitutivo de derechos y obligaciones internacionales para el grupo beligerante únicamente a partir del momento en que se presenta tal declaración, bien sea por parte de una Potencia extranjera o del gobierno del Estado donde se desarrolla el conflicto armado) y aquellos que se inclinan por la naturaleza objetiva del mismo (el acto de reconocimiento de beligerancia es constitutivo o sea que en la práctica basta con que estén reunidos los elementos de esta institución jurídica -conquista de un territorio, ejercicio de Soberanía, conducción de la lucha por tropas organizadas que se encuentran sometidas a la disciplina militar y respetan las leyes y costumbres de la guerra- para que el grupo armado sometido a las leyes y costumbres de la guerra. Sin embargo la existencia de las condiciones objetivas no obliga jurídicamente a las potencias extranjeras o al Estado a reconocer la beligerancia del grupo armado dado que se trata de un acto eminentemente discrecional. Es de resaltar la convergencia que llega casi hasta la identidad de las condiciones que debe cumplir el grupo armado insurgente para ser reconocido como beligerante y las que aparecen recogidas en el artículo 1 del Protocolo Adicional II a los Cuatro Convenios de Ginebra.

La Santa Sede, La Ciudad del Vaticano y la Soberana Orden de Malta

La Santa Sede

A partir del año 380, cuando Teodosio I hace del cristianismo la región oficial del Imperio, la iglesia católica desde entonces ha venido participando activamente en las relaciones internacionales. Ha existido una discusión si en realidad el sujeto internacional es la iglesia católica o la Santa Sede en cuanto a ente central de la misma. Para algunos autores, la iglesia católica, por su naturaleza y los fines que persigue, no participa en las relaciones jurídicas internacionales, correspondiéndole por consecuencia a la Santa Sede llevar a cabo esas relaciones.

La Santa Sede aún en los tiempos en que la Iglesia estuvo privada de base territorial, siguió actuando en calidad de sujeto internacional a través del ejercicio del derecho de legación activo y pasivo y de la conclusión de genuinos negocios jurídicos internacionales, los concordatos.

La Ciudad del Vaticano

Para el año de 1929, el tratado de Letrán entre el Reino de Italia y la Iglesia Católica, establecía en su artº III que “España reconoce a la Santa Sede, la plena propiedad, el poder exclusivo y la soberana jurisdicción sobre el Vaticano, tal como actualmente está constituido con todas sus dependencias y dotaciones, creando de este modo La Ciudad del Vaticano para los fines especiales y con las modalidades que contiene el presente tratado”.

De acuerdo al art. XXVI, del mismo tratado político antes mencionado, la entidad que se crea es reconocida por Italia como Estado (El Estado de la Ciudad del Vaticano), bajo la soberanía del Sumo Pontífice. De acuerdo con los objetivos de este convenio bilateral, la Ciudad del Vaticano aparece como un medio jurídico necesario para asegurar la libertad y la independencia de la Santa Sede en todos los órdenes, recogiendo la decisión de la Santa Sede de permanecer extraña a los litigios temporales entre los demás Estados, por lo cual se declara que la Ciudad del Vaticano será siempre y en todo caso

considerada como territorio neutral inviolable y el mismo establecía que la Ciudad del Vaticano contaba con una Nacionalidad Ficticia.

La Soberana Orden de Malta

Este es uno de los casos más discutidos en lo que se refiere a la subjetividad jurídica internacional. Esta Orden en otros tiempos gozó de una clara soberanía territorial y tuvo originalmente un carácter de orden religioso- militar. A partir de los años cincuenta se llegó a discutir la existencia de la misma ante los Tribunales de la Curia Romana, en los cuales con la sentencia cardenalicia del 24 de Mayo de 1953, se determinó que la Orden de Malta se trataba de una orden religiosa y que como tal dependía de la Santa Sede mencionada anteriormente.

La Santa Sede sin embargo dio a la orden una amplia autonomía, lo cual le permitió adquirir derechos y obligaciones de carácter internacional frente a terceros Estados que la reconocían.

La subjetividad Internacional de la Soberana Orden de Malta en sus relaciones con los Estados se manifiesta de diferentes maneras, una de ellas es cuando la Orden tiene relaciones diplomáticas con los Estados, actualmente la Soberana Orden cuenta con más de treinta embajadas y ocho legaciones acreditadas ante países de Europa, África, Asia y América Latina.

Otra manifestación de la Subjetividad de la Orden de Malta es la facultad de concertar tratados, ya que celebra acuerdos internacionales a fin de llevar a cabo su actividad hospitalaria y asistencial como por ejemplo los tratados suscritos con Somalia y Camerún en 1961, referente a la asistencia contra la lepra.

Por otra parte cabe destacar que la Orden de Malta es miembro del Comité Internacional de medicina y Farmacias militares, organización intergubernamental que tiene su sede en Bélgica.

Por el hecho que la Soberana Orden de Malta es destinataria de derechos y obligaciones es que goza de personalidad jurídica internacional.

El individuo

Según Loretta Ortiz Half cuando el comportamiento del Individuo es regulado directamente por el Derecho Internacional, se convierte en titular de derechos o sujeto responsable por actos ilícitos de este Ordenamiento Jurídico, es decir el individuo tiene la capacidad de reclamar por algún derecho violentado pero de la misma manera puede incurrir en la responsabilidad Internacional.

Es por eso que podemos definir la subjetividad del individuo de carácter activo y pasivo. En cuanto a la subjetividad activa se puede mencionar que a partir de la creciente humanización del Derecho Internacional Público se dio la situación excepcional para el individuo de acceder ante los órganos jurisdiccionales internacionales para reclamar algún derecho violentado.

Por otro lado, la subjetividad pasiva del individuo se refiere a su responsabilidad ante la violación de determinadas normas del Derecho Internacional, siempre y cuando su comportamiento y los tipos delictivos se encuentren regulados por el mismo.

3. LA SUBJETIVIDAD EXCEPCIONAL DEL INDIVIDUO EN EL DERECHO INTERNACIONAL

Según algunos autores hasta antes del año 1905, el Estado era considerado el único titular de derechos y obligaciones dentro del sistema internacional, por tanto este ordenamiento jurídico cumplía como función principal la de regular las relaciones entre los Estados y distribuir las competencias entre ellos. Se consideraba que el sistema jurídico internacional no hacía referencia a la actuación del individuo, sino a través de la representación o actuación de sus Estados, por medio de la figura de protección diplomática.

La rígida separación que existía entre el Derecho Internacional y los Derechos Internos mantenía al individuo al margen del primero y alejado de él, sólo en el caso que éste Derecho Internacional se convirtiera en Derecho Interno éste podía ser invocado por el individuo, o en sentido más amplio, por los particulares, sean personas naturales o jurídicas.

El reconocimiento de la subjetividad jurídica internacional del individuo se encuentra determinada por el Derecho internacional, por lo tanto es necesario identificar el rol que el individuo pueda asumir en éste ordenamiento jurídico dependiendo del nivel de subjetividad que se le pueda reconocer.

De esta manera, cuando hablamos del individuo se puede hablar de dos tipos distintos de capacidad de actuar en el ámbito internacional, tal como se mencionó anteriormente:

- La capacidad activa: para reclamar ante instancias internacionales por la violación de determinados derechos.
- La capacidad pasiva: para ser responsable penal por las violaciones del ordenamiento internacional, que en los últimos tiempos ha experimentado un espectacular desarrollo.

Es de gran importancia tener en cuenta que las dimensiones activas o pasivas de la subjetividad jurídica se complementan con las figuras de refugio, asilo y extradición.

En cuanto a la extradición podemos señalar que es uno de los instrumentos más importantes de cooperación jurídica internacional entre los Estados en materia penal, supone la entrega de un fugitivo de la justicia de un Estado a otro que pretende su enjuiciamiento por causa penal o dar cumplimiento a la ejecución de una sentencia condenatoria privativa de libertad.

La figura de refugiado se encuentra definida en la Convención sobre el Estatuto de refugiado del 28 de julio de 1951, la cual nos dice que es refugiado toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones

políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no quiera, a causa de sus temores regresar a él.

En cuanto al asilo la “Declaración de asilo territorial de Organización de las Naciones Unidas (1954), establece como rasgos del derecho de asilo: el derecho del Estado de concederlo, derecho del individuo de buscarlo y el principio de no devolución del solicitante de asilo al Estado que lo persigue. En el caso de Latinoamérica también se reconoce la figura de asilo diplomático.

3.1. La Subjetividad Jurídica Internacional Activa del Individuo

Esta dimensión internacional activa del individuo implica la posibilidad de reclamar de manera directa ante instancias internacionales por la vulneración de sus derechos y sin la necesidad de la intermediación de otras entidades, como por ejemplo el Estado.

La circunstancia de una norma implica el poder reclamar por su violación y es tal posibilidad de reclamación la que determina la posibilidad internacional activa. Mediante acuerdos internacionales, los Estados han ido estableciendo diversas normas dirigidas a la protección de intereses individuales o de un grupo de personas. (Perez-León)

Podemos identificar diferentes normas jurídicas internacionales aplicables a la protección de los individuos, como por ejemplo aquellas normas que protegen su vida (prohibición de la piratería, reglas del derecho de la guerra, prohibición de usos de gases tóxicos y asfixiantes, reglas para la prevención y sanción del genocidio), en su libertad (abolición de la esclavitud, abolición del trabajo forzado, prohibición de la trata de mujeres), en su salud y moralidad (reglamentación de la producción y del tráfico de estupefacientes, represión de circulación de publicaciones obscenas). (Velasco, 2007)

Este desarrollo normativo se ve hoy coronado por un conjunto de normas adoptadas en el plano universal, entiéndase Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo, Organización de las Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura, Organización Mundial de la Salud, entre otros y en el plano regional, se puede mencionar el Consejo de Europa, Unión europea, Organización de Estados Americanos, cuyo objeto es la protección internacional de los derechos humanos.

En el plano internacional se registran casos diversos de concesión de los particulares, otorgándoles posibilidad de acceder, en defensa de sus derechos o intereses, a órganos internacionales, algunos de carácter judicial (tribunales internacionales) y otros sin tal carácter.

En lo que se refiere a órganos de carácter judicial, en la doctrina suele citarse el precedente de la XII Convención de la Haya del 18 de octubre de 1907, que no entró en vigor debido a no tener el número suficientes de ratificaciones, pero en virtud de la cual se creaba un Tribunal Internacional de Presas ante el que podría interponerse, según el artículo 4 de la Convención, recurso por parte de un potencial neutral o de un particular perteneciente a ella.

La Convención de Washington de 20 de Diciembre de 1907, suscrita entre las cinco Repúblicas Centroamericanas (Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Guatemala), se estableció un Tribunal de Justicia Centroamericana conocido como Corte de Cartago, ante el cual podían acudir los individuos que hubieren agotado antes los recursos internos del Estado contra el que pretendieren dirigir su acción, en este caso el tribunal no llegó a conocer el fondo de ninguno de los cinco casos incoados por demandas individuales al pronunciarse en todos ellos, por distintas razones de inadmisibilidad.

Al concluir la Primera Guerra Mundial encontramos los Tratados de Paz, en los cuales se crearon tribunales arbitrales mixtos con competencias para dirimir ciertas controversias entre particulares y los Estados ex – enemigos. Tras la segunda Guerra mundial, se pueden mencionar el Tribunal Supremo de Restituciones y la Comisión Arbitral sobre los bienes, derechos e intereses en Alemania creados por la Convención de París de 1954 sobre el arreglo de las cuestiones derivadas de la guerra y la ocupación; en igual sentido el Tribunal Arbitral creado por el tratado germano-austriaco de 1957.

También podemos hacer referencia a la posibilidad que tienen las personas físicas y jurídicas de dirigirse al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a través de varias vías procesales, como por ejemplo, el recurso dirigido a obtener la anulación de las decisiones y otros actos de eficacia individual que les afecten directamente (Artículo 173 del Tratado de la Comunidad Europea y Artículo 146 del Tratado de la Comunidad Económica Europea y el recurso dirigido a exigir la responsabilidad extracontractual de las Comunidades Europeas.

Por su parte, en el caso del derecho comunitario andino, las personas naturales pueden iniciar ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones actos procesales como la acción de nulidad; acción por incumplimiento, recurso por omisión o inactividad y la función arbitral.

En cuanto a los órganos de carácter no judicial, la práctica internacional ha demostrado la capacidad procesal de los individuos para poner a funcionar determinados órganos específicos de ciertas organizaciones internacionales, mecanismos convencionales y extra convencionales de salvaguarda de los derechos humanos, de la ONU o de algunos de sus organismos especializados. Debemos aprovechar en nuestra valoración como precedente, el derecho de petición de las minorías nacionales en el marco de la Sociedad de Naciones, con las comunicaciones sustanciadas por cualquiera de los Estados miembros, o por las peticiones realizadas por sus propios miembros.

Dentro de los mecanismos convencionales, existen algunos donde los individuos o grupos de individuos, están habilitados para presentar sus reclamaciones por presuntas violaciones de los derechos consagrados en los propios textos convencionales, ante ciertos órganos, dígame: Comité para la eliminación de la discriminación racial; el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, creado por el Protocolo Facultativo de la Convención; el Comité contra la tortura; y el Comité de Derechos Humanos, igualmente creado en su Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos, de 1966. De reciente entrada en vigor, el Comité para la Protección de los Derechos de los Trabajadores

Migratorios y sus Familiares y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ambas con cláusulas especiales para admitir comunicaciones individuales, (Velasco, 2007), entre otros.

En cuanto a los mecanismos extra convencionales, se han establecidos algunos procedimientos, sin base en convenios específicos (de ahí su nombre), sino en virtud de algunas resoluciones del Consejo Económico y Social de la ONU, para estudiar las diferentes situaciones de violación de los derechos humanos.

3.2.1 El Ejercicio Efectivo de los Derechos y el Acceso a las Instancias de Protección de Derechos humanos

El tema de los Derechos humanos anteriormente solo era considerados asuntos pertenecientes a las relaciones de los Estado y resorte del derecho interno, sin embargo con el transcurso del tiempo y la humanización del Derecho Internacional, han dejado por sentado que el tema de los Derechos humanos no sólo pertenece a ellos sino también a otros sujetos internacionales incluyendo a la persona humana siempre y cuando se la hayan violentados sus derechos

De los derechos humanos se comienza a hablar en el siglo XX, como consecuencia de los tratados de paz celebrados luego de las guerras mundiales. Por ejemplo, el Tratado de Versalles, se suscribió finalizando la primera guerra mundial y dio lugar a la creación de la Sociedad de las Naciones, como una organización internacional con sede en Ginebra (Suiza), la cual tuvo como finalidad primordial el cumplimiento de los tratados de paz y el mantenimiento de la paz, destacándose por su ayuda a los refugiados, la solución de conflictos entre Estados y la reconstrucción de Estados por los desastres de la citada guerra mundial.

Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, entre el 25 de abril y el 26 de junio de 1945 se llevó a cabo La Conferencia de San Francisco, en la cual participaron cerca de 50 Estados. De ella surgió la Carta de la Naciones Unidas y, por ende, la creación de las Naciones Unidas el 26 de junio de 1945, con las finalidades y propósitos contenidos en el Preámbulo y en el artículo 1o de la Carta, entre los cuales se encuentran el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la tutela de los derechos y libertades fundamentales de los hombres en el ámbito universal y el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de libre determinación de los pueblos.

Según la evolución histórica de los derechos humanos, éstos se pueden clasificar en:

- A. Derechos Humanos de la Primera Generación.
- B. Derechos Humanos de la Segunda Generación.
- C. Derechos Humanos de la Tercera Generación.

Derechos Humanos de la Primera Generación

El fin primordial de estos derechos humanos es la protección de los derechos civiles y las libertades públicas. En este grupo se incluyen los derechos a la seguridad y a la integridad física y moral de la persona humana, así como también los derechos políticos en el más amplio sentido de la palabra, tales como el derecho a la ciudadanía y el derecho a la participación democrática en la vida política del Estado.

Estos derechos se consagraron inicialmente en la "Declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano", en Francia, en 1787.

Derechos Humanos de la Segunda Generación

Son aquellos derechos humanos que permiten al individuo colocarse en condiciones de igualdad frente al Estado, con el objeto de reclamar de la autoridad pública el deber de proteger los derechos económicos, sociales y culturales, entre los cuales hallamos el derecho a la propiedad, el acceso a los bienes materiales, los derechos familiares, la salud, la educación, la cultura y los derechos laborales.

En la primera mitad del siglo XX surgen estos derechos; concretamente, después de la Segunda Guerra Mundial. Estos derechos se consagraron en la "Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre", aprobada el 2 de mayo de 1948 y la "Declaración Universal de los Derechos Humanos" proclamada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Derechos Humanos de la Tercera Generación

Se denominan derechos colectivos de la humanidad o derechos de las nuevas generaciones. El Profesor mexicano Héctor Fix-Zamudio los denomina derechos difusos y los define como aquellos "derechos subjetivos e intereses legítimos que pertenecen a personas indeterminadas y a diversos grupos sociales distribuidos en varios sectores, y que se refieren a ámbitos como el consumo, el medio ambiente, el patrimonio de la humanidad, entre otros".

En este grupo se clasifican el derecho a la paz, el derecho a la calidad de los bienes, productos y servicios comerciales, el derecho a gozar de un ambiente sano, el derecho al espacio público, etc.

La evolución que actualmente hemos experimentado en el ámbito de la Tutela internacional de los Derechos Humanos, nos ha dejado como referencia un Sistema Universal y Sistemas Regionales, siendo estos: el Europeo, el Americano y el Africano y en desarrollo el Asiático.

3.2.2. Sistemas de Protección de los Derechos Humanos

En el ámbito Universal la Carta de las Naciones Unidas (1945) en su preámbulo expresa que "la fe de los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana". La Carta en su artículo 1 específicamente, se declara como propósito de la organización, la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo del respeto a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales de todos y todas.

Esta Carta sin embargo no definía el número de derechos humanos y libertades fundamentales, pero este vacío fue llenado gracias a la Sesión de la

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en la cual el 10 de Diciembre de 1948 se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como se mencionó anteriormente.

En esta Declaración se definen los más importantes derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, pero no se instaure ningún derecho de reclamación de los particulares ante instancias internacionales. Cuenta con un preámbulo y 30 artículos en los que se establecen los Derechos Humanos y las libertades fundamentales a los cuales tiene derecho todos los hombres y mujeres, en cualquier parte del mundo y sin discriminación alguna. Proclama derechos tales como el derecho a la vida, libertad, seguridad de la persona, prohibición de la esclavitud y de la servidumbre, prohibición de torturas, tratos crueles, igualdad ante la ley y otros.

Posteriormente la Asamblea General aprobó dos instrumentos de suma trascendencia, uno de ellos el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 3 de enero 1966 y el otro es el llamado Pacto de Derechos Civiles y Políticos del 23 de mayo 1966.

Al hacer referencia al Sistema Europeo, podemos mencionar que los derechos civiles y políticos se encuentran regulados por la Convención de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales (Roma, 4 de Noviembre de 1950), fue completado adicionalmente por cinco protocolos adicionales al mismo. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales son objeto de regulación en la Carta Social Europea de 1961.

El Sistema Interamericano tiene su fundamento en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (1948), la cual sufre transformaciones con la Convención Americana de Derechos Humanos suscrita en 1969, entrando en vigor en 1978, en San José, Costa Rica, posteriormente se adoptó el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como Protocolo de San Salvador en 1988.

La Carta de Bogotá que crea la Organización de Estados Americanos (OEA) proclama entre sus principios el respeto a los derechos fundamentales de la

persona humana. En su preámbulo establece el propósito de consolidar en este continente un régimen de libertad personal y de justicia social.

En el Sistema Africano por su parte la Organización para la Unidad Africana aprobó la Carta de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981).

3.3. La Subjetividad Jurídica Internacional Pasiva del Individuo **“Responsabilidad Internacional”**

Si bien es cierto que el individuo o particular tiene la capacidad de reclamar sus derechos en el ámbito internacional a instancias que reconocen esa subjetividad internacional, de igual manera y en algunos casos el individuo es responsable internacionalmente de violaciones, delitos y crímenes de carácter internacional.

El Derecho Intencional establece determinados tipos delictivos (piratería marítima, ciertos actos ilícitos cometidos a bordo de aeronaves, la violación del Derecho Internacional Humanitario (*ius in bello*), de los crímenes contra la paz, y otros crímenes contra la humanidad), como comportamientos individuales gravemente contrarios a las exigencias éticas elementales de la convivencia internacional. (Ridruejo, 2001)

Cuando los instrumentos internacionales sobre la protección de los derechos del hombre reclaman la irretroactividad de las leyes penales, se está refiriendo a los actos tipificados como delitos, ya sea por el derecho nacional de un propio Estado o por el Derecho Internacional, esto se encuentra establecido en diferentes instrumentos jurídicos internacionales tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1948), Convención Europea de (1950), Pacto Internacional de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), de los que ya he hecho referencia.

De esta manera nace la responsabilidad penal internacional del individuo, teniendo su razón de ser en la comisión de conductas que atentan contra

valores superiores amparados y protegidos por la Comunidad Internacional en su conjunto.

La comunidad internacional ha ido construyendo progresivamente una jurisdicción destinada al juzgamiento y sanción de los responsables de la comisión de estos actos delictivos. Los antecedentes de la responsabilidad internacional del individuo los encontramos a partir de la Segunda Guerra Mundial con la sentencia del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, que desde el juzgamiento de los individuos por los crímenes internacionales cometidos por miembros del eje durante la segunda guerra mundial, se necesitó reconocer la necesidad jurídica internacional del individuo. (Perez-León)

Esta sentencia del Tribunal de Núremberg fue un gran precedente, contradictorio al punto de vista del positivismo extremo, el cual establecía que el Derecho internacional solo era aplicable a los Estados. De igual manera con esta sentencia se demostró que los individuos podían ser declarados culpables por crímenes bajo el Derecho internacional y podían ser sancionados de acuerdo a su capacidad personal.

Los individuos pueden ser procesados y sancionados ante cortes nacionales de cualquier Estado como consecuencia de su responsabilidad internacional individual o también ante una jurisdicción penal internacional con competencia sobre los crímenes debidamente tipificados en el ámbito internacional.

Es importante tomar en cuenta que en la mayor parte de los casos la acción del Derecho internacional ha sido incompleta, debido a que la determinación e imposición de las penas se dejan comúnmente a los sistemas jurídicos de los propios Estados, de igual manera la resistencias políticas de los Estados en cuanto a la creación de tribunales penales internacionales.

Además sirvió de base a la evolución más reciente del Derecho Internacional Penal, específicamente en los casos de los Tribunales Internacionales Penales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda y Sierra Leona, el Proyecto de

Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad y por último, no menos importante, el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional, suscrito en 1998.

El 1 Julio del 2002 entró en vigencia el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, cuya finalidad es evitar la impunidad de los crímenes más graves como los crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y el crimen de agresión. La Corte Penal internacional es el campo por el cual toma lugar la dimensión pasiva de la subjetividad jurídica internacional del individuo.

Su jurisdicción es de carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. Esto es, que en principio los tribunales internos de los Estados tienen prioridad para conocer en un caso, a menos que la cuestión sea introducida ante la Corte por el Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, o que la Corte resuelva que el Estado que tiene jurisdicción no pueda realmente hacerlo.

- Crimen Internacional

Se define al Crimen Internacional como la Violación flagrante de normas consideradas fundamentales para la comunidad internacional, un crimen internacional puede resultar:

- De la violación grave de una responsabilidad internacional de importancia esencial para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.
- De una violación grave de una obligación internacional esencial para la salvaguardia del derecho a la libre determinación de los pueblos
- De la violación grave y en gran escala de una obligación internacional de importancia esencial para la salvaguardia del ser humano

- De la violación grave de una obligación internacional de importancia esencial para la salvaguardia y la protección del ser humano

Delitos Internacionales Según Alfonso Valle Pastora son aquellos delitos que atentan contra la *Ius Gentium* o derechos de gentes y por lo tanto acarrearán responsabilidad penal para los individuos

Por otro lado y según el Estatuto de Roma en su artículo 5 define a los delitos internacionales de la siguiente manera:

1- Genocidio: Según el Art. II. De la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio se entiende por este cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:

- a) Matanza de miembros del grupo.
- b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo.
- c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.
- d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo.
- e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.

2- Lesa Humanidad: cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

- Asesinato
- Exterminio: comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población

- Esclavitud: se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños
- Deportación o traslado forzoso de población: se entenderá el desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional
- Tortura: se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas
- Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable: se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo
- Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte: Por "persecución" se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad
- Desaparición forzada de personas: se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la

suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.

Como crimen de apartheid: se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen

Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

3- Crímenes de Guerra: El crimen de guerra es una violación de las protecciones establecidas por las leyes y las costumbres de la guerra, integradas por las infracciones graves del Derecho Internacional Humanitario cometidas en un conflicto armado y por las violaciones al Derecho Internacional. El término se define en gran medida en el Derecho internacional, incluyendo la Convención de Ginebra. Los malos tratos a prisioneros de guerra y civiles y los genocidios son considerados crímenes de guerra.

A como lo mencionamos anteriormente el 1 de julio de 2002, empezó a funcionar la Corte Penal Internacional en La Haya, con el fin de perseguir los crímenes de guerra cometidos después de dicha fecha. Esta Corte, establecida por el Estatuto de Roma, contempla dentro de los crímenes a perseguir en su artículo 5 a los crímenes de guerra. Dentro de la definición que el mismo Estatuto contempla, en su artículo 8, se señalan entre ellos:

- a- Violación a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949; a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente:
 - Matar intencionalmente;

- Someter a tortura o a otros tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos;
- Infligir deliberadamente grandes sufrimientos o atacar gravemente contra la integridad física o la salud;
- Destruir bienes y apropiarse de ellos de manera no justificada por necesidades militares, a gran escala, ilícita y arbitrariamente;
- Obligar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a prestar servicio en las fuerzas de una Potencia enemiga;
- Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona de sus derechos a un juicio justo e imparcial;
- Someter a deportación, traslado o confinamiento ilegales;
- Tomar rehenes;

b- Violación a las leyes de guerra vigentes, tanto nacionales como internacionales:

- Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades;
- Dirigir intencionalmente ataques contra objetos civiles, es decir, objetos que no son objetivos militares;
- Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles u objetos civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados;
- Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas de vidas, lesiones a civiles o daños a objetos de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio natural que sean claramente excesivos en relación con la ventaja militar general concreta y directa que se prevea;
- Atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, pueblos o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares;

- Causar la muerte o lesiones a un enemigo que haya depuesto las armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido a discreción;
- Utilizar de modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional o las insignias militares o el uniforme del enemigo o de las Naciones Unidas, así como los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra, y causar así la muerte o lesiones graves;
- El traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa o la deportación o el traslado de la totalidad o parte de la población del territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio;
- Los ataques dirigidos intencionalmente contra edificios dedicados al culto religioso, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares;
- Someter a personas que estén en poder del perpetrador a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón de un tratamiento médico, dental u hospitalario, ni se lleven a cabo en su interés, y que causen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud;
- Matar o herir a traición a personas pertenecientes a la nación o al ejército enemigo;
- Declarar que no se dará cuartel;
- Destruir o confiscar bienes del enemigo, a menos que las necesidades de la guerra lo hagan imperativo;
- Declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la parte enemiga;
- Obligar a los nacionales de la parte enemiga a participar en operaciones bélicas dirigidas contra su propio país, aunque hubieran estado a su servicio antes del inicio de la guerra;
- Saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada por asalto;
- Veneno o armas envenenadas;
- Gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material o dispositivo análogo;

- Balas que se abran o aplasten fácilmente en el cuerpo humano, como balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte interior o que tenga incisiones;
 - Emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que, por su propia naturaleza, causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminados en violación del derecho humanitario internacional de los conflictos armados, a condición de que esas armas o esos proyectiles, materiales o métodos de guerra, sean objeto de una prohibición completa y estén incluidos en un anexo del presente Estatuto en virtud de una enmienda aprobada de conformidad con las disposiciones que, sobre el particular, figuran en los artículos 121 y 123;
 - Cometer ultrajes contra la dignidad de la persona, en particular tratos humillantes y degradantes;
 - Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual que constituya una violación grave de los Convenios de Ginebra;
 - Aprovechar la presencia de civiles u otras personas protegidas para que queden inmunes de operaciones militares determinados puntos, zonas o fuerzas militares;
 - Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y vehículos sanitarios, y contra personal habilitado para utilizar los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional;
 - Provocar intencionalmente la inanición de la población civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro de conformidad con los Convenios de Ginebra;
 - Reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades
- c- Violación a las costumbres de la guerra aplicables.

- Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades;
- Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y vehículos sanitarios y contra el personal habilitado para utilizar los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional;
- Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles u objetos civiles con arreglo al derecho de los conflictos armados;
- Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados al culto religioso, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos militares;
- Saquear una ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por asalto;
- Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual que constituya también una violación grave del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra;
- Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o utilizarlos para participar activamente en hostilidades;
- Ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a menos que así lo exija la seguridad de los civiles de que se trate o por razones militares imperativas;
- Matar o herir a traición a un combatiente enemigo;
- Declarar que no se dará cuartel;
- Someter a las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón del tratamiento médico, dental u hospitalario de la persona de que se trate ni se lleven a cabo en

su interés, y que provoquen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud;

- Destruir o confiscar bienes del enemigo, a menos que las necesidades de la guerra lo hagan imperativo;

Los primeros jefes de estado o gobierno acusados de crímenes de guerra fueron el ex primer ministro japonés Hideki Tōjō (en 1946, dentro de los Juicios de Tokio) y el ex presidente yugoslavo Slobodan Milosevic (el año 2002 por orden del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia).

4.- Agresión: En sentido amplio significa ataque armado a una nación contra otra en violación del derecho internacional. Proviene del Latín *aggressio-onis*, de *agrendi*

II CAPÍTULO

LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA

En este capítulo se abordará todo lo relativo a la Corte Centroamericana de Justicia, desde su origen, sus funciones, competencias, normativas, sujetos procesales, etc. Se abordará de manera breve el acceso a los particulares o *ius standi* ante la Corte, ya que será hasta el capítulo III en donde lo estudiaremos a fondo.

De igual manera en este Capítulo abordaremos de manera breve el Derecho de Integración y el Sistema de la Integración Centroamericana por estar intrínsecamente relacionados al funcionamiento y existencia de la Corte Centroamericana de Justicia.

1. EL DERECHO DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA

El Derecho de Integración lo podemos definir como el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los Estados que han decidido integrarse con fines económicos o políticos, y donde existe el propósito de ejercer conjuntamente algunas de sus facultades soberanas, cediendo algunas de sus competencias a tal efecto a órganos creados por ellos mismos.

Para el Profesor Alfonso Valle González, el Derecho de Integración es la disciplina que estudia las normas y principios que inspiran y regulan los procesos de integración. Como cuerpo de normas, se encuentra integrado además del Derecho Comunitario, por aquellas normas contenidas en los Tratados suscritos por los Estados con el objetivo de integrarse y que para su validez, exigen un acto de implantación en los ordenamientos jurídicos internos de los Estados signatarios, usualmente este acto de implantación, consiste en

la aprobación del órgano legislativo y ratificación del Poder Ejecutivo, y son dictadas por órganos de naturaleza intergubernamental, que representan a los Estados. (González, 1997)

1.1 Principios del Derecho de Integración

Los principios esenciales de los Derechos de integración son los siguientes:

Principio de Competencia de Atribución: se refiere a que la Comunidad tiene la obligación y el derecho de actuar dentro de las competencias atribuidas o conferidas.

Principio de Irreversibilidad de Competencia Comunitaria: este principio se refiere a que los Estados no pueden tomar una medida que pueda revertir la soberanía concedida y ejercida a través de Órganos Supranacionales.

Principio de No Reservas: en los procesos de Integración, los Estados aceptan no interponer reservas a los Tratados ni a los actos adoptados en su aplicación.

Principio de Cooperación con la Comunidad y de buena fe y Cooperación leal con las Instituciones: los Estados están comprometidos a impulsar la cooperación comunitaria de buena fe y de igual manera no pueden los Estados miembros entorpecer la acción de la comunidad o dificultar sus acciones normativas futuras internas o internacionales.

Principio de Progresividad: tanto la utilización de los instrumentos específicos de la integración como el logro mismo de sus objetivos se desarrollan conforme a una idea de progresividad. Esta idea es reflejo del método funcionalista, una etapa no es todo en sí misma, sino fracción de un recorrido que debe ser realizado hasta el final, cada etapa posee una unidad interna y conlleva acciones que deben ser emprendidas concurrentemente.

Principio de Unanimidad y Participación de las instituciones en la revisión de los Tratados Constitutivos: este principio establece un procedimiento único para la revisión de un Tratado constitutivo que exige además de la participación de las instituciones comunitarias, el acuerdo unánime de los Estados miembros que ha de constar, a su vez, en un Tratado modificativo.

Principio de Seguridad Jurídica: constituye la seguridad jurídica un derecho fundamental que tiene toda persona frente a las autoridades y un deber primordial de las autoridades hacia las personas, es la previsibilidad de las conductas propias y ajenas, de los efectos que puede causar la interpretación de la normativa por parte de las autoridades encargadas en su aplicación.

Principio de Legalidad: este principio establece que las autoridades comunitarias y las de los Estados miembros, no tiene más facultades o atribuciones que las conferidas expresamente en las normativas comunitarias, así como en las constituciones de los Estados Miembros, en las cuales está consagrado este principio.

Principio de Autonomía Funcional de los Órganos e instituciones de la Integración: este principio garantiza el funcionamiento de la estructura institucional, lo que permite el desarrollo equilibrado y armónico entre los distintos sectores del Sistema de la Integración Centroamericana, ya que vincula sus órganos e instituciones, pero respeta la autonomía e independencia funcional actuando cada uno conforme a sus atribuciones.

Principio de Publicidad de los Actos de los Órganos e Instituciones de Sistema: Estipulado en el artículo 10 del Protocolo de Tegucigalpa. Permite y garantiza a la población de la Comunidad involucrarse cada vez más en lo que es el cumplimiento de los propósitos y Principios del Sistema de la Integración. Además, la publicidad da certeza a lo actuado por los Órganos e Instituciones comunitarios.

Los Procesos de Integración tienen su origen normativo en la suscripción de Tratados Internacionales por parte de los Estados miembros que hacen uso de

sus facultades soberanas para negociar y dar su consentimiento en la creación de nuevos Órganos e instituciones cuyas competencias y funciones están debidamente fijadas en los Tratados constitutivos, señalando también las políticas públicas regionales o comunes que deben cumplir. (Salazar Grande & Ulate Chacón, 1999)

El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) es una Organización Regional de Integración, y surge con la firma del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, por los países de la Región Centroamericana, éste se abordará a continuación.

El SICA participa de una doble Naturaleza Jurídica, desde el ámbito de Derecho Internacional Público es una organización internacional convencional en sus relaciones con otros Estados u organizaciones internacionales. Puede celebrar convenios, adquirir empréstitos, participar en juicios, realizar su derecho de delegación activa o pasiva ante organizaciones o Estados, es responsable internacionalmente y conserva su personalidad jurídica como sujeto de Derecho Internacional, en este punto la vida jurídica del SICA, ha llevado en su proceso de formación el cumplimiento de los requisitos del Derecho internacional, mediante la suscripción del Tratado, la ratificación de los Estados nacionales y su depósito posterior ante la Secretaría de la Organización de Naciones Unidas.

Desde el ámbito interno del proceso de Integración, para los siete países miembros se trata de una organización de carácter comunitario o de integración, con objetivos y propósitos propios, el cual se desarrollará en el próximo apartado.

2. EL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA)

2.1. Antecedentes

El día 14 de octubre del año 1951, en el marco de una extensa reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los países Centroamericanos, desarrollada en la ciudad de San Salvador, se produjo la firma del documento conocido como la Carta de San Salvador, el cual dio origen a la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA).

La Organización de Estados Centroamericanos integrada por Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador se crea con el objetivo de promover la cooperación e integración regional, el Órgano supremo de esta Organización era la Conferencia de Jefes de Estados.

En los diez años siguientes, la ODECA jugó un papel de gran importancia en el proceso de integración centroamericana, al lograr que se sometieran a discusión intensa en las distintas sociedades y círculos gubernamentales de la región, temas tales como la unificación de las señales de tránsito, de los programas educativos, de los procesos aduanales, de las políticas culturales, el Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, y del Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana, etc. (Sistema de la Integración Centroamericana, 2009)

En el año de 1962, los Gobiernos de Costa Rica, Honduras, y como nuevo miembro Guatemala consideraron que era necesario dotar a los cinco Estados de un instrumento más eficaz y que aseguraran su progreso económico y social, eliminando las barreras que los dividían, mejorando en forma constante sus condiciones de vida de sus pueblos y garantizaron la estabilidad y la expansión de la industria y confirmaron la solidaridad centroamericana,

El 13 de diciembre de 1991, en un día histórico para la región, en el marco de la XI Reunión de Presidentes Centroamericanos, realizada en Tegucigalpa, Honduras, se firmó el Protocolo de Tegucigalpa, el cual dio origen al Sistema

de la Integración Centroamericana (SICA), como un nuevo marco jurídico-político para todos los niveles y ámbitos de la Integración Centroamericana, tales como los aspectos económicos, sociales, culturales, políticos y ecológicos que permitieran visualizar un desarrollo integral para la región, esta suscripción fue un paso histórico de los países centroamericanos para su integración, ya que el Protocolo de Tegucigalpa es uno de los Instrumentos Integracionistas existente más completo en los procesos de Integración en el mundo.

2.2. Definición e Importancia del Sistema de la Integración Centroamericana.

EL SICA es el marco institucional de la Integración Regional de Centroamérica, creado por los Estados de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Posteriormente se adhirió Belice como miembro pleno. Asimismo, participan la República Dominicana como Estado Asociado; la República Argentina, la República de Chile y la República Federativa del Brasil como Observadores Regionales; la República de China (Taiwán), el Reino de España y la República Federal de Alemania, la República Italiana y Japón, como Observadores Extra regionales. Cuenta con una Secretaría General del SICA cuya sede se encuentra ubicada en la República de El Salvador.

La creación del SICA fue respaldada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quedando el Protocolo de Tegucigalpa debidamente inscrito ante la misma. Esto permite que sea invocado internacionalmente y, además, le permite a los órganos e instituciones regionales del SICA relacionarse con el Sistema de las Naciones Unidas. (Sistema de la Integración Centroamericana, 2009)

El SICA tiene categoría de Observador Permanente de dicha Organización y mantiene vínculos de diálogo y cooperación con la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comunidad Andina (CAN), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Asociación de Estados del Caribe (AEC), la Unión Europea (UE) y otros esquemas de

integración a nivel mundial, así como diversas instituciones internacionales. (Sistema de la Integración Centroamericana, 2009)

El Sistema se diseñó tomando en cuenta las experiencias anteriores para la unificación de la región, así como las lecciones legadas por los hechos históricos de la región, tales como las crisis políticas y los conflictos armados. Con base en esto, y sumadas las transformaciones constitucionales internas y la existencia de regímenes democráticos en Centroamérica, se estableció su objetivo fundamental, el cual es la realización de la integración de Centroamérica, para constituir la en una Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo

2.3. Marco Jurídico del SICA

Protocolo de Tegucigalpa

A como se mencionó anteriormente el 13 de diciembre de 1991, se constituyó el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, con la firma del Protocolo de Tegucigalpa, que reformó la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), de 1962. Este Protocolo consagra la nueva visión de Centroamérica como una región de paz, libertad, democracia y desarrollo.

Protocolo al Tratado General de Integración Económica (Protocolo de Guatemala)

El 29 de octubre de 1993 se suscribió el Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana, en el que las partes se comprometieron a alcanzar, de manera voluntaria, gradual, complementaria y progresiva, la Unión Económica Centroamericana. Para ello constituyeron el Subsistema de Integración Económica, cuyo órgano técnico y administrativo es la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), que tiene su sede en Guatemala.

Tratado de Integración Social

El 30 de marzo de 1995, se suscribió el Tratado de la Integración Social Centroamericana, el cual organiza, regula y estructura el Subsistema Social, que comprende el área social del SICA. Fue constituido para impulsar la coordinación, armonización y convergencia de las políticas sociales entre sí y con las demás políticas de los Estados Miembros del SICA. Su sede está en las oficinas de la Secretaría General del SICA.

Alianza para el Desarrollo Sostenible

El 12 de octubre de 1994 se constituyó la Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), que consiste en una estrategia integral de desarrollo regional que abarca cuatro áreas prioritarias: democracia, desarrollo sociocultural, desarrollo económico y manejo sostenible de los recursos naturales y mejora de la calidad ambiental.

Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica.

El Tratado Marco de Seguridad Democrática fue suscrito en San Pedro Sula, Honduras, el 15 de diciembre de 1995. Dicho instrumento instituyó el Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática, el cual se basa en la democracia y el fortalecimiento de sus instituciones y el Estado de Derecho; en la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto y en el irrestricto respecto de todos los derechos humanos en los Estados Centroamericanos.

Los fundamentos del Modelo de Seguridad Democrática son entre otros, el fortalecimiento del poder civil, el balance razonable de fuerzas, la seguridad de las personas y sus bienes, la erradicación de la violencia, la corrupción, la impunidad, el terrorismo, el combate a la narcoactividad y al tráfico de armas.

2.4. Propósitos del SICA

El SICA tiene por objetivo fundamental la realización de la integración de Centroamérica, para constituirla como Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo. En ese sentido, se reafirman los siguientes propósitos:

- a. Consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base de la existencia de Gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto, y del irrestricto respeto a los Derechos Humanos.
- b. Concretar un nuevo modelo de seguridad regional sustentado en un balance razonable de fuerzas, el fortalecimiento del poder civil, la superación de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenido, la protección del medio ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de armas.
- c. Impulsar un régimen amplio de libertad que asegure el desarrollo pleno y armonioso del individuo y de la sociedad en su conjunto.
- d. Lograr un Sistema regional de bienestar y justicia económica y social para los pueblos Centroamericanos.
- e. Alcanzar una unión económica y fortalecer el Sistema financiero Centroamericano.
- f. Fortalecer la región como bloque económico para insertarlo exitosamente en la economía internacional.
- g. Reafirmar y consolidar la autodeterminación de Centroamérica en sus relaciones externas, mediante una estrategia única que fortalezca y amplíe la participación de la región, en su conjunto, en el ámbito internacional.
- h. Promover, en forma armónica y equilibrada, el desarrollo sostenido económico, social, cultural y político de los Estados miembros y de la región en su conjunto.
- i. Establecer acciones concertadas dirigidas a la preservación del medio ambiente por medio del respeto y armonía con la naturaleza,

asegurando el equilibrado desarrollo y explotación racional de los recursos naturales del área, con miras al establecimiento de un Nuevo Orden Ecológico en la región.

- j. Conformar el Sistema de la Integración Centroamericana sustentado en un ordenamiento institucional y jurídico, y fundamentado asimismo en el respeto mutuo entre los Estados miembros.

2.5. Principios del SICA

EL Sistema de la Integración Centroamericana para su debido funcionamiento deberá de cumplir los siguientes principios:

- a. La tutela, respeto y promoción de los Derechos Humanos constituyen la base fundamental del Sistema de la Integración Centroamericana;
- b. Paz, Democracia, Desarrollo y Libertad, son un todo armónico e indivisible que orientará las actuaciones de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana;
- c. La identidad Centroamericana como manifestación activa de los intereses regionales y de la voluntad de participar en la consolidación de la integración de la Región.
- d. La solidaridad Centroamericana como expresión de su profunda interdependencia, origen y destino común;
- e. La gradualidad, especificidad y progresividad del proceso de integración económica, sustentado en el desarrollo regional armónico y equilibrado; y el tratamiento especial a países miembros de menor desarrollo relativo; la equidad y reciprocidad; y la Cláusula Centroamericana de Excepción.
- f. La globalidad del proceso de integración y la participación democrática, en el mismo, de todos los sectores sociales.
- g. La seguridad jurídica de las relaciones entre los Estados Miembros y la solución Pacífica de sus controversias.

- h. La buena fe de los Estados Miembros en el cumplimiento de sus obligaciones, absteniéndose de establecer, convenir o adoptar medida alguna que sea contraria a las disposiciones de este instrumento o que obstaculice el cumplimiento de los principios fundamentales del Sistema de la Integración Centroamericana o la consecución de sus objetivos
- i. El respeto a los principios y normas de las Cartas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), y las Declaraciones emitidas en las Reuniones Presidenciales Centroamericanas desde mayo de 1986.

2.6. Órganos del SICA.

Para la realización de los fines del Sistema de la Integración Centroamericana se establecen los siguientes Órganos:

1. **La Reunión de Presidentes:** La Reunión de Presidentes es el Órgano Supremo del Sistema de la Integración Centroamericana. Se integra por los Presidentes constitucionales de los Estados Miembros. Dicho órgano se reunirá ordinariamente cada semestre y de forma extraordinaria cuando lo tengan a bien los presidentes.

Le corresponde a la Reunión de Presidentes conocer de los asuntos de la región que requieran de sus decisiones, en materia de democracia, desarrollo, libertad, paz y seguridad.

2. **El Consejo de Ministros:** El artículo 17 del Protocolo de Tegucigalpa establece que es el Órgano principal de coordinación y de las propuestas de los distintos foros de Ministros, los que con sus observaciones y recomendaciones son elevados al conocimiento de la Reunión de Presidentes. El Consejo de Ministros estará integrado por los Ministros del Ramo y, en caso extraordinario, por un Viceministro debidamente facultado. El Ministro del Ramo del Estado Miembro que sea el Vocero de Centroamérica, según el Artículo 14 del Protocolo de

Tegucigalpa, presidirá en ese mismo semestre el Consejo de Ministros respectivo.

Es competencia del Consejo de los Ministros de Relaciones Exteriores lo relativo al proceso de democratización, pacificación, seguridad regional y otros temas políticos, así como la coordinación y seguimiento de las decisiones y medidas políticas de carácter económico, social y cultural que puedan tener repercusiones internacionales.

Le corresponde igualmente la aprobación del presupuesto de la organización central, la elaboración de la agenda y preparación de las Reuniones de Presidentes, la representación de la región ante la comunidad internacional, la ejecución de las decisiones de los Presidentes en materia de política internacional regional, la recomendación sobre el ingreso de nuevos miembros al SICA, así como la decisión sobre la admisión de observadores a la misma.

3. **El Comité Ejecutivo:** este órgano se compone de un representante de cada país miembro nombrado por sus presidentes por intermedio de los Ministros de Relaciones Exteriores. Los miembros de este comité son funcionarios de los Estados y están encargados de la función ejecutiva o de administración.

Sus competencias son de control y monitoreo, se desempeña como garante de la ejecución eficiente de las decisiones de la Reunión de Presidentes, de igual manera tutela el cumplimiento del Derecho de la Integración Centroamericana y revisa los informes semestrales de las Actividades de la Secretaría General y demás secretarías especializadas.

4. **La Secretaría General:** es un órgano unipersonal y permanente que representa los intereses regionales ya que es la encargada de velar por el interés de la Organización en su conjunto.

Está compuesta por un Secretario General el cual es designado por la reunión de presidentes para desempeñar el cargo por un período de 4 años que representa legalmente a éste órgano.

Además de actuar como secretaría permanente de las Reuniones de Presidentes, también tiene las funciones de ejecutar y coordinar los mandatos derivados de los demás órganos, también a solicitud del Consejo de Ministros puede representar al SICA en el ámbito internacional y gestionar ante los Estados u Organismos financieros la cooperación financiera necesaria para el buen funcionamiento del SICA.

De igual manera forman parte de este Sistema:

1. **La Reunión de Vice Presidentes:** La Reunión de Vicepresidentes y Designados a la Presidencia de la República, que será un Órgano de Asesoría y Consulta. Dicha Reunión se realizará ordinariamente cada semestre y extraordinariamente, cuando los Vicepresidentes así lo deseen. Sus resoluciones serán adoptadas por consenso.
2. **El Parlamento Centroamericano:** es un órgano regional de planteamiento, análisis y recomendación sobre asuntos políticos, económicos, sociales y culturales de interés común, con el fin de lograr una convivencia pacífica de un marco de seguridad y bienestar social, que se fundamenta en la democracia representativa, en el pluralismo y en el respeto de las legislaciones nacionales y al Derecho Intencional.

Está compuesto por 2 categorías de miembros de distintas naturalezas, por una parte los diputados que surjan del voto popular que corresponde a 20 cada Estado miembro (con sus debidos suplentes), los cuales son electos por un período de 5 años, y la otra categoría está compuesta por los presidentes y vicepresidentes de los Estados Centroamericanos cuando estos concluyan sus mandatos quienes duran en sus escaños el período de los mandatos presidenciales.

3. **El Comité Consultivo:** El Comité Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana (CC-SICA) es el órgano de la sociedad civil, independiente y autónomo, convocado para fortalecer la integración, el desarrollo y la democracia en Centroamérica desde su fundación y constitución definitiva, como órgano del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), en el año de 1996.

Se constituyó el Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroamericana de conformidad con el Art. 12 del Protocolo de Tegucigalpa (1991) y el numeral 34 de la Agenda de Guatemala 1993 de la XV Reunión de Presidentes Centroamericanos.

4. **La Corte Centroamericana de Justicia:** La cual se abordará a continuación.

3. LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA

La Corte centroamericana de Justicia (CCJ) es el órgano jurisdiccional supranacional, principal y permanente del sistema de la Integración Centroamericana y es el encargado de velar por la Interpretación y aplicación del Derecho Comunitario Centroamericano, ella representa los más altos valores de la conciencia integracionista de la región.

Es *principal* por cuanto tiene atribuida la competencia de velar por la interpretación y aplicación de la normativa comunitaria; permanente, en cuanto no puede aceptarse por un período determinado, ni retirarse; obligatoria, dado que se le pueden someter demandas y consultas cuyos fallos son obligatorios y producen cosa juzgada; es exclusiva respecto de cualquier otra forma de solución (salvo el caso, como veremos, de las controversias comerciales entre Estados); y de única instancia, por cuanto lo resuelto no puede ser objeto de revisión por otro órgano.

La jurisdicción y competencia regional de la corte son de carácter obligatorio para los Estados. La Normativa Jurídica de La Corte Centroamericana de Justicia, forma parte del derecho comunitario Centroamericano. Fue creado en la interpretación y ejecución del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA) y sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo. El Protocolo de Tegucigalpa crea La Corte Centroamericana de Justicia en el artículo 12, y además remite a su Estatuto para regular la integración, funcionamiento y atribuciones de ese Órgano Judicial Supranacional. (Corte Centroamericana de Justicia, 2009)

En el Convenio de Estatuto de la Corte se amplían sus facultades y competencia y se la convierte además en Tribunal Internacional, en Tribunal de Arbitraje, Tribunal de Consulta y (con algunas restricciones) en Tribunal Constitucional. El artículo 1 del referido Convenio de Estatuto establece que ésta queda constituida y funcionará conforme a las disposiciones de dicho Estatuto, Ordenanza, Reglamentos y Resoluciones que emita ella misma.

Este punto se abordará de manera más específica en el transcurso del Desarrollo de éste capítulo.

3.1. Antecedentes Históricos

Para el año de 1823, se instaló el Primer Congreso Centroamericano el cual decretó el 22 de Noviembre de 1824 la Constitución de la República Federal de Centroamérica, firmada en ese entonces por los Estados de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Dicha Constitución en su Título VIII crea el Primer Tribunal Centroamericano de Justicia bajo el nombre de Corte Suprema de Justicia con jurisdicción para resolver controversias de ciudadanos o habitantes de diferentes Estados.

Después de concluir la Federación en 1838, El Salvador, Honduras y Nicaragua suscriben en 1897 el Pacto de Amapala por el cual fue conformada la República Mayor de Centroamérica y en 1898 la Asamblea Constituyente

proclamó la Constitución Política para los Estados Unidos de Centroamérica, estableciendo que “El Poder Judicial será ejercido por la Suprema Corte de Justicia Federal y por los demás Tribunales que establezcan las leyes”. (Corte Centroamericana de Justicia, 2009)

A este Tribunal Federal se le otorgó competencia para conocer de todas las controversias suscitadas en aplicación de las leyes federales, derecho marítimo, controversias por contratos entre el gobierno federal con los Estados o los particulares, asuntos contenciosos y otras competencias. Sin embargo ese nuevo intento de integración finaliza en el año de 1898 por la separación del Estado de El Salvador de esa Unión de Estados.

3.2. La Corte de Justicia Centroamericana “Corte de Cartago”

La “Corte de Justicia Centroamericana”, llamada “Corte de Cartago”, fue creada en el marco del Tratado Washington mediante una convención suscrita el 20 de diciembre de 1907, por los Estados de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Funcionó de 1908 a 1918, el primer año en Cartago, Costa Rica, y los siguientes años en la capital San José. Fue el primer Tribunal Internacional de su género en el mundo, de funcionamiento permanente, con competencia obligatoria, y el primero en admitir el acceso de los particulares (Ius Standi) a su jurisdicción. Finalizó al concluir su período de creación de 10 años. La actual Corte es heredera del acervo jurídico de aquel Tribunal.

La Corte de Cartago es uno de los sólidos cimientos de la construcción Centroamericana, con apenas 10 años de actuación, representa un viraje en la forma de conducir las relaciones entre los Estados y los habitantes del Istmo Centroamericano y así tratar de poner fin a las controversias que surgían entre los hermanos nicaragüenses. (Gutierrez, 2009)

La Corte de Justicia Centroamericana tenía por objeto garantizar con su autoridad, basada en el honor de los Estados y dentro de los límites de la intervención que le ha sido concedida, los derechos de cada uno de ellos en sus recíprocas relaciones, así como mantener en éstas la paz y la armonía, y es por su naturaleza, por sus atribuciones y por el carácter de su jurisdicción, un Tribunal Permanente de Justicia Internacional, con potestad para juzgar y resolver a petición de parte, todos los asuntos comprendidos en su ley constitutiva y para sostener y administrar, conforme a la misma, la oficina de su despacho y los intereses de ésta.

3.2.1. Normativa Jurídica

La Normativa Jurídica de la Corte de Cartago se integraba por los Pactos de Washington 1923, la Convención para el establecimiento de una Corte de Justicia Centroamérica, el Protocolo adicional a la Convención para el establecimiento de una Corte de Justicia Centroamericana, el Reglamento de la Corte de Justicia Centroamericana y por la Ordenanza de Procedimiento de la Corte de Justicia Centroamericana.

Este Tribunal conoció en total de 10 casos, 7 de ellos controversias entre particulares y/o contra Estados y las otras 3 controversias entre los mismos Estados Centroamericanos, de estas 10 demandas conocidas por La Corte sólo cuatro de ellas fueron admitidas, incluyendo la de un particular contra un Estado centroamericano.

3.2.2. Acceso de los Particulares a la Jurisdicción de la Corte de Cartago (*IUS STANDI*)

Los particulares tenían permitido acceder a la Jurisdicción de la Corte de Justicia Centroamericana, y esto se hacía referencia en los Artículos 2 y 3 de la Convención para el establecimiento de una Corte de Justicia Centroamericana:

Art 2: *“Esta Corte conocerá asimismo de las cuestiones que inicien particulares de un país centroamericano contra alguno de los otros gobiernos contratantes, por violación de Tratados o Convenciones, y en los demás casos de carácter internacional, sea que su propio gobierno apoye o no dicha reclamación; y con tal que se hubiere agotado los recursos que las leyes del respectivo país concediere contra la violación, o se demostrare denegación de Justicia”.*

Art. 3: *“También conocerá de los casos que ocurran entre alguno de los Gobiernos contratantes y personas particulares, cuando de común acuerdo le fueren sometidos”.*

Controversias entre Particulares y/o contra Estados (entre paréntesis año de la resolución final): (Gutierrez, 2009)

Como se dijo anteriormente, durante el corto tiempo que funcionó la Corte de Justicia Centroamericana llegó a conocer de siete demandas interpuestas por un particular estas fueron: Onofre Silva Castillo contra el Estado del El Salvador (1908), Pedro Andrés Fornos Díaz contra el Estado de Guatemala (1909), Laureano Irías contra José Santos Zelaya (1909), Salvador Cerda Contra el Estado de Costa Rica (1910) , Felipe Molina Larios contra el Estado de Honduras (1913), Alejandro Bermúdez Núñez contra el Estado de Costa Rica (1914) , Daniel Escalante y otros contra el Estado de Costa Rica (1914).

Estos casos en particular se desarrollarán en el Capítulo III.

Controversias entre Estados de Centroamérica

En este sentido la Corte de Cartago llegó a conocer de tres casos específicos de controversias entre los Estados Centroamericanos los cuales fueron: la demanda del Estado de Honduras contra los Estados del El Salvador y Guatemala (1908); La demanda del Estado de Costa Rica contra el Estado de

Nicaragua (1916) y por último la demanda del Estado de El Salvador contra el Estado de Nicaragua (1917).

3.3. La actual Corte centroamericana de justicia (CCJ)

El día 13 de diciembre del año 1991, se crea el Protocolo de Tegucigalpa y éste a la vez en su artículo 12 le da vida a La Corte Centroamericana de Justicia para garantizar el respeto del derecho, en la interpretación y ejecución de ese Protocolo, y sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo, dejando la integración, funcionamiento y atribuciones para ser regulados en el Estatuto de la misma, el cual debería ser negociado y suscrito por los Estados Miembros dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor del Protocolo.

En la XIII Cumbre de Presidentes del Istmo Centroamericano celebrada en Panamá el 9, 10 y 11 de diciembre de 1992, un año después de la creación de La Corte, se suscribió por los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia previsto en el Protocolo de Tegucigalpa, con la presencia de los Presidentes de las Cortes Supremas de Justicia de Centroamérica, quienes firmaron el documento en calidad de testigos de solemnidad.

La creación y funcionamiento de la Corte Centroamericana de Justicia, se vio favorecida por las reuniones anuales que a partir de 1989 celebraron las Cortes Supremas de Justicia del área, con el propósito de alcanzar lo que se ha dado en llamar solidaridad judicial centroamericana. Desde su primera Reunión, la creación de la Corte Centroamericana de Justicia fue uno de los objetivos primordiales de las Cortes Supremas, las cuales comenzaron a trabajar en un anteproyecto que presentó la delegación de Guatemala, que fue el país donde se efectuó la primera reunión. En la segunda reunión, celebrada en San Salvador, las Cortes Supremas crearon el Consejo Judicial Centroamericano,

integrado por todos sus Presidentes. Panamá se adhirió al Consejo Judicial en la tercera reunión celebrada en Honduras.

En la cuarta reunión celebrada en la ciudad de Managua, las Cortes Supremas de Justicia prepararon el proyecto de Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia y los transmitieron a los Poderes Ejecutivos de Centroamérica para su consideración. Los Presidentes de las Repúblicas de Centroamérica aprobaron y suscribieron en Panamá el Convenio de Estatuto de La Corte Centroamericana de Justicia y decidieron su Sede.

Las Cortes Supremas de Justicia de El Salvador, Honduras y Nicaragua eligieron cada una dos magistrados titulares y dos suplentes para integrarla, ya que el Estatuto de La Corte había entrado en vigor para sus respectivos Estados el 2 de Febrero de 1994.

La Corte inició sus funciones el 12 de octubre de 1994 en el edificio situado en el Reparto Bolonia No. 1804 de la ciudad de Managua, la cual ha sido su Sede desde su instalación.

El 12 de octubre de 1994, en una histórica sesión La Corte se instaló en la ciudad de Managua, Nicaragua, Centroamérica, y da inicio las funciones de la Corte Centroamericana de Justicia integrándose con los siguientes Magistrados Titulares y Suplentes: Por El Salvador, Doctores Jorge Antonio Giammattei Avilés, Fabio Hércules Pineda, en su calidad de Primer y Segundo Magistrado Titular y Gabriel Mauricio Gutiérrez Castro y José Antonio Dueñas, en su calidad de Primer y Segundo Magistrado Suplente; por Honduras Abogados Roberto Ramírez y Adolfo León Gómez, en su calidad de Primer y Segundo Magistrado Titular y Jorge Adalberto Vásquez Martínez y Francisco Darío Lobo Lara, en su calidad de Primer y Segundo Magistrado Suplente; y por Nicaragua Doctores Orlando Trejos Somarriba y Rafael Chamorro Mora, en su calidad de Primer y Segundo Magistrado Titular y Leonte Valle López y Uriel Mendieta Gutiérrez, en calidad de Primer y Segundo Magistrado Suplente, los así

reunidos con excepción del Doctor Orlando Trejos Somarriba, solemnemente se declararon constituidos e inician funciones como Corte Centroamericana de Justicia.

La actual Corte Centroamericana de Justicia en el período 2010-2011 está integrada con los siguientes Magistrados y Magistrada Titulares: Doctor. Alejandro Gómez Vides Presidente, Doctor. Francisco Darío Lobo Lara Vicepresidente, Doctora Silvia Rosales Bolaños, Doctor Ricardo Acevedo Peralta, Doctor Carlos Guerra Gallardo y Doctor Guillermo Pérez-Cadalso Arias.

Magistrados Suplentes por Nicaragua: Doctor César Vega Masís, Doctora Josefina Ramos Mendoza; por El Salvador, Doctor Julio Enrique Acosta Baires y Doctora. María Silvia Guillén, y por el Estado de Honduras, Doctor José Antonio Gutiérrez Navas.

3.3.1. Organización de la CCJ

La Corte está integrada por dos Magistrados Titulares por cada uno de los Estados que suscribieron el Convenio de Estatuto de la misma y para quienes se encuentre vigente, teniendo cada Magistrado titular su correspondiente suplente.

Tanto los Magistrados Titulares como los suplentes son designados por las Cortes Supremas de Justicia de sus respectivos países y deberán reunir además de las condiciones exigidas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos Estados alta consideración moral.

Una vez efectuada la designación del Magistrado deberá, a más tardar treinta días después de su nominación prestar, ante el Consejo Judicial Centroamericano, el juramento de que ejercerá sus funciones a conciencia y con justicia, con absoluta imparcialidad e independencia y que guardará el debido secreto en relación a las deliberaciones de La Corte.

La Corte tiene un Presidente y un Vicepresidente que ejercerán sus cargos durante un año. La Presidencia será ejercida sucesivamente por uno de los Magistrados Titulares en el orden alfabético de los nombres de sus respectivos Estados. El Vicepresidente electo deberá ser siempre de distinta nacionalidad a la del Presidente. En caso de que nuevos Magistrados de Estados Miembros se incorporen a La Corte, les corresponderá el ejercicio de la Presidencia respetando el orden alfabético mencionado hasta después de haberse agotado el orden de los integrantes iniciales que determinaron su vigencia.

El periodo de los Magistrados Titulares y Suplentes es de diez años y se contará a partir de la fecha de su toma de posesión. Durante éste lapso no podrán desempeñar otras actividades profesionales, remuneradas o no, excepto las de carácter docente, debiendo abstenerse de realizar cualquier actuación incompatible con el carácter y dignidad de sus cargos. (Corte Centroamericana de Justicia, 2009)

Los Magistrados Titulares y Suplentes gozan en todos los Estados miembros de los mismos privilegios e inmunidades reconocidos a los representantes diplomáticos extranjeros.

Además en el seno de La Corte es nombrado un Secretario General a cargo de quien es confiada la conducción y dirección adecuada de las funciones institucionales de La Corte siendo además la Secretaría General el Órgano de Comunicación de ella.

El Secretario General es la máxima autoridad administrativa de la Oficina y sus funciones además de estar establecidas en el Reglamento de La Corte son reguladas por el Presidente y Vicepresidente de la misma.

Entre los requisitos exigidos para desempeñarse como Secretario General pueden mencionarse el ser mayor de veinticinco años de edad; ser centroamericano de origen; estar en goce de derechos ciudadanos; ser de notoria buena conducta; ser abogado en ejercicio y tener experiencia profesional no menor de cinco años.

Al Secretario General le corresponde entre otras atribuciones expedir certificaciones así como cualquier otro documento autorizado por de La Corte; autenticar los acuerdos y las providencias adoptadas por La Corte; llevar registro, día a día, de las resoluciones que se dicten en el Tribunal; promover la cooperación, asistencia y comunicación entre los organismos judiciales a nivel regional; divulgar los objetivos de La Corte, activar las oficinas de atención al público y dinamizar los canales de información de la ciudadanía sobre las distintas actividades que se realizan en el Tribunal y cumplir con las orientaciones emanadas de la Presidencia, Vicepresidencia y Magistrados, así como cumplir y hacer cumplir lo ordenado en el Reglamento de La Corte y Ordenanzas de la misma.

3.3.2. Competencia de la CCJ

Las Competencias de la CCJ son bastante amplias y según el Estatuto de la misma en su Artículo 22, establece que la Corte podrá: (Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, 1992)

a) Conocer, a solicitud de cualquiera de los Estados miembros, de las controversias que se susciten entre ellos. Se exceptúan las controversias fronterizas, territoriales y marítimas, para cuyo conocimiento se requiere la solicitud de todas las partes concernidas. Previamente las respectivas Cancillerías deberán procurar un avenimiento, sin perjuicio de poder intentarlo posteriormente en cualquier estado del juicio.

b) Conocer de las acciones de nulidad y de incumplimiento de los acuerdos de los organismos del Sistema de la Integración Centroamericana.

c) Conocer, a solicitud de cualquier interesado, acerca de las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o de cualquier otra clase dictadas por un Estado, cuando afecten los Convenios, Tratados y de cualquier otra

normativa del Derecho de la Integración Centroamericana, o de los Acuerdos o resoluciones de sus órganos u organismos;

ch) Conocer y fallar, si así lo decide, como árbitro, de los asuntos en que las partes la hubieren solicitado como Tribunal competente. También podrá decidir, conocer y resolver si los interesados, lo convienen;

d) Actuar como Tribunal de Consulta Permanente de las Cortes Supremas de Justicia de los Estados, con carácter ilustrativo;

e) Actuar como órgano de Consulta de los órganos u organismos del Sistema de la Integración Centroamericana, en la interpretación y aplicación del "Protocolo de Tegucigalpa de reformas a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA)", y de los instrumentos complementarios y actos derivados de los mismos;

f) Conocer y resolver a solicitud del agraviado de conflictos que puedan surgir entre los Poderes u Órganos fundamentales de los Estados, y cuando de hecho no se respeten los fallos judiciales;

g) Conocer de los asuntos que someta directa e individualmente cualquier afectado por los acuerdos del Órgano u Organismo del Sistema de la Integración Centroamericana;

h) Conocer de las controversias o cuestiones que surjan entre un Estado Centroamericano y otro que no lo sea, cuando de común acuerdo le sean sometidos;

i) Hacer estudios comparativos de las Legislaciones de Centroamérica para lograr su armonización y elaborar proyectos de leyes uniformes para realizar la integración jurídica de Centroamérica. Esta labor la realizará en forma directa o por medio de institutos u organismos especializados como el Consejo Judicial Centroamericano o el Instituto Centroamericano de Derecho de Integración;

j) Conocer en última instancia, en apelación, de las resoluciones administrativas, dictadas por los Órganos u Organismos del Sistema de la Integración Centroamericana, que afecten directamente a un miembro del personal del mismo y cuya reposición haya sido denegada;

k) Resolver toda consulta prejudicial requerida por todo Juez o Tribunal Judicial que estuviere conociendo de un caso pendiente de fallo encaminada a obtener la aplicación o interpretación uniforme de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del "Sistema de la Integración Centroamericana", creado por el "Protocolo de Tegucigalpa", sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo.

3.3.3. Normativa Jurídica

La Normativa Jurídica de La Corte Centroamericana de Justicia, forma parte del nuevo derecho comunitario centroamericano, creado por este Órgano Judicial de la Integración que garantiza el respeto del derecho, en la interpretación y ejecución del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA) y sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo.

A continuación se mencionara la Normativa Jurídica de la CCJ:

- **El Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de Organización de los Estados Centroamericanos** es el instrumento que modifica la estructura institucional de Centroamérica, regulada anteriormente como ODECA, y a ella estarán vinculados los Órganos e Instituciones de integración, los que gozarán de autonomía funcional en el marco de una necesaria y coherente coordinación intersectorial que asegure la ejecución eficiente y el seguimiento constante de las decisiones emanadas de las Reuniones de Presidentes.

- **Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia** instrumento encargado de regular el funcionamiento y atribuciones de la Corte Centroamericana de Justicia. Los países que ratificaron el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia fueron Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá.
- **Reglamento General a la Corte Centroamericana de Justicia** el cual tiene por objeto regular la organización de la Corte Centroamericana de Justicia y el ejercicio de la función administrativa que a ella le corresponde, con fundamento en el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos, ODECA, y en el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia.
- **Acuerdo de Sede entre la Corte Centroamericana de Justicia y el Gobierno de la República de** instrumento acordado con el objeto de determinar las facilidades, prerrogativas e inmunidades que el gobierno de la República de Nicaragua, en su carácter de país de sede, otorgará a la Corte Centroamericana de Justicia, regulando las condiciones más adecuadas para su funcionamiento.
- **Ordenanza de Procedimientos** determina y regula el procedimiento y la forma de ejercer las funciones de la Corte Centroamericana de Justicia, teniendo por objeto y finalidad el respeto al derecho en la interpretación y ejecución del Protocolo de Tegucigalpa y del Convenio de Estatuto de La Corte, sus instrumentos complementarios o actos derivados de los mismos; la salvaguarda de los propósitos y principios del “Sistema de la Integración Centroamericana”, la objetividad de los derechos, igualdad de las partes y la garantía del debido proceso.
- **Reglamento de Adquisiciones** este Reglamento regula los requisitos y procedimientos que deben cumplirse para la adquisición de bienes y servicios de La Corte.

3.3.4. Sujetos Procesales

La Corte Centroamericana de Justicia al igual que la Corte de Justicia Centroamericana (Corte de Cartago), permitía el acceso de los particulares a su Jurisdicción (*IUS STANDI*).

Este se encuentra reflejado en la Ordenanza de Procedimiento en el artículo 3 referido a “los Sujetos Procesales”, establece que serán sujetos Procesales ante la CCJ: (Ordenanza de Procedimiento de la Corte Centroamericana de Justicia, 1995)

- a) Los Estados Miembros y, en su caso, cualquier otro Estado.
- b) Los Poderes u Órganos fundamentales de los Estados miembros en los casos contemplados en el Estatuto de la Corte.
- c) Los Órganos u Organismos del Sistema de la Integración Centroamericana.
- d) Los Particulares sean personas Naturales o Jurídicas.

La Corte Centroamericana de Justicia ha conocido hasta el momento de 109 casos contenciosos o consultivos y de los cuales 65 de estos casos han sido interpuestos por particulares sean personas naturales o jurídicas.

Tal como se dejó dicho anteriormente en el Siguiendo Capítulo se detallará de manera particular cada uno de estos casos.

CAPÍTULO III

ACCESO DE LOS PARTICULARES A LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA (IUS STANDI)

A continuación se abordará de manera detallada el acceso de los particulares (*Ius Standi*), como sujetos procesales ante la Corte Centroamericana de Justicia, se darán a conocer cuáles han sido los casos contenciosos en los cuales las personas, sean naturales o jurídicas han actuado como la parte actora del proceso.

Se abordaran los casos, la acción procesal, las partes y las resoluciones emitida por parte de la Corte, se abordaran de igual manera aquellos casos que fueron del conocimiento de la ya extinta Corte de Justicia Centroamericana o Corte de Cartago, cuya existencia se abordó en el capítulo anterior.

1. ACCESO DE LOS PARTICULARES A LA JURISDICCIÓN DE LA CORTE DE JUSTICIA CENTROAMERICANA O CORTE CARTAGO

A como se mencionó anteriormente los particulares tenían permitido acceder a la Jurisdicción de la Corte de Justicia Centroamericana, y esto se hacía referencia en los Artículos 2 y 3 de la Convención para el establecimiento de una Corte de Justicia Centroamericana:

A continuación se detallan los casos que fueron de conocimiento de la Corte de Justicia Centroamericana.

Controversias entre Particulares y/o contra Estados (entre paréntesis año de la resolución final): (Gutierrez, 2009)

1. **Onofre Silva Castillo contra el Estado del El Salvador (1908):** El 12 de Diciembre de 1908, el ciudadano Salvadoreño Onofre Silva Castillo, envió por correo a la Corte una demanda contra el Gobierno de El Salvador, alegando que el Poder Judicial de aquella nación se había negado a dar cumplimiento a una orden de libertad otorgada por un tribunal a su favor.

A este caso la Corte procedió a declararlo inadmisibile por que la demanda carecía de autenticación y no contaba con los demás requisitos formales.

2. **Pedro Andrés Fornos Díaz contra el Estado de Guatemala (1909):** en el año de 1909 un abogado Nicaragüense llamado Pedro Andrés Fornos Díaz, presentó demanda formal contra el Gobierno de la República de Guatemala basándose en los siguientes hechos: el 15 de Diciembre de 1907 había desembarcado en San José, Guatemala, para una conferencia de orden político con el presidente de la República Lic. Don Manuel Estrada Cabrera. Luego el trato de salir del país, sin embargo el 28 de Diciembre al dejar el palacio de gobierno con el pasaporte que había solicitado para emprender su viaje, fue detenido sin causa por agentes de la policía secreta y conducido a la penitenciaría central. Allí el fue alojado en una celda y despojado de todos los objetos que portaba. Ahí se le mantuvo detenido hasta el 14 de Agosto de 1908, expulsándolo del país con prohibición de volver a él y bajo amenaza de muerte.

Basándose en el Artículo II de la Convención creadora de la Corte que daba derecho a los particulares a demandar a los Estados por violación de sus deberes para con ellos, Fornos Díaz pidió en su demanda que se declarara que el Gobierno de Guatemala había violado en su persona los derechos que como extranjero y centroamericano le correspondían

en aquel país y que se les obligara a pagar una indemnización por todo el tiempo el cual pasó encarcelado y de igual manera por todos los vejámenes sufridos.

El único trámite que se le dio a esta demanda fue el conocer de una recusación que promovió el actor contra un Magistrado Guatemalteco, por considerar que no podía fallar un asunto en que estaba interesado su gobierno. La recusación fue declarada sin lugar, y el Tribunal a entrar a ver si admitía o no la demanda, declaró a esta inadmisibile y conoció al mismo tiempo del fondo de la acción desestimándolo. La demanda se declaró inadmisibile por considerar que el Tribunal carecía competencia para conocer de ellas.

3. **Laureano Irías contra José Santos Zelaya (1909):** El 25 de agosto de 1909 presentó una demanda don Laureano Irías, nicaragüense exiliado, contra el General José Santos Zelaya, en la cual, después de hacer una larga enumeración de las actuaciones de dicho gobernante, se procede a pedir que la Corte lo condene por los siguientes cargos: “Usurpador del poder en Nicaragua, perturbador de la paz en Centroamérica, por liberticida, por asesino, pro incendiario de cadáveres, por mentecato, por indecente, por sucio forzador de mujeres, por traidor a la patria, por ser el único obstáculo a la paz de Centroamérica, por el delito de corrupción de menores en perjuicio de don Luis Anderson (la demanda no explica en qué se basa este cargo), por ser el autor del asalto de Acajutla, por violador o violentador del Presidente Dávila, por insultos y denuestos contra los Estados Unidos, proferidos por escrito ignorantes y asalariados y por haber hecho apostatar al Doctor José Madriz y a don Carlos Selva”.

Como el expediente que se encuentra en el Archivo de la Corte no contiene más que el libelo de demanda y un poder del señor Irías a un

abogado para que lo represente ante la Corte, no sabemos qué suerte pueda haber corrido tan peregrina demanda. En todo caso, no se encontraba dentro de la jurisdicción de la Corte.

4. **Salvador Cerda Contra el Estado de Costa Rica (1910):** El 27 de Septiembre de 1910, en nicaragüense Salvador Cerda interpone una demanda en contra del Gobierno de Costa Rica por haber recibido de éste una orden de concentrarse en la Capital de país, prohibiéndosele, de acuerdo con el Tratado General de Paz y Amistad, residir en la zona fronteriza con Nicaragua y especialmente en el poblado de La Cruz, donde hasta entonces había vivido.

La Corte denegó la admisión de la demanda por no haberse acompañado prueba alguna por parte del demandante y especialmente por no haberse justificado la calidad de nicaragüense por parte del demandante, por no haber comprobado la lesión de sus derechos, ni el agotamiento de los recursos que las leyes le otorgan contra esa violación ni la existencia de denegación de justicia.

5. **Felipe Molina Larios contra el Estado de Honduras (1913):** El 28 de Noviembre de 1913 el ciudadano nicaragüense don Felipe Molina Larios interpone una demanda contra el Gobierno de la República de Honduras, alegando que las autoridades de ese país habían cometido una violación a sus derechos civiles ya que según el señor Molina se había embarcado en Puerto Limón rumbo a Honduras, donde se dedicó a trabajar y entró en algunas negociaciones para adquirir un establecimiento de comercio, estaba finalizando los últimos detalles cuando el tres de Noviembre de 1913 fue aprehendido por orden del comandante del puerto quien lo puso en rigurosa incomunicación durante cinco días, lo obligó a abrir su equipaje, leyó toda su correspondencia y por último lo expulsó del territorio Hondureño, obedeciendo las órdenes del Presidente de Honduras Dr. Don Francisco Bertrand, en la cárcel Molina Larios intentó dirigirse a la Corte Suprema

de Justicia y al Presidente de la República, lo cual se lo negaron completamente.

En su demanda él pedía que se declarara que el Gobierno de Honduras había violado el Artículo VI del Tratado General de Paz y Amistad el cual le daba derechos civiles iguales al de todos los Hondureños, y en consecuencia él tenía el derecho de residir en ese país y de igual manera pedía la indemnización de los daños y perjuicios que le causaron por los abusos que motivaron su demanda. La Corte de Justicia Centroamericana rechazó la demanda por carecer el Tribunal de Jurisdicción para conocer de ella, en la forma en que fue presentada.

6. Alejandro Bermúdez Núñez contra el Estado de Costa Rica (1914):

Demanda planteada por el Licenciado Manuel Diéguez Flores como apoderado judicial de Don Alejandro Bermúdez Núñez, ciudadano nicaragüense expulsado en la primera administración de don Ricardo Jiménez, contra el Gobierno de Costa Rica por considerar que había sido expulsado arbitrariamente de ese país. La Corte dio curso a la demanda y el 7 de abril de 1914, con los votos de los magistrados de Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, falló el caso a favor de Costa Rica, por considerar que en la expulsión del señor Bermúdez se había cumplido con los requisitos legales y no se habían violado los derechos que le conferían los tratados vigentes.

7. Daniel Escalante y otros contra el Estado de Costa Rica (1914):

El día del 20 de Mayo de 1914, un grupo formado por cada una de las repúblicas centroamericanas dirigió a La Corte una demanda interpuesta por Daniel Escalante, Antonio Castañeda Aguilar, Francisco A. Deres, Pedro Toruño Mairena y Urias Molina, todos estudiantes de Derecho menos el último que era comerciante.

El escrito llevaba únicamente las firmas de los señores Escalante y Castañeda, quienes manifestaron actuar como apoderados de todos sus compañeros y se comprometieron a comprobar luego esa personería.

Los demandantes manifestaban que la elección que el congreso había hecho para presidente de la República del Licenciado don Alfredo González Flores era completamente nula, por el hecho que la Carta Fundamental Costarricense en sus artículos 54 y 73, inciso 2, establecía que al Congreso sólo correspondía elegir el presidente cuando no hubiera mayoría absoluta y que en ese caso debía de hacerlo entre los dos individuos favorecidos con el mayor número de sufragios, no siendo esa la situación del señor Gonzales Flores, por lo tanto este grupo de centroamericanos pedía 1) la nulidad de las elecciones por ser contrarias a la Ley Constitutiva y a la Reglamentaria. 2) que se convocara a nuevas elecciones conforme a las mismas leyes constitutivas y reglamentarias, 3) que por no haber sucesor electo constitucionalmente, continuara entonces el Presidente actual señor Jiménez, hasta que se realizara la nueva votación de su sucesor.

Este caso fue muy curioso, sin embargo a los Magistrados de la Corte no les costó ponerse de acuerdo en cuanto al problema jurídico que se les presentaba. Por Resolución del 4 de Julio de 1914, declararon inadmisibile la demanda por carecer de capacidad jurídica internacional las personas que la presentaron y de jurisdicción el Tribunal en la especie que la motivara.

2. JURISDICCIÓN DEL *IUS STANDI* EN LA CCJ

Según la Ordenanza de Procedimiento de la Corte Centroamericana de Justicia da cabida a la posibilidad de que los civiles podamos acudir a ella como figuras parte de los Procesos Judiciales.

Esto lo visualizar en el artículo 3 de la misma el cual establece que serán Sujetos Procesales:

- a. Los Estados miembros, o en su caso, cualquier otro Estado.
- b. Los Poderes u órganos fundamentales de los Estados Miembros en los casos contemplados en el Estatuto de la Corte.
- c. Los Órganos u Organismos del Sistema de la Integración Centroamericana.
- d. Los particulares: personas naturales o jurídicas**

La Corte Centroamericana de Justicia ha conocido hasta el momento de 109 casos contenciosos y consultivos, de los cuales 65 han sido presentados por particulares; personas naturales o jurídicas.

A continuación se expone brevemente los casos presentados ante la Corte, identificados como expedientes (Corte Centroamericana de Justicia (CEDOC), 2009) :

- 1. Expediente # 01-01-12-1994, Actor:** Señor Ricardo Duarte Moncada, **Demandado:** Gobierno de Nicaragua, Alcaldía de Managua y Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). **Acción:** Demanda por violaciones a sus derechos humanos y daños en un inmueble de su propiedad.

Admitida la Demanda por parte de la CCJ, y resuelve que la parte demandante debe de precisar claramente las pretensiones con todas sus formalidades, el tribunal señaló un término de 30 días calendario a partir de su notificación para

la corrección y presentación del nuevo escrito de la demanda. Sin embargo el tribunal aclara que según el Estatuto de la Corte en sus artículos 22 y 43, no tiene competencia sobre la materia de Derechos Humanos por lo tanto se declara improcedente la interposición de una demanda de una pretensión de tutela de tales derechos por ser esto competencia exclusiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

2. Expediente # 8-03-06-1996, Actor: Arquitecta Jeannette del Carmen Vega Baltodano por medio de su apoderado Doctor Orlando Corrales Mejía, **Demandado:** Poder Ejecutivo del Estado de Nicaragua, representado por el Doctor Carlos Hernández López, Procurador General de Justicia y otros. **Acción:** Demanda por incumplimiento de sentencia arbitral del Juzgado Primero para lo Civil del Distrito de Managua dictada el 08-06-92, en que ordenó al Fondo para la Investigación y Desarrollo Tecnológico a pagar a la demandante en concepto de honorarios profesionales y otros gastos, más daños y perjuicios por incumplimiento de la sentencia.

En aplicación a los artículos 22 Literal “f”, Arts. 30, 32, 34, 35, 37, 38 y 39 del Estatuto de La Corte; Art. 3 letra “d”, Arts. 4, 5 numeral 4º, Arts. 7, 8, 10, 12, 15,16, 22 numeral 1º, Art. 25 inciso 2º, Arts. 27, 32, 37 literal “c”, Arts. 38, 41 inciso 3º, Arts. 42, 62, 63 y 64 de la Ordenanza de Procedimientos, Ley de 27 de febrero de 1913 de la Asamblea Nacional Constituyente de la República de Nicaragua; Art. 27 párrafo 3 de la Ley del Régimen Presupuestario y sus Modificaciones, de la República de Nicaragua. La CCJ resolvió declarar procedente la demanda y declaró que el Poder Ejecutivo de la República de Nicaragua de hecho no ha respetado el fallo del Juez Primero para lo Civil del Distrito de Managua del 21/04/95. En cuanto a los intereses legales y moratorios desde la fecha de la sentencia, mas los daños y perjuicios ocasionados a partir de la fecha en que se debió ejecutar el laudo arbitral que se demanda contra el poder ejecutivo de Nicaragua, no corresponde determinar su procedencia y monto al Tribunal, sino al Juez Primero Local Civil

del Distrito de Managua. Esta sentencia deberá cumplirse conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia.

3. Expediente # 10-05-11-1996, Actor: Doctor José Vicente Coto Ugarte, médico-cirujano de San Salvador por medio de su apoderado Dr. Luis Eduardo Méndez, **Demandado:** Consejo Superior Universitario de la Universidad de El Salvador. **Acción:** Demanda por el desconocimiento del Convenio sobre el Ejercicio de Profesiones Universitarias y Reconocimiento de Estudios Universitarios y del Protocolo al Tratado General de Integración Económica o Protocolo de Guatemala. Demanda por el desconocimiento del Convenio sobre el Ejercicio de Profesiones Universitarias y Reconocimiento de Estudios Universitarios y del Protocolo al Tratado General de Integración Económica o Protocolo de Guatemala.

En este caso la Demanda fue admitida por la Corte, sin embargo se declaró “no ha lugar” primero por no haber agotado los procedimientos internos previstos por la legislación vigente del Estado del El Salvador y segundo consideraron que los Estados miembros del SICA ya se directamente o por medio de sus instituciones oficiales que en alguna forma los representan, están especialmente, en la obligación de cumplir no solo con lo que el espíritu y la letra de lo que la normativa comunitaria dispone, sino también de facilitar el ejercicio y cumplimiento de los derechos que en dicho ordenamiento se otorgan a sus destinatarios, ya que de no hacerlo, se incurre en responsabilidad por parte de dichos Estados.

Algo muy curioso en este caso fue que para mejor proveer la CCJ mandó a escuchar al Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA).

- 4. Expediente # 11-06-11-1996, Actor:** Doctora Concepción Lea González Rodríguez, en su carácter de Apoderada General Judicial del Doctor Nicolás Urbina Guerrero, médico hondureño, **Demandado:** Doctor Carlos Hernández López, Procurador General de la República de Nicaragua, Poder Judicial del Estado de Nicaragua, **Acción:** Demanda por irrespeto de Fallo Judicial, dictado de las dos de la tarde del día 18-07-1996 por el Juez Único del Distrito de Jinotepe, Nicaragua, Dr. Mario Luis Soto Quiroz.

Esta demanda fue declarada inadmisibile por parte de la CCJ con fundamento en el artículo 30 del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia y artículos 4 y 32 de la Ordenanza de Procedimiento y el carácter consuetudinario que tiene la regla del Agotamiento de los Recursos de la Jurisdicción Interna.

- 5. Expediente # 16-01-01-01-1998, Actor:** Señora Fanny Duarte de Herdocia, comerciante de la ciudad de León, Nicaragua, **Demandado:** Sra. Silvia Lacayo Navarro ("Casa de la Novia"), **Acción:** Demanda por falta de Cumplimiento del Convenio Centroamericano sobre la Protección de la Propiedad Industrial.

Declarado inadmisibile el escrito presentado por la parte demandante por falta de formalismo y errores de forma y de fondo de acuerdo a los artículos 1, 4, 22, 23 y 24 del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia y artículos 7, 10, 16,18,31,32 y 34 de la Ordenanza de Procedimientos.

- 6. Expediente # 17-02-05-02-1998, Actor:** Señor Bosco René Neyra Blanco, **Demandado:** Poder Judicial de Nicaragua, **Acción:** Demanda por Denegación de Justicia.

En este caso la CCJ declaró no ha lugar el escrito presentado por la parte demandante ya que según lo que dispone el artículos 10, 22 y 32 de la Ordenanza de Procedimiento la Corte no dará cursos a escritos en que no se llenen los requisitos necesarios y de igual manera no se dará curso a una demanda en la cual dejen de exponerse los hechos y fundamentos de derecho constitutivo de las cuestiones controvertibles.

7. Expediente # 18-03-08-01-1998, Actor: Señor Alejandro C. Umaña, **Demandado:** Empresa INCA S.A., Nicaragua, **Acción:** Solicitud de apoyo en demanda laboral por cobro de salario y prestaciones sociales.

Se declaró no ha lugar la admisión del escrito presentado por la parte demandante por no estar el caso comprendido en las competencias del Tribunal.

8. Expediente # 19-04-08-01-1998, Actor: Señor Jamil Alí Cuadra Obando, **Demandado:** Autoridades Costarricenses, **Acción:** Denuncia contra autoridades Costarricenses en virtud de detención de su hermano Igor Alí Cuadra Obando persona por supuesto delito de tráfico de drogas.

De igual manera en este caso no se da ha lugar la admisión del escrito de la parte demandante por no estar el asunto comprendido dentro de las competencias del Tribunal.

9. Expediente # 20-05-09-01-1998, Actor: Doctor Álvaro José Robelo González, **Demandado:** Consejo Supremo Electoral, integrado por los señores: Rosa Marina Zelaya Velásquez, Presidenta; Braulio Lanuza Castellón, Vicepresidente; Fernando Silva Espinoza, Magistrado Propietario; Alfonso Callejas Deshon, Magistrado Propietario; Roberto

Rivas, **Acción:** Demanda en la que se alega la pretensión de incumplimiento de la Sentencia Número Once pronunciada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua a las 10 de la mañana del día 3-02-1998.

La CCJ en aplicación de los artículos 22 literal f, 30,32,34,35,37, 38 y 39 del Convenio de Estatuto de la Corte, 54 del Reglamento General, 3 literales b y d, 5,7,8,22,23,62 y 64 de la Ordenanza de Procedimiento declaró ha lugar la demanda por mayoría de votos, de igual manera se declara que el Consejo Electoral y demás organismos electorales subordinados, de hecho no han respetado el fallo Judicial; El Consejo Supremo Electoral por medio de las dependencias correspondientes debe proceder a cumplir con dicho fallo y la Ley de Identificación Ciudadana de conformidad con los Términos de la Sentencia de Amparo objeto de esta demanda.

10.Expediente # 21-01-19-02-1999, Actor: Doctor Félix Castillo Fernández, Abogado y Notario Nicaragüense, **Demandado:** Municipio de Managua, representado por el señor Alcalde Municipal Ingeniero Roberto Cedeño Borgen, y contra el Poder Judicial de Nicaragua, representado por el Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Doctor Guillermo Vargas Sandino, **Acción:** Demanda en la que se alega la pretensión de incumplimiento del fallo judicial sobre pago de honorarios, dictado por el Juez Primero Civil del Distrito de Managua, Nicaragua.

La CCJ en aplicación de los artículos 22 literal f, 30,32,34,35,37, 38 y 39 del Convenio de Estatuto de la Corte, 3 literales d, 5,7,8,22,23,62 y 64 de la Ordenanza de Procedimiento declaró ha lugar la demanda por mayoría de votos, se decide que la Municipalidad de Managua representada por su Alcalde de hecho no ha respetado el Fallo Judicial dictado por el Juzgado Primero Civil del Distrito de Managua, República de Nicaragua y que causo ejecutoria, y que dicha Municipalidad debe de cumplir con ese fallo.

11.Expediente # 22-02-02-08-1999, Actor: Familia Mondragón Cortés y Ayala presentada por su mandatario el señor Norman Torres Herrera, **Demandado:** Poder Judicial de Estado de Honduras, **Acción:** Demanda con la pretensión de que la Honorable Corte Suprema de Justicia de Estado de Honduras, respete y haga respetar los efectos de cosa juzgada que ha adquirido la sentencia pronunciada el 28-01-98 por la Corte Primera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa, Honduras, resolviendo el recurso de apelación interpuesto en el juicio criminal que por acusación promovió el Abogado Jorge Alberto Burgos Molina contra el neurólogo Fabricio René Díaz Hernández y otros.

Se declaró improcedente la demanda por la parte actora en contra del Poder Judicial del Estado de Honduras, ya que no se han agotado los recursos internos que establecen las leyes de la República de Honduras y por lo tanto esto le impide a la Corte conocer de la demanda planteada.

12.Expediente # 24-04-18-11-1999, Actor: Familia Mondragón Cortés y Ayala presentada por su mandatario el señor Norman Torres Herrera, **Demandado:** Poder Judicial de Estado de Honduras, **Acción:** Demanda porque a juicio de demandantes, no se ha respetado un fallo judicial, que según el mismo peticionario “ha adquirido en el tiempo y en el espacio autoridad de cosa juzgada”.

Se resolvió que en vista de que la pretensión contenida en esta demanda es una reiteración y ratificación de la tramitada en el expediente 22-02-02-08-1999, en la que se declaró que dicha demanda carecía de fundamento razonable por la pretensión que incluía.

13.Expediente # 29-9-27-06-2000, Actor: La Sociedad de Asunción, Sociedad Anónima de Capital Variable (La Asunción S.A. de C.V.) y su Director Presidente Sr. Alfredo Bukele Simón, representada por

Abogado Antonio Aguilar Martínez, **Demandado:** Órgano Judicial de la República de El Salvador, por actos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, **Acción:** Demanda consistente en que la Corte Suprema de Justicia de la República de El Salvador de hecho no ha respetado el fallo definitivo emitido por el Juzgado Primero de lo Civil de San Salvador y los fallos emitidos por La Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, con Sede en San Salvador, y por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República de El Salvador.

En éste caso la demanda se declaró improcedente ya que según la CCJ, el artículo 22 literal f, del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia contiene 2 hipótesis una que se refiere a la existencia de conflictos entre Poderes u Órganos del Estado y la otra que se refiere al irrespeto de hecho de fallos judiciales y por lo tanto el caso planteado por la parte demandante no se trata de un asunto de Conflictos entre Poderes del Estado y es claramente una cuestión de de Derecho y no de Hecho, como se contempla en la hipótesis segunda del referido artículo. Por estas razones la CCJ decide no tener competencia para declarar procedente la demanda en los términos en que se planteó.

14.Expediente # 31-11-01-08-2000, Actor: Licenciado José Viguer Rodrigo, **Demandado:** Órgano Judicial de la República de Nicaragua, **Acción:** Denuncia por el delito de violación ante las autoridades judiciales de Chinandega, Nicaragua, cometidas por la Justicia Nicaragüense en irregularidades, por el prejuicio racial de ser español.

La CCJ declaro sin lugar a lo solicitado en el escrito por no ser de la Competencia del Tribunal, ya que lo expresado es atinente a supuestas violaciones de Derechos Fundamentales atribuidos a los Órganos encargados de Administrar Justicia en Nicaragua, Estado por el cual está vigente la

Convención Americana de Derechos Humanos y como consecuencia su competencia puede caer bajo la competencia exclusiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de acuerdo a lo establecido en los artículos 44 y 61 de la Convención.

15.Expediente # 33-13-31-10-2000, Actor: Demandado: Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), Representado por el Ministro de Economía de Guatemala, Sr. Eduardo Weymann. **Materia:** Demanda por Acción de Nulidad, para que se deje si ningún valor ni efecto la resolución del Consejo de Ministros de la Integración Económica 60-2000 (COMIECO-XV), adoptado 27-09-2000 con su anexo “Nuevo CAUCA”, **Acción:** Asociación de Agentes Aduanales Autorizados (ASODAA) de la República de El Salvador, representado por el Abogado Henry Thompson Arguello.

Asunto Acumulado con el siguiente expediente.

16.Expediente # 34-14-01-11-2000, Actor: Agente Aduanero Autorizado, Alfonso Estrada Cuadra, Asunto acumulado con el expediente 13-31-10-2000 Asociación de Agentes Aduanales Autorizados (ASODAA) de la República de El Salvador, ambos casos representados por el Abogado Henry Thompson Arguello. **Demandado:** Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), Representado por el Ministro de Economía de Guatemala, Sr. Eduardo Weymann. **Acción:** Demanda por nulidad de las Decisiones o Resoluciones por los Órganos u Organismos del Sistema de la Integración Centroamericana que causan perjuicio a personas naturales o jurídicas, Expediente acumulado con el Expediente # 33-13-31-10-2000

Se Resolvió declarando con lugar ambas demandas de nulidad expresadas en los 2 expedientes anteriores y se declaró nula y sin ningún valor y efecto legal

la Resolución 60-2000 (COMIECO-XV), adoptada el 27 de Septiembre del año 2000, y su anexo que constituiría el nuevo Texto del Código Aduanero Uniforme Centroamericana, por no tenerla facultades para haberla dictado, en consecuencia se suspende indefinidamente la aplicación y efectos de la misma y su anexo, quedando en vigor y debiendo aplicarse el Código contenido en el Protocolo de Modificación al Código Aduanero Centroamericano contenido el 7/01/93, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de las disposiciones finales de ese instrumento.

17.Expediente # 37-03-03-04-2001, Actor: Señora Lilliam Elizabeth Muñoz a través de Apoderado General Judicial, Lic. Aurelio Plata Bravo, **Demandado:** Dirección General de Servicios Aduaneros, representada por su Director General, Lic. Emilio Selva o quien ostente su titularidad, **Acción:** La actuación de la Aduana Nicaragüense afecta el Derecho de la Integración Centroamericana lo mismo que los Acuerdos y Resoluciones de sus organismos, pudiendo ser invocados por cualquier interesado.

En base, a los Artículos 22 literal c, 35, 36 y 37 de los Estatutos; 2, 3 letra d, 4, 7, 23 y 29 de la Ordenanza de Procedimientos, se Declaró sin lugar la demanda por la Parte actora en contra la Dirección General de Servicios Aduaneros, por carecer de base legal su causa de pedir, lo que convierte la misma en improcedente. Asimismo, por lo que anteriormente se ha señalado, se declara sin lugar la condenación en costas solicitada.

18.Expediente # 38-04-04-04-2001, Actor: Fanny Mareza Barralaga, representante legal de la Señora Blanca Haydee González, **Demandado:** Nueve funcionarios del Estado de Honduras y el Comisionado de los Derechos Humanos de ese país, **Acción:** Denuncias en contra del Comisionado de Derechos Humanos; de 4 Fiscales, 2 Jueces, 3 Magistrados y 3 Agentes de Investigación, todos

del Estado de Honduras, señalando que han incurrido en abuso de autoridad.

Este caso se declaró inadmisibile por parte de la CCJ, por carecer el documento con requisitos de forma, esto con base en los artículos 25 y 30 del Estatuto, y 3 literal d), 4, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 18, 19, 32 y 64 de la Ordenanza de Procedimientos de la Corte.

19.Expediente # 39-05-18-04-2001, Actor: Licenciada María Hilda Quintanilla de Chávez, **Demandado:** Señores Jueces de Paz de Instrucción de la Ciudad de Acajutla y Cámara de la Segunda Sección de Occidente del Depto. de Sonsonato de El Salvador, **Acción:** Demanda por Denegación de Justicia.

La Corte de acuerdo a los artículos 3 del Convenio de Estatuto de la Corte y 4,10,13 y 18 de la Ordenanza de Procedimiento declaró no ha lugar la demanda por falta de requisitos de forma y de igual manera no se determina una clara pretensión sobre la cual la Corte debe Pronunciarse.

20.Expediente # 40-06-19-06-2001, Actor: Abogado Arbel Antonio Medina Zamora en representación de Sr. Ferdinand Brandstetter, nicaragüense, **Demandado:** Poder Ejecutivo de Nicaragua, Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), **Acción:** Demanda por irrespeto de Fallo Judicial que ordena restablecimiento de flujo eléctrico, dictado 17-10-97 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de República de Nicaragua.

Resolución Acumulada con el Expediente # 42-08-19-06-2001.

21.Expediente # 41-07-19-06-2001, Actor: Sr. Bayardo Saturnino Alemán Jarquín, **Demandado:** Poder Ejecutivo de Nicaragua, Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), **Acción:** Demanda por irrespeto de Fallo Judicial que ordena restablecimiento de flujo eléctrico, dictado 17-10-97 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de República de Nicaragua.

Resolución Acumulada con el Expediente # 43-09-19-06-2001.

22.Expediente # 42-08-19-06-2001, Actor: Abogado Arbel Antonio Medina Zamora en representación de Sr. Ferdinand Brandstetter, nicaragüense, **Demandado:** Poder Ejecutivo de Nicaragua, Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), **Acción:** Demanda por irrespeto de Fallo Judicial que ordena restablecimiento de flujo eléctrico, dictado 17-10-97 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de República de Nicaragua.

Expediente acumulado con el Expediente # 40-06-19-06-2001

La Corte Centroamericana de Justicia en aplicación de los artículos 22 párrafo final del literal f, 26, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 39, del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, 3 literal d, 5 numeral 4, 7 22, 23, 49 y 64 de la Ordenanza de Procedimientos, resuelve no ha lugar a las demandas acumuladas interpuestas por el mismo demandante en contra del Poder Ejecutivo del Estado de Nicaragua, ya que según el Tribunal no puede por mera presunción establecer responsabilidad y declarar con lugar a una demanda.

23.Expediente # 43-09-19-06-2001, Actor: Sr. Bayardo Saturnino Alemán Jarquín. **Demandado:** Poder Ejecutivo de Nicaragua, Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL). **Materia:** Demanda por irrespeto

de Fallo Judicial que ordena restablecimiento de flujo eléctrico, dictado 17-10-97 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de República de Nicaragua.

Expediente acumulado con el Expediente # 41-07-19-06-2000.

En aplicación de los artículos 22 párrafo final del literal f, 26, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 39, del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, 3 literal d, 5 numeral 4, 7 22, 23, 49 y 64 de la Ordenanza de Procedimientos, se resolvió declarar no ha lugar a las demandas, ya que no se puede por mera presunción establecer responsabilidad y declarar con lugar a las demandas.

24.Expediente # 45-11-21-09-2001, Actor: Diputado y Diputada del Parlamento Centroamericano, señor Camilo Agustín Brenes Pérez y señora Alba Palacios Benavides, **Demandado:** Parlamento Centroamericano, **Acción:** Demanda para que se declare la Nulidad Total del Acuerdo de la Sesión de la Asamblea Plenaria del PARLACEN denominado “Fondo de Retiro para Diputados, Diputadas electos así como Parlamentarios designados al PARLACEN”, que consta en Acta AP/131-2001 de dicho órgano del SICA.

La Corte Centroamericana de Justicia por unanimidad de votos admite la demanda con fundamento en los artículos 22 literales b y g, 30, 31, y 34 del Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia y artículos 3 literales b y d, 4, 7, 8, 10, 16, 18, 19, 22 numeral 3, 17, 34 y 60 literales b y c de la Ordenanza de Procedimientos y se dicta la medida cautelar consistente en suspender, hasta que se pronuncie el fallo definitivo en este juicio la aplicación y efectos del Acuerdo de Sesión Plenaria del Parlamento Centroamericano denominado “Fondo de Retiro para Diputados electos, así como Parlamentaristas designados por el PARLACEN”.

25.Expediente # 46-12-08-10-2001, Actor: Licenciado Ricardo Alfredo Flores Asturias, Abogado y Notario de Guatemala, **Demandado:** Parlamento Centroamericano, **Acción:** Demanda nulidad de la resolución de Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano, identificada con el número AP/12- CXXXI-2001 de 29-10-01 sobre la medida cautelar consistente en que se decrete la suspensión de lo dispuesto en la resolución del PARLACEN citada anteriormente.

Con base en los Artículos 40 del Convenio de Estatuto de este Tribunal y 64 y 65 de la Ordenanza de Procedimientos, se resuelve Sobreséase en el procedimiento por carecer de objeto y haber desaparecido así el interés jurídico para las partes en esta causa, debiendo concluir su tramitación; y se Declaró extinguida la acción incoada.

26.Expediente # 47-13-10-10-2001, Actor: Lic. Francisco Salomón Álvarez Arias y Lic. Reynaldo Sobalvarro Stubbet, abogados, Departamento de Boaco, Nicaragua, **Demandando:** Instituto de Desarrollo Rural, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de Nicaragua, **Acción:** Demanda de incumplimiento de sentencia de 3-10-2000, dictada por la Honorable Sala Civil y Laboral por Ministerio de Ley del tribunal de Apelaciones con sede en Juigalpa, Departamento de Chontales, República Nicaragua.

Basándose en los artículos 32, 35, 37, 38 y 39 del Estatuto de la Corte y 3 literal d, 5 numeral 4, 7, 8, 23, y 63 de la ordenanza de procedimientos se resuelve por unanimidad no dar lugar por ahora a la demanda interpuesta por las partes actoras en contra del instituto rural, el poder ejecutivo y el poder judicial del Estado de Nicaragua, por no estar agotados los procedimientos internos previstos por la legislación vigente en el Estado de Nicaragua, quedándoles expedita la vía a los demás demandantes para hacer los derechos que consideren les asisten, una vez agotados los procedimientos mencionados.

27.Expediente # 48-14-18-12-2001, Actor: Doctor Gustavo Porras Cortés, Médico Nicaragüense representado por el Abogado Adrián Meza Sosa, **Demandado:** Poder Ejecutivo de Nicaragua, Ministerio de Salud (MINSAL), **Acción:** Demanda por irrespeto de fallo judicial, dictado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua que en sentencia de amparo ordenó “reintegro inmediato de todos y cada uno de los amparados, reintegro que deberá efectuarse en las mismas condiciones y responsabilidades del que gozaban antes, sin represalia alguna”.

La Corte declara con lugar la demanda interpuesta por la parte demandante y declara que el Poder Ejecutivo del Estado de Nicaragua de hecho ha irrespetado el fallo contenido en la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua del 18/09/02 y de igual manera se establece que el Poder Ejecutivo del Estado de Nicaragua respete en su integridad y ejecute debidamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, ordenando y disponiendo lo que corresponde para que se logre tal propósito.

Se declara que la sentencia deberá de cumplirse inmediatamente conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia.

28.Expediente # 49-01-01-03-2002, Actor: Merco Agro Internacional, S.A., Nicaragua, representada por Abogado Joe Henry Thompson Arguello, **Demandado:** Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), representado por el Sr. Marcos Narváez, Ministro de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua, Presidente pro-tempore del mismo, **Acción:** Demanda PRIMERO: con acción de nulidad de la Resolución No. 73-2001 (COMIECO), del 16-03-2001, con su anexo la modificación de los Derechos Arancelarios a la Importación, y

restitución de lo pagado de más por el cobro del DAI ilegalmente incrementado, hasta por la cantidad de 8,947,130.18 córdobas, más un tercio de lo reclamado, por costas, daños y perjuicios y sobre la medida cautelar consistente en que se suspenda la aplicación y efectos de la resolución antes señalada.

La Corte Centroamericana de Justicia en aplicación de los artículos 8, 9, 10, 11 y 35 del Protocolo de Tegucigalpa; 2, 3, 22 literales b) y g), 32, 33, 34, 35, 36 y 37 del Estatuto; 1 literal d), 5, 36, 37 y 38 del Protocolo de Guatemala; 3, 4 y 5 del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano; 17 párrafo uno y dos del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Consejos de Ministros de Integración Económica, Intersectorial de Ministros de Integración Económica y Sectorial de Ministros de Integración Económica; 3 literales c) y d), 4, 22, 23, 25, 29 y 60 de la Ordenanza de Procedimientos y la Doctrina y Jurisprudencia de este Tribunal, por unanimidad de voto Declaró con lugar la demanda de nulidad interpuesta por la parte demandante. De igual manera Declarar nula y sin ningún valor ni efecto legal la RESOLUCIÓN 73-2001 (COMIECO), del 16 de marzo de 2001 y su anexo de modificación de los Derechos Arancelarios a la Importación, por no tener facultades para dictarla; en consecuencia se suspende la aplicación y efecto de la misma y su referido anexo.

Se Declaró sin lugar la solicitud de restitución de lo pagado como Derechos Arancelarios de Importación, por no ser el Estado de Nicaragua parte en este juicio.

29.Expediente # 50-02-10-04-2002, Actor: Doctores nicaragüenses Helio Artola Navarrete, Roberto López Vargas y Dionisio Morales Castillo, por medio de su representante Abogado Bonifacio Miranda Bengoechea, **Demandados:** Poder Ejecutivo del Estado de Nicaragua, representado por el Señor Presidente de la República Ing. Don Enrique Bolaños Geyer, Ministerio de Salud (MINSa), **Acción:** Demanda por irrespeto al

fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Nicaragua, que en sentencia de amparo ordenó “reintegro inmediato de todos y cada uno de los amparados, reintegro que deberá efectuarse en las mismas condiciones y responsabilidades del que gozaban antes, sin represalia alguna”.

La CCJ declara con lugar la demanda y declara que el Poder Ejecutivo del Estado de Nicaragua de hecho a irrespetado el fallo contenido en la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, y declara que el Poder Ejecutivo debe de hacer cumplir el fallo antes mencionado ordenando y disponiendo lo que corresponde para que se logre tal propósito y se deja claro que la presente sentencia se deberá de cumplir de inmediato, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia.

30.Expediente # 51-03-17-05-2002, Actor: Sr. Steger Hermann, Jurista Nicaragüense representado por Lic. Arbel Antonio Medina Zamora en su calidad de apoderado general judicial, **Demandado:** Poder Judicial de Nicaragua, **Acción:** Irrespeto de Fallo Judicial dictado el día 30 de Abril de 2002 por la Señora Juez Local de “La Concepción” y de Distrito único de Masatepe, Nicaragua, por Ministerio de Ley, en el caso 258/2000, Steger Hermann contra Poder Judicial de Nicaragua, donde absuelve a Steger Hermann por los delitos de usurpación de atribuciones y usurpación de título.

Se declaró inadmisibile la demanda por no haberse presentado con todos los requisitos que establece la Ordenanza de Procedimiento de la Corte Centroamericana de Justicia.

31.Expediente # 52-04-24-07-2002, Actor: Asociación de Agentes Aduanales Autorizados (ASODAA) de la República de El Salvador, representado por el Abogado Henry Thompson Arguello. **Demandado:** Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano, representado por el actual Ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, el señor Alberto Trejos, posteriormente representado por Dr. Maynor Ottoniel Alarcón Abogado y Notario guatemalteco en calidad de Mandatario Especial Judicial de Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano. **Acción:** Demanda de nulidad de las decisiones o Resoluciones emanadas por los Órganos u Organismos del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Demandando de acción de nulidad, para que se deje sin ningún valor ni efecto la Resolución número 85-2002, adoptada el día 19 de Junio del año 2002, con su Anexo “NUEVO CAUCA”, basándose en el hecho de que, a su juicio, el referido Consejo no tiene facultades para haberla adoptado; y SEGUNDO: Sobre la medida cautelar “consistente en que el Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano suspenda la aplicación y efectos del “Nuevo CAUCA” hasta que el asunto principal se falle definitivamente, por los perjuicios irreparables que le traería la puesta en vigencia de dicho instrumento.

Se unen en una sola Resolución las 4 demandas interpuestas contra el Consejo Arancelario Aduanero Centroamericano. Resolución acumulada en el expediente # 56-08-12-08-2002.

32.Expediente # 53-05-24-07-2002, Actor: Dr. Carlos Iván Torres Lacourt, Médico-anestesiólogo Nicaragüense por medio de su representante Abogado Mauricio Del carmen Quiel, **Demandado:** Poder Ejecutivo de Nicaragua, Estado de la República de Nicaragua, representado por el señor Presidente de la República Ingeniero Enrique Bolaños Geyer, **Acción:** Irrespeto de Fallo Judicial Sentencia No. 164 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó el reintegro

laboral del demandante en las mismas condiciones y nivel de responsabilidad de que gozaba antes, sin represalia alguna.

La CCJ declara con lugar la demanda y declara que el Poder Ejecutivo del Estado de Nicaragua de hecho a irrespetado el fallo contenido en la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua del 18/09/02, que el Poder Ejecutivo debe de hacer cumplir el fallo antes mencionado ordenando y disponiendo lo que corresponde para que se logre tal propósito y se deja claro que la presente sentencia se deberá de cumplir de inmediato, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia.

33.Expediente # 54-06-08-08-2002, Actor: Confederación de Agentes Aduaneros del Caribe (CONAAC), por conducto de su mandatario suficiente, el Licenciado Joe Henry Thompson Argüello. **Demandado:** Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano, representado por el actual Ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, el señor Alberto Trejos, posteriormente representado por Dr. Maynor Ottoniel Alarcón Abogado y Notario guatemalteco en calidad de Mandatario Especial Judicial de Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano. **Acción:** Demanda de Nulidad, para que se deje sin ningún valor ni efecto la Resolución número 85-2002, adoptada el día 19 de Junio del año 2002, con su Anexo “NUEVO CAUCA”, y se dicte medida cautelar.

Se unen en una sola Resolución las 4 demandas interpuestas contra el Consejo Arancelario Aduanero Centroamericano. Resolución acumulada en el expediente # 56-08-12-08-2002.

34.Expediente # 55-07-08-08-2002, Actor: Cámara de Agentes Aduaneros, Almacenadoras y Embarcadores de Nicaragua (CADAEN) de la República de Nicaragua, por conducto de su mandatario

suficiente, el Licenciado Joe Henry Thompson Argüello. **Demandado:** Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano, representado por el actual Ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, el señor Alberto Trejos, posteriormente representado por Dr. Maynor Ottoniel Alarcón Abogado y Notario guatemalteco en calidad de Mandatario Especial Judicial de Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano. **Acción:** Demanda de nulidad de las decisiones o Resoluciones emanadas por los Órganos u Organismos del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

Se unen en una sola Resolución las 4 demandas interpuestas contra el Consejo Arancelario Aduanero Centroamericano. Resolución acumulada en el expediente # 56-08-12-08-2002.

35.Expediente # 56-08-12-08-2002, Actor: Federación Nacional de Agentes Aduaneros de Honduras (FENADUANA), por conducto de su mandatario suficiente, el Licenciado Joe Henry Thompson Argüello. **Demandado:** Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano, representado por el actual Ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, el señor Alberto Trejos, posteriormente representado por Dr. Maynor Ottoniel Alarcón Abogado y Notario guatemalteco en calidad de Mandatario Especial Judicial de Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano. **Acción:** Demandando de acción de nulidad, para que se deje sin ningún valor ni efecto la Resolución número 85-2002, adoptada el día 19 de Junio del año 2002, con su Anexo “NUEVO CAUCA”, basándose en el hecho de que, a su juicio, el referido Consejo no tiene facultades para haberla adoptado; y SEGUNDO: Sobre la medida cautelar “consistente en que el Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano suspenda la aplicación y efectos del “Nuevo CAUCA” hasta que el asunto principal se falle definitivamente, por los perjuicios irreparables que le traería la puesta en vigencia de dicho instrumento.

Acumuladas en esta resolución los Expedientes # 52-04-24-07-2002, 54-06-08-08-2002 y 55-07-08-08-2002.

En aplicación de los artículos 8, 9, 10, 16, 19, 22, 34 y 35 del Protocolo de Tegucigalpa 2, 3, 22 literales b y g, 31, 32, 34, 35, 36 y 37 del Estatuto de la Corte, 1 literal d, 5, 6, 7, 36, 41, 52 y 55 del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala), 1, 3, 4, 5, 6 y 7 del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, 3 literales c y d, 4, 22, 23, 25, 29 y 60 de la Ordenanza de Procedimientos y la doctrina de la jurisprudencia del Tribunal se resolvió declarar no ha lugar a las demandas de nulidad mencionadas anteriormente y por lo tanto se declara válida la resolución No. 85-2002 adoptada por el referido consejo y su anexo que constituirá el nuevo texto del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), por haber actuado en ejercicio de las facultades y atribuciones que se le han atribuido por la normativa comunitaria vigente sobre la materia.

36.Expediente # 58-10-08-11-2002, Actor: Lic. Martha McCoy Sánchez, Diputada del Parlamento Centroamericano, **Demandado:** Honorable Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, **Acción:** Demanda de suspensión de cualquier proceso investigativo y de desaforación por parte de Honorable Asamblea Nacional de la República de Nicaragua de Diputada electa de PARLACEN.

La Corte Centroamericana de Justicia no da curso a la demanda presentada por la parte demandante ya que a juicio del Tribunal carece de fundamento razonable esto en aplicación del artículo 32 de la Ordenanza de Procedimiento, y como consecuencia de lo resuelto no se procede a dictar la medida cautelar solicitada por la demandante.

37.Expediente # 59-01-08-01-2003, Actor: Doctor José Arnoldo Alemán Lacayo, Ex-Presidente de la República de Nicaragua, a través de su

representante el Doctor Mauricio Martínez Espinoza, **Demandado:** Estado de Nicaragua, a través de sus representantes: Ingeniero Enrique Bolaños Geyer, Presidente de la República, Doctor Julio Centeno Gómez, Fiscal de la República, Doctor Francisco Fiallos Navarro, Procurador de la República y Doctora Alba Luz Ramos Vanegas, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, **Acción:** Demanda por violación a la Normativa Comunitaria sobre Inmunidades y Privilegios de un diputado centroamericano.

De conformidad a los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10,11 y 12 de las Disposiciones Transitorias del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 22 c y e, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, y 39 del Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, 2, 5, 10 y 27 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas, 2, 3, 4, 5.2, 7, 8, 22, 23, 25, 29, 44, 46, 47, 48, 50 y 64 de la Ordenanza de Procedimientos, la Corte declara Con lugar a la demanda y como consecuencia queda si efecto a medida cautelar decretada, que el Doctor Arnoldo Alemán como Diputado Centroamericano y mientras no haya sido privado de inmunidades y privilegios por el PARLACEN, no puede ser restringido en su libertad, ni procesado por ningún tipo de autoridad.

Se declara sin lugar la petición de la Parte Demandante, de que este Tribunal se pronuncie sobre la nulidad de los juicios penales incoados en contra del mismo. Y de igual manera la petición de que la Corte se pronuncie sobre la responsabilidad demandada del Estado y funcionarios de la República de Nicaragua.

Se resuelve que el Estado de Nicaragua en cumplimiento de las obligaciones comunitarias contraídas como se ha relacionado, respete a través de sus Órganos, Tribunales y Funcionarios, las inmunidades y privilegios que le corresponde al demandante, de conformidad con el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano otras Instancias Políticas, dada su condición actual de Diputado de ese Órgano Supranacional de la Comunidad

Centroamericana, mientras no le sean suspendidas por el PARLACEN en la forma que procede.

38.Expediente # 60-02-04-02-2003, Actor: Confederación de Agentes Aduaneros del Caribe (CONAAC), por conducto de su mandatario suficiente, el Licenciado Joe Henry Thompson Argüello. **Demandado:** Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano, representado por el actual Ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, el señor Alberto Trejos, posteriormente representado por Dr. Maynor Ottoniel Alarcón Abogado y Notario guatemalteco en calidad de Mandatario Especial Judicial de Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano. **Acción:** Demanda con Acción de Nulidad contra la resolución No. 101-2002 del día 12 de diciembre del 2002, con su anexo el "Reglamento del Nuevo CAUCA", Artículo 22 literales b y g del Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia".

La CCJ resolvió declarar no ha lugar a la excepción de ilegitimidad de personería opuesta por el Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano, se declaró no ha lugar a la demanda de nulidad interpuesta por la parte actora y por lo tanto se declaró válida la resolución No. 101-2002 adoptada por el Consejo el 12/12/2002 y su anexo el Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, por haber actuado en ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas por la normativa comunitaria vigente sobre la materia.

39.Expediente # 61-03-18-02-2003, Actor: Diputado Suplente al Parlamento Centroamericano, Señor Víctor Elías Francisco Bendeck Ramírez, **Demandado:** Estado de Honduras, **Acción:** Demanda por violación de la Normativa Comunitaria centroamericana referente a la inmunidad parlamentaria establecida en el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano.

Se declara sin lugar las pretensiones de la parte demandante, porque el Tribunal ya se había pronunciado sobre quién era el alto funcionario del Estado del Estado de Honduras que ha de representar a ese Estado en el Juicio.

40.Expediente # 62-04-20-06-2003 Actor: Confederación de Agentes Aduaneros del Caribe (CONAAC). **Demandado:** Reunión de Presidentes del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). **Acción:** Demanda con acción de nulidad contra la Enmienda al Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) aprobada por le Reunión de Presidentes del Sistema de la Integración Centroamericana, el 27 de febrero del 2002.

Se declaró la validez del acto comunitario emanado de la Reunión de Presidentes, Órgano Supremo del SICA, por cuanto el mismo legítimamente crea una modalidad de solución de controversias de orden estrictamente comercial e interestatal en Centroamérica, como mecanismo de revitalización impulsado por el propio proceso de integración económica dentro del subsistema de integración económica regional. De igual manera se resuelve que la modalidad de solución de controversia establecida mediante la reforma del 25/02/02 no deroga, ni modifica, ni menoscaba en manera alguna la competencia atribuida a la Corte Centroamericana de Justicia.

41.Expediente # 63-05-02-07-2003, Actor: Señora Ángela Rosa Arana Cuadra, Representada legalmente por la Abogada Xochilt Rubenia Gutiérrez Rodríguez, **Demandado:** Estado de Nicaragua, Representado por el Procurador General de la República de Nicaragua, Doctor Francisco Fiallos Navarro, **Acción:** Demanda conforme al Artículo 22 literal f y 30 del Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia y Artos. 31, 32 y 33 de la Ordenanza de Procedimientos.

En este caso la CCJ resuelve que la Secretaria del Tribunal archive el presente expediente, ya que ninguna de las partes siguió el curso del proceso, desde que el escrito fue presentado, esto de conformidad al artículo 64 de la Ordenanza de Procedimiento.

42.Expediente # 64-06-02-07-2003, Actor: Doctor Rodolfo García Medal en representación de sus hijos: Rodolfo, Rosalía y Estelvina García Baltodano y Doctor Uriel Mendieta Gutiérrez. Representado por el Abogado José Balmore Flores Rivera, **Demandado:** Estado de Nicaragua, Representado por el Procurador General de la República de Nicaragua, Doctor Francisco Fiallos Navarro, **Acción:** Demanda conforme al Artículo 22 literal f y 30 del Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia y Artos. 31, 32 y 33 de la Ordenanza de Procedimientos.

La CCJ declaró con lugar las pretensiones de la parte demandante por lo que se requirió al Estado de Nicaragua para que a través de la Secretaria de Estado Correspondiente, dicte el acuerdo ordenando el pago por los daños y perjuicios a que fue condenando por sentencia ejecutoriada y posteriormente proceda a la erogación de los mismos en los términos establecidos por la Ley del 27 de febrero de 1913.

43.Expediente # 66-01-30-04-2004, Actor: Doctor Juan Francisco Reyes , Diputado Titular al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), presentado por medio de su apoderado, el Abogado Jorge Luis Borrayo Reyes, **Demandando:** Estado de Guatemala representado por el Señor Presidente de la República Licenciado Oscar Berger Perdomo, **Acción:** Demanda por violación de normativa del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos y otros Instrumentos Derivados y Complementarios, anteriores o posteriores a dicho Protocolo. Referente a la Inmunidad.

En este caso se resuelve declarar con lugar a la demanda interpuesta por parte actora en contra del Estado de Guatemala, por lo tanto se declara que el demandante mientras sea tenido como diputado por el Parlamento Centroamericano y no sea privado de sus inmunidades y privilegios por el referido Parlamento, no puede ser obstaculizado en el desempeño de sus funciones como diputado centroamericano, ni restringido en su libertad, ni procesado por ningún tipo de autoridad. Se Resolvió que el Estado de Guatemala ha incurrido en responsabilidad internacional al no cumplir con el derecho internacional, derecho de integración y derecho comunitario centroamericano así como sus obligaciones como estado parte de los tratados constitutivos de la comunidad centroamericana y como estado miembro del SICA..

44.Expediente # 67-02-08-07-2004, Actor: Doctor Hernaldo Zúñiga Montenegro, Ex-Magistrado de CSJ de Nicaragua, **Demandado:** Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, representada por su señora Presidenta, Doctora Yadira Centeno G, **Acción:** Demanda por violación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Nicaragua numeral 7 del artículo 142 y de los artículos de la Constitución Política de Nicaragua, 25 numeral 3, 27 y 52.

La Corte decide no dar curso a la demanda interpuesta por la parte actora, por no tener el Tribunal Competencia para conocer de la misma, esto en base al artículo 22 y 30 del Estatuto de la Corte ya que el caso no corresponde a ninguno de los supuestos mencionados en dicho artículo.

45.Expediente # 68-03-04-08-2004, Actor: Ingeniero Mario Rafael Malespín Martínez, Especialista en telecomunicaciones, **Demandado:** Poder Ejecutivo de Nicaragua representado por el Excelentísimo Señor

Presidente de la República Ing. Enrique Bolaños Geyer, **Acción:** Demanda con acción de cumplimiento efectivo de la sentencia No.5 dictada por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Sala de lo Constitucional el 4-02-2003 a las 10:45 a.m. Artículo 22 literal f del Estatuto de La Corte"

Se declaró no ha lugar a la demanda en contra del poder ejecutivo de la República de Nicaragua, ya que en este caso en particular le corresponde a las autoridades laborales conocer de éste caso y no a este tribunal.

46.Expediente # 70-02-04-01-2005, Actor: Omar Enrique González, mayor de edad, casado, Licenciado en Contaduría Pública, salvadoreño y del domicilio de Soyapango, departamento de San Salvador, República de El Salvador, **Demandado:** Dr. Oscar Alfredo Santamaría Jaimes, Secretario General del SICA, **Acción:** "Recurso de Apelación en contra de Resolución dictada por el Secretario General del SICA interpuesto por Omar Enrique González VS. Doctor Oscar Alfredo Santamaría Jaimes, Secretario General del SICA que confirma el despido de su trabajo en esa institución y le deniega el recurso de reposición que había introducido. Resolución definitiva del uno de junio del año dos mil cinco 1-06-2005".

Esta demanda fue declarada improcedente por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, quedando en consecuencia firme la resolución emitida por el Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana el 29/11/04.

47.Expediente # 71-03-15-07-2005, Actor: Empresa Hebert Industrial S. de R.L. de C.V, **Demandado:** Estado de Honduras a través de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, **Acción:** Demanda por Irrespeto de

Fallo Judicial. Que respetuosamente se ordene a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, la ejecución de la Sentencia definitiva dictada a favor de su mandante por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en fecha uno de noviembre de dos mil uno, y que fue declarada firme por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha once de enero del dos mil dos, para que se dé cumplimiento a lo fallado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo y en consecuencia se pague a su mandante las cantidades que en dicha sentencia se expresan, más los gastos que en concepto de atención médica que su mandante ha tenido que erogar para la atención de sus trabajadores.

La Corte resuelve no dar curso a la demanda, por carecer de fundamentos razonables, por falta de claridad sobre a quién es la demanda y de igual manera falta de requisitos de forma y fondo, esto de conformidad a los artículos 22 literal f del Estatuto de la Corte y 32 inciso final de la Ordenanza de Procedimientos.

48.Expediente # 72-04-23-09-2005 Actor: Octavio José Arguello Vigil,
Demandado: Poder Judicial de Nicaragua, **Acción:** Presunción de Falsificación de Documentos públicos.

Se declaró inadmisibile la demanda de conformidad con los artículos 30 del Convenio de Estatuto y 32 de la Ordenanza de Procedimiento.

49.Expediente # 74-01-04-08-2006, Actor: Señor Oscar Roberto Balcáceres Castro, Diputado del Parlamento Centroamericano,
Demandado: PARLACEN, **Acción:** Demanda con fundamente en el Art. 22 Inciso "g" del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia.

En este caso la CCJ Resuelve dar ha lugar a las pretensiones del demandante por habersele violado sus derechos comunitarios que le corresponden en su calidad de Diputado Suplente del PARLACEN; se decide darle no ha lugar al reintegro del cargo. No ha lugar al pago de Ciento Cincuenta Mil Dólares en calidad de supuestos daños y perjuicios causados a la parte demandante. Es Reconocida por el Tribunal la existencia de un agravio comunitario, siendo la consecuencia natural y lógica reparar el daño causado, se condena al Parlamento Centroamericano a pagar al demandante la suma de Veinticuatro Mil Setecientos Noventa y Cinco Dólares Netos, y la parte proporcional que corresponde al bono catorce.

50.Expediente # 75-02-11-08-2006, Actor: Licenciado Alfonso Portillo Cabrera, Ex-presidente de la República de Guatemala, **Demandado:** Estado de Guatemala representado por el Presidente de la República Licenciado Oscar Berger Perdomo, **Acción:** Demanda por supuestas violaciones a Normas de Derecho Internacional, de Integración y Comunitarias Centroamericanas.

La Corte declaró sin lugar la petición de la parte demandada en el sentido en que se considera que el Estado de Guatemala no está sujeto a la jurisdicción de la Corte Centroamericana de Justicia, ya que Guatemala es Estado Parte del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de Organización de los Estados Centroamericanos desde el día 13/08/1993 y mediante ese instrumento internacional Guatemala reconoció la jurisdicción obligatoria de la Corte Centroamericana de Justicia para resolver todas las controversias sobre la interpretación y ejecución de dicho Tratado y de sus instrumentos complementarios y derivados. Se declara que la inmunidad de jurisdicción penal no supone la impunidad jurídica. La inmunidad parlamentaria centroamericana tiene clara limitaciones. En el caso de los diputados al Parlamento Centroamericano debe de entenderse que el privilegio de la inmunidad se otorga a sus miembros única y exclusivamente para no ser responsables y por lo tanto para no ser perseguidos judicialmente, por los votos o por sus opiniones escritas o verbales que emitan durante el periodo en el cual

ejerce su cargo y en el cumplimiento de sus funciones oficiales. Se declaró no ejecutable la resolución de la Honorable Corte Constitucional de Guatemala del 20/07/04 y en consecuencia continua vigente y con obligatoriedad plena para el Estado de Guatemala el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras Instancias Políticas.

51.Expediente # 77-04-31-10-2006, Actor: Mercedes Santos, María Candelaria, Joaquín Mauro y Manuel Antonio Calderón Castro, representados por el Doctor Carlos Rodríguez Aguilar, **Demandado:** Estado de El Salvador, representado por el Fiscal General de la República, **Acción:** Demanda en base al Convenio de Estatuto de La Corte, "Artículo 22 literal "f". Cuando de hecho no se respeten los fallos judiciales."

Este Caso fue declarado no ha lugar a las excepciones de improponibilidad e ineptitud de la demanda alegadas e opuestas por la parte demandada, de igual manera no se da ha lugar a las pretensiones del demandante por considerar que no ha existido irrespeto a fallos judiciales en este caso y se absuelve de cualquier responsabilidad al Estado de El Salvador.

52.Expediente # 78-05-20-12-2006, Actor: Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de Centroamérica y el Caribe (CONAAC), representado por el Doctor Joe Henry Thompson Arguello. **Demandado:** Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), representado por el Señor Marco Vinicio Ruiz Gutiérrez, ministro de Comercio Exterior de Costa Rica por ser la República Costa Rica la actual vocera de Centroamérica y presidir dicho Órgano Comunitario. **Acción:** Demanda con acción de nulidad contra el Acuerdo No. 01-2006 (COMIECO-EX) en base al Artículo 22 literal "b" y "g" del Convenio de Estatuto de La Corte y otras disposiciones comunitarias.

En aplicación de los artículos 8, 9, 10, 16, 19, 22, 34 y 35 del Protocolo de Tegucigalpa; 2, 3, 22 literales b) y g), 31, 32, 34, 35, 36 y 37 del Estatuto de La Corte; 1 literal d), 5, 6, 7, 36, 41, 52 y 55 del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala); 1, 3, 4, 5, 6 y 7 del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano; 3 literales c) y d), 4, 22, 23, 25, 29 y 60 de la Ordenanza de Procedimientos; la Doctrina y la Jurisprudencia del Tribunal, la CCJ resolvió declarar con lugar a la demanda y Declarar nulo y sin ningún valor ni efecto legal el Acuerdo Número 01-2006(COMIECO-EX) suscrito el nueve de mayo de 2006 en la ciudad de San José, República de Costa Rica, por el Consejo de Ministros de Integración Económica, mediante el cual se aprueba el texto del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Se advierte la obligación de observar el correcto proceso de formación de la norma comunitaria.

53.Expediente # 82-01-16-01-2008, Actor: Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de Centroamérica y el Caribe (CONAAACAC), representado por el Dr. Joe Henry Thompson Arguello. **Demandado:** Reunión de Presidentes, Órgano Supremo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). **Acción:** Demanda de Acción de nulidad fundamentada en el Artículo 22, literales "b" y "g" del convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia.

Caso aún No Resuelto.

54.Expediente # 84-03-02-06-2008, Actor: Gamillas Henriquez Ramsi, Presidente del Consejo de Ancianos, **Acción:** Recurso de Interpretación de Convención de la Moskitia del 20 de noviembre de 1894.- Artículos 5, 10, 22 inciso f), 23,24 y 40 del convenio de Estatuto de la corte Centroamericana de Justicia.

Se declaró inadmisible el recurso de interpretación presentado por la parte demandante y por lo tanto se declara sin lugar las medidas cautelares solicitadas por el mismo.

55.Expediente # 85-04-02-06-2008, Actor: Otis Lam Hoppington, Anciano Mayor del Consejo de Ancianos, **Acción:** Recurso de Interpretación del Laudo Arbitral del Emperador de Austria de 1881 en la cuestión entre Nicaragua y la Gran Bretaña, respecto a la reserva de la Moskitia. Artículos 5, 10, 22 incisos f), 23,24 y 40 del Convenio de Estatuto de la corte Centroamericana de Justicia.

Se declaró inadmisible el recurso de interpretación presentado por la parte demandante y por lo tanto se declara sin lugar las medidas cautelares solicitadas por el mismo.

56.Expediente # 86-05-28-08-2008, Actor: Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de Centroamérica y el Caribe (CONAAACAC), representado por el Doctor Joe Henry Thompson Arguello. **Demandado:** Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO) representado por el Señor Fredis Alonso Cerrato Valladares, Ministro de Industria y Comercio de Honduras por ser la República de Honduras la actual vocera de Centroamérica y presidir dicho órgano comunitario. **Acción:** Demanda con Acción de Nulidad contra la Resolución No. 223-2008 (COMIECO-XLIX) emitida por el COMIECO el 25 de abril de 2008, mediante la cual aprueban la modificación del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) en base a los artículos 22 literal b) y g) del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia y otras disposiciones legales.

Caso aún No Resuelto.

57.Expediente # 87-06-08-09-2008, Actor: Asociación de Agentes de Aduana de Costa Rica, representada por el Doctor Joe Henry Thompson Argüello, **Demandado:** Servicio Nacional de Aduanas por medio de la Dirección General de Aduanas en su calidad de Órgano del Estado de la República de Costa Rica, **Acción:** Demanda con Acción de Nulidad contra la CIRCULAR No. DGT137-2007 de fecha 12 de septiembre de 2007, emitida por el Servicio Nacional de Aduanas a través de la Dirección General de Aduanas en su calidad de Órgano del Estado de la República de Costa Rica, con la finalidad de “ establecer un nuevo criterio clasificador, para fijar o gravar los artículos con impuestos de importación mayores, distintos a los contenidos en el arancel de importación”, en base a los artículos 22 literal c) del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, 60 literal b) de la Ordenanza de Procedimientos, 3 literal c), 4 literal h) del Protocolo de Tegucigalpa, 6 y 7 del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano.

Este caso la CCJ resuelve que el Estado de Costa Rica está sometido a la jurisdicción y competencia obligatoria de la Corte Centroamericana de Justicia ya que es parte del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), por lo tanto la Circular DGT-137-2007 del 12 de Septiembre del 2007, emitida por la Dirección General de Aduanas del Estado de Costa Rica, viola el Derecho Comunitario Centroamericano y es absolutamente nula.

58.Expediente # 88-07-07-10-2008, Actor: Camilo Agustín Brenes Pérez y José Rodolfo Dougherty Liekens, parlamentarios centroamericanos, representados por el Abogado Rodolfo Díaz Bonatti, **Demandado:** Parlamento Centroamericano (PARLACEN) a través de su Presidente, Julio Guillermo González Gamarra, **Acción:** Demanda con Acción de

Nulidad e incumplimiento contra Resolución AP/5-CXCII-2007 del Parlamento Centroamericano en base a los Artículos 35 párrafo segundo del Protocolo de Tegucigalpa, y 22 literales b) y g) y 30 del Convenio de Estatuto de La Corte y otras disposiciones.

En este caso se declaró la nulidad *ex nunc*¹ de la Resolución AP/5-CXCII-2007. Se Resolvió que para que los Observadores Permanentes de República Dominicana puedan integrar quórum y emitir voto en futuras elecciones de la Junta Directiva del PARLACEN, sería necesario que previamente se cumplan los requisitos del Tratado Constitutivo del PARLACEN, se resolvió de igual manera que no había condena en costas procesales.

59.Expediente # 89-08-06-11-2008, Actor: Armando León Gómez, parlamentario centroamericano suplente representado por el abogado Gustavo León Gómez Rodas, **Demandado:** Parlamento Centroamericano (PARLACEN), a través de su presidente, gloria oquellí, **Acción:** Demanda por emisión de resolución del PARLACEN contenida en el acta jd-7/2007-2008.

En este caso se declara no ha lugar a la demanda en contra del Parlamento Centroamericano en el sentido dejar sin efecto la Resolución N. 7.27 de la Junta Directiva del PARLACEN, contenida en el Acta JD-7/2007-2008, correspondiente al período de Sesiones de la misma y se declaró no ha lugar a lo solicitado por el demandante sobre el pago de remuneraciones, tanto las devengadas como las que por devengarse, así como las demás indemnizaciones y derechos pedidos.

¹ En el ámbito jurídico se utilizan para precisar que un acto, contrato, condición o ley, no tienen efecto retroactivo y producen sus efectos desde que se perfecciona la relación jurídica.

60.Expediente # 90-09-12-11-2008, Actor: Ricardo Alfredo Flores Asturias, Diputado Titular por el Estado de Guatemala al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), **Demandado:** Parlamento Centroamericano (PARLACEN), **Acción:** Demanda con Acción de Nulidad e Incumplimiento de Actos realizados por el Parlamento Centroamericano y Consulta en la Interpretación y Aplicación del Artículo 12 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas y Nulidad de los Artículos 42, 43, 44, 45, 46 Primer Párrafo del Artículo 61, Inciso 3 del Artículo 102, inciso 9 del 116, 122 y 129 del Reglamento Interno de dicho Órgano del SICA.

La CCJ resolvió téngase por no presentado el escrito de la parte demandante por ser éste irrespetuoso para el Tribunal de igual manera se declara amonéstese severamente a la parte actora y se ordénesele que se abstenga a sus escritos proferir insultos o aseveraciones irrespetuosas, tanto a los Magistrados que integran La Corte como a este Tribunal. En caso en que la parte insista en sus faltas de respeto, líbrese atento oficio a la Honorable Corte Suprema de Justicia de Guatemala solicitándole que inicie informativo sobre la conducta de dicho profesional a fin de aplicar las sanciones correspondientes. Sin lugar la solicitud de declarar la caducidad de la instancia, según artículos 30 del Convenio de Estatuto 3 y 64 de la Ordenanza de Procedimiento.

61.Expediente # 92-11-21-11-2008, Actor: Luis Adolfo García Esquivel, Diputado Propietario del Parlamento Centroamericano. **Demandado:** Parlamento Centroamericano (PARLACEN). **Acción:** Demanda con Acción de Nulidad absoluta e incumplimiento por irregularidades de fondo o deficiencias del Plenario del Parlamento Centroamericano y por la ilegal participación de los parlamentarios designados de la República Dominicana en la elección para la Junta Directiva del PARLACEN, período 2008-2009 que violenta el Protocolo de Tegucigalpa, el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas, el Reglamento Interno, entre otros.

En este caso se Resolvió no dando ha lugar a la pretensión de la parte demandada de no admitir la demanda por falta de agotamiento previo de los procedimientos internos, se declaró que la acreditación de los Observadores de República Dominicana, en calidad de Parlamentarios designados hechas por el PARLACEN por las autoridades nacionales de ese país, es legítima. Se declara de igual manera la nulidad ex nunc de la Resolución AP/5-CXCIII-2007. Y por último se declara que para que los Observadores Permanentes de República Dominicana puedan integrar quórum y emitir voto en futuras elecciones de la Junta Directiva del PARLACEN, será necesario que previamente se cumplan los requisitos del Tratado Constitutivo del PARLACEN de ser electo por sufragio universal, directo y secreto.

62.Expediente # 93-01-07-01-2009, Actor: Luis Adolfo Orellana Cisneros, Coronel de la Fuerza Armada de El Salvador, representado por el Abogado y Notario, Oscar Armando Toledo Trigueros, **Demandado:** Estado de El Salvador, **Acción:** Interpretación del Recurso por Incumplimiento de Sentencia en base al Artículo 22 letra f) del Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia.

De conformidad con los artículos 22 literal f segundo supuesto, 30, 39 y 40 del Convenio de Estatuto de la Corte, 3 literales a y d 4, 5 numeral 4, 7, 8, 13, 14, 18, 22 numeral y 64 de la Ordenanza de Procedimiento, la CCJ por unanimidad de votos resolvió ha lugar a la excepción de falta de competencia objetiva por cumplimiento del fallo.

63.Expediente # 96-04-17-04-2009, Actor: Fundación Santaneca para el Desarrollo Comunitario y Ambiental (FUNSADECA), representada por el Doctor Jorge Antonio Giammattei Avilés, **Demandado:** Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, **Acción:** Demanda por “Denegación de Justicia”, en base a los Artículos 4 literal i) del “Protocolo de Tegucigalpa”, 40 del Convenio

de Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia y 65 de su Ordenanza de Procedimientos. Así como otras disposiciones, Cartas, Tratado, Protocolo, Convención, Pacto y Declaraciones citadas.

Se declaró sin lugar la demanda presentada por falta de competencia por parte de la Corte según los artículos 40 del Estatuto de la Corte y 65 de Ordenanza de Procedimientos.

64.Expediente # 104-01-18-02-2010, Actor: Señor Pablo Javier Pérez Campos, Diputado ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) por la República de Panamá. **Demandado:** Estado de Panamá, por medio del Excelentísimo Señor Presidente, Señor Ricardo Martinelli Berrocal. **Acción:** Demanda con Acción de Nulidad e Incumplimiento en base al Artículo 22 literal c) del Convenio de Estatuto de La Corte.

Caso aún No Resuelto..

De éstos 64 casos presentados por particulares sean personas naturales o jurídicas ante la Corte Centroamericana de Justicia, 21 fueron admitidos por dicho Tribunal, la mayoría de los casos declarados no ha lugar por el Tribunal se debió en su gran mayoría por faltas de forma o de fondo del escrito presentado por la parte actora, por falta de competencia de parte de y por no haber agotado los recursos internos del Estado, estos motivos según el Estatuto de la Corte, la Ordenanza de Procedimientos, Reglamento General y el Protocolo de Tegucigalpa.

Estos datos antes mencionados nos demuestran que el particular si ha hecho uso de éste Tribunal Regional, ya que la cantidad de casos conocidos, es bastante gratificante para el tema del acceso del individuo a instancias internacionales.

De igual manera de los 64 casos antes mencionados, 3 de ellos todavía no han sido resueltos.

CAPITULO IV

ANÁLISIS DEL CASO DE JEANETT DEL CARMEN VEGA BALTODANO CONTRA EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NICARAGUA, EN APLICACIÓN A LAS DISPOSICIONES PROCEDIMENTALES ANTE LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA

En este capítulo se analizará el caso presentado por la Señora Jeanett Vega Baltodano, por medio de su apoderado general judicial, señor Orlando Corrales Mejía, en contra del Poder Ejecutivo de la República de Nicaragua, representado por la Señora Violeta Barrios de Chamorro, en su carácter de Presidenta de la República, para que de las instrucciones necesarias para el cumplimiento de la sentencia arbitral de las cinco de la tarde del ocho de Junio de mil novecientos noventa y dos y en consecuencia se pague a la demandante las cantidades que en dicha sentencia se expresen, con los intereses legales y moratorios en que se ha incurrido desde la fecha de tal sentencia, el reconocimiento del menor valor que tiene actualmente el córdoba con relación al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica como también lo previene la referida sentencia, mas los daños y perjuicios ocasionados a partir de la fecha en que se debió ejecutar la misma.

Este análisis se hará revisando las etapas del proceso extraído del expediente No. 8-3-6-1996, el cual consta con 192 folios y lo dispuesto en el Estatuto y Ordenanza de Procedimiento de la Corte Centroamericana de Justicia. (Demanda por Falta de Cumplimiento de Sentencia Arbitral, 1996)

1. COMPETENCIA DE LA CCJ

En el caso que nos ocupa, la parte demandante alega que de conformidad con el Capítulo II De la Competencia y otras Funciones del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia Artículo 22 literal f se determina que: La Competencia de la Corte será, entre otras la de conocer y resolver solicitudes del agraviado de conflictos que puedan surgir entre los Poderes u Órganos fundamentales de los Estados y cuando de hecho no se respeten los fallos judiciales. Disposición que esta preceptuada, de igual manera, en el artículo 5 numeral 4 de la Ordenanza de Procedimientos, que se refiere a la jurisdicción y competencia de acuerdo al artículo pre citado del Estatuto.

Cabe mencionar que la competencia de la Corte ha sido aceptada por el Estado de Nicaragua, siendo este la parte demandada, toda vez que este Estado ha ratificado el Convenio de Estatuto de esta Instancia jurisdiccional, a través del Decreto Ejecutivo No. 54-93, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 233 del 09 de Diciembre de ese mismo año.

2. PARTES PROCESALES

El Artículo 3 literal d, de la Ordenanza de Procedimientos de la Corte Centroamericana de Justicia, faculta a cualquier persona a figurar como sujeto procesal, en los asuntos que son propios de su jurisdicción y competencia. El Artículo 7 y 8 del mismo cuerpo legal establece las formalidades a cumplir por los sujetos Procesales. En el presente caso se le ha dado cumplimiento a estas disposiciones, pues la parte actora es una persona natural, siendo la señora Jeanette del Carmen Vega Baltodano, que actúa por medio de un apoderado general judicial, acompañando el Poder correspondiente debidamente autenticado, a favor del Doctor Orlando Corrales Mejía, abogado en ejercicio, domiciliado en Managua, Sede de la Corte.

3. ACERCA DE LA DEMANDA

De conformidad con el artículo 4 de la Ordenanza de Procedimiento, se estipula que la Corte tiene en los negocios de su jurisdicción la autoridad y atribuciones que expresamente le confieren su Estatuto; y, desde el momento en que se inicie una demanda, posee la facultad de decidir sobre su competencia, interpretando los tratados y convenciones y aplicando los principios del derecho de integración y el derecho internacional referente al punto o puntos de discusión.

Al respecto es necesario expresar que los principios que en relación al derecho de las partes determina este mismo instrumento en su artículo 2, son: respeto al derecho en la interpretación y ejecución del Protocolo de Tegucigalpa y el Convenio de Estatuto de la Corte, sus instrumentos complementarios o actos derivados de los mismos; la salvaguarda de los propósitos y principios del Sistema de Integración Centroamericana, la objetividad de los derechos, igualdad de las partes y la garantía del debido proceso.

4. HECHOS ALEGADOS

En el asunto en cuestión se han relatado los hechos que suscitaron la demanda presentada ante la Corte, por lo que se hace una mención sucinta:

El día 3 de octubre de mil novecientos noventa y uno, la parte actora presentó demanda en contra del Fondo para la Investigación y Desarrollo Tecnológico, entidad adscrita al ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria, hoy Ministerio de Agricultura y Ganadería y en consecuencia parte integrante del Poder Ejecutivo de Nicaragua.

La Acción invocada tuvo fundamento en incumplimiento de contrato de Servicios Profesionales, suscrito entre las partes, el treinta de Junio de mil novecientos ochenta y nueve.

La demanda por previo acuerdo contractual, se tramito en juicio arbitral, al que en su oportunidad se opusieron tanto el representante legal del Ministerio, como el Procurador Civil y Laboral Nacional, que por Delegación de la Procuraduría de Justicia represento al Estado y más específicamente al Poder Ejecutivo de Nicaragua, alegando estos asuntos de competencia, que finalmente se resolvieron a favor de la demandante.

El Tribunal de Arbitraje emitió laudo arbitral a las cinco de la tarde del ocho de Junio de mil novecientos noventa y dos, ordenando al Fondo para Investigación y Desarrollo Tecnológico, adscrito al Ministerio de Agricultura pagar a la demandante señora Vega Baltodano, las siguientes cantidades: La suma de doce mil cuatrocientos ochenta córdobas netos, en concepto de complementos de honorarios por servicios profesionales; setenta y ocho mil córdobas, en concepto de honorarios por servicios profesionales; dieciséis mil doscientos cincuenta córdobas en concepto de depreciación de vehículo; cuatro mil ochocientos córdobas, en concepto de combustible; dos mil cuatrocientos córdobas, correspondiente a viáticos; tres mil córdobas, en concepto de pago por trabajos de secretarias; setenta y un mil ochocientos setenta córdobas, en concepto de daños y perjuicios, intereses moratorios, gastos generales y daño emergente; cuarenta y tres mil cuatrocientos veinticuatro córdobas, en concepto de costas del juicio.

Se manda pagar en total la suma de DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CÓRDOBAS (C\$ 219, 744.00), equivalente a CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA DÓLARES, CON OCHENTA CENTAVOS DE DÓLAR (\$ 46, 444.80).

En contra de dicha sentencia el Estado de Nicaragua por medio de la Procuraduría General de Justicia, interpuso Recurso de Casación, en el que fue declarado sin lugar mediante sentencia de las once de la mañana del primero de Marzo de mil novecientos noventa y cuatro, dictada por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, quedando en consecuencia, pasada en autoridad de cosa juzgada el laudo arbitral.

El Juzgado Primero para lo Civil del Distrito de Managua, por auto de las once y treinta minutos de la mañana del veintiuno de abril de mil novecientos noventa y cinco, en trámites de Ejecución de Sentencia, envió oficio a la Presidenta de la República, como representante del Poder Ejecutivo y Jefe de Estado, para que se procediera a pagarle a la demandante las sumas ya indicadas. Para efectos de fijar con mayor claridad los hechos y las responsabilidad del Poder Ejecutivo de la República de Nicaragua, la parte actora, al presentar su demanda ante la Corte Centroamericana estimo conveniente transcribir parte de lo resuelto en el indicado juicio de ejecución de sentencia que en lo pertinente dice: "...el decreto creador del Fondo para la Investigación y Desarrollo Tecnológico, anteriormente adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería, fue derogado según Decreto Número 67-92 del veintiuno de Diciembre de mil novecientos noventa y dos, y en consecuencia desaparecido dicho fondo, cuyo patrimonio es prioridad del Estado de Nicaragua, corresponde al Estado la asunción de los créditos y reclamaciones contra dicho Fondo; POR TANTO, de conformidad con lo solicitado y con el respeto que su alta investidura se merece, gírese oficio a la señora presidenta de la República doña Violeta Barrios de Chamorro, para que por medio de la Secretaria de la Presidencia que corresponda y en cumplimiento de las resoluciones judiciales aquí consignadas, dicte el acuerdo que en derecho corresponde y ejecute el pago de las sumas debidas a la señora JEANETTE VEGA BALODANO, sumas que totalizan en ese momento el equivalente en moneda nacional a la cantidad de cuarentiséis mil cuatrocientos cuarenticuatro dólares con ochenta centavos netos.

En base al artículo 61 de la Ordenanza de Procedimientos, se presenta junto con el escrito de demanda, certificación de la sentencia ejecutoriada dictada por Tribunal Arbitral a las cinco de la tarde del ocho de Junio de mil novecientos noventa y dos y la parte actora ofrece presentar pruebas de los daños y perjuicios materiales, sicológicos y morales que se le han acusado.

5. AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS

En este caso se demostró el agotamiento de la vía interna, la cual es un requisito fundamental para que la Corte pueda dar a lugar a la demanda, se acompañó el Certificado de la Sentencia, dictada por el Tribunal Arbitral, de las cinco de la tarde del ocho de Junio de mil novecientos noventa y dos, cuyo incumplimiento se reclama. De igual manera se presentó Documento Original de Notificación de la parte resolutive de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia a las once de la mañana del uno de Marzo de mil novecientos noventa y cuatro, denegatoria del recurso de casación interpuesto por el Gobierno de Nicaragua en contra del Laudo arbitral.

Según lo expresado por la parte actora se han realizado un sinnúmero de gestiones, con el objetivo de que la Presidencia de la República, haga cumplir la sentencia ejecutoriada, sin ningún resultado positivo.

De igual manera el representante de la parte actora, acompañó con el fin demostrar las gestiones realizadas ante el Poder Ejecutivo, concerniente al agotamiento de la vía interna y en cumplimiento del artículo 32 de la Ordenanza de Procedimiento, los siguientes documentos: Escritos varios de las gestiones de tipo administrativo realizadas para buscar cumplimiento de la sentencia arbitral; Oficio enviado por el Juzgado Primero para lo Civil del Distrito de Managua, todos dirigidos a la señora Presidenta de la República de Nicaragua.

6. PARTE PETITORIA DE LA DEMANDA

En el Escrito presentado por la parte demandante y de manera literal se hace la siguiente Petición: “Siendo competente la Corte Centroamericana de Justicia, comparezco en nombre de mi representada a demandar como efectivamente demandando al Poder Ejecutivo de Nicaragua, presidido por la Señora VIOLETA

BARRIOS DE CHAMORRO y respetuosamente solicito que previa la tramitación de Ley, se ordena a la Presidenta de la República quien es mayor de edad, viuda y del domicilio de Managua, que en su calidad de Titular del Poder Ejecutivo de Nicaragua, dar las instrucciones necesarias para el cumplimiento de la sentencia arbitral de las cinco de la tarde del ocho de Junio de mil novecientos noventa y dos y en consecuencia se pague a mi representada las cantidades que en dicha sentencia se expresen, con los intereses legales y moratorios en que se ha incurrido desde la fecha de tal sentencia, el reconocimiento del menor valor que tiene actualmente el córdoba con relación al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica como también lo previene la referida sentencia, mas los daños y perjuicios ocasionados a partir de la fecha en que se debió ejecutar la aludida sentencia.”

7. ADMISIÓN DE LA DEMANDA POR PARTE DE LA CORTE

La Corte se pronunció por auto del diez de Junio de mil novecientos noventa y seis que se tiene por presentada la demanda incoada por la señora Jeanette Vega Baltodano, por medio de su apoderado general judicial y se pasa al conocimiento de la Corte en Pleno a fin que resuelva sobre la admisibilidad de la misma, de conformidad con el procedimiento correspondiente.

De acuerdo a lo preceptuado por la Ordenanza de Procedimiento, artículo 31 y 32, los que exponen que el ejercicio de la acción ante La Corte deberá ajustarse a las disposiciones de esta Ordenanza y no se dará curso a una demanda en que dejen de exponerse los hechos y los fundamentos de derecho constitutivos de la cuestión o cuestiones controvertibles, y que no señale las pruebas que aportará en sustento de su demanda, tampoco se le dará curso a las demandas que carezcan de fundamento razonable a juicio del Tribunal.

El día trece de Junio de mil novecientos noventa y seis a las nueve y treinta minutos de la mañana, La Corte Centroamericana de Justicia, dicta auto admitiendo la demanda y se manda a seguir el procedimiento establecido. Con

el libelo de demanda y como se dijo anteriormente, se acompañan los documentos que la parte demandante consideró oportuno, los cuales rolan en el expediente y se da por recibidos, mandando a emplazar a la parte demandada.

Cabe aclarar que los señores Magistrados Rafael Chamorro Mora y Orlando Trejos Somarriba, expresan que al momento en que dicta la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, por Recurso de Casación, de las once de la mañana del uno de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, en la cual se resolvió no casar la Sentencia del Tribunal Arbitral, cuya ejecución se demanda, eran Magistrados de ese Tribunal, por lo que en base al artículo 37, acápite c de la Ordenanza de Procedimiento, preceptúa, en su parte conducente que son motivos de impedimento o recusación que Magistrados, en relación con las partes o sus representantes o mandatarios...c) Intervención anterior en el asunto. Además el artículo 38 dispone que el Magistrado que conociere que existe respecto a él alguno de los motivos señalados en el artículo correspondiente, pre citado, estará obligado a declararlo al Tribunal.

Por lo que ambos Magistrados de forma separada ponen en conocimiento de ese alto Tribunal tal hecho y piden se les excuse de conocer de la presente demanda. Por su parte y mediante auto de este Tribunal se manda a suspender la causa hasta que el Tribunal decida sobre ese incidente.

La Corte Centroamericana de Justicia vista las solicitudes de excusa presentada por los Magistrados Rafael Chamorro Mora y el Magistrado Orlando Trejos Somarriba, las declaró procedentes por lo que se accede a lo solicitado, de conformidad a la parte infine del artículo 39 de la misma Ordenanza de Procedimiento y se llama en sustitución de los Magistrados a los Suplentes Francisco Darío Lobo Lara y Leonte Valle López de acuerdo al artículo 25 acápite d del Reglamento de la Corte.

8. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR PARTE DEL ESTADO DE NICARAGUA

Para admitir una demanda contra los sujetos procesales establecidos en el artículo 3 de esta Ordenanza, será requisito esencial que la parte actora identifique plenamente a la contraparte, de acuerdo a la legislación vigente de cada Estado.

Admitida una demanda se dará copia de ella a la parte demandada con las inserciones pertinentes, lo cual tendrá la calidad de emplazamiento para que comparezca a manifestar su defensa, en un plazo prudencial que fijará La Corte y el cual no podrá exceder de sesenta días.

En la providencia dictada por el Tribunal y que se cito de previo en donde se manda a emplazar a la parte contraria se concedió el término de sesenta días para que el Poder Ejecutivo emitiera el informe correspondiente.

La parte demandada por escrito presentado el trece de septiembre de mil novecientos noventa y siete se persona el señor Carlos Hernández López y actúa en carácter de Procurador General de Justicia de la República, teniendo a su cargo la representación legal del Estado de Nicaragua, lo que demuestra con la fotocopia de acta de nombramiento y toma de posesión de su cargo.

En dicho escrito el Procurador General de Justicia de la República, se refiere a la notificación de la resolución de las trece horas del día once de septiembre de mil novecientos noventa y siete, mediante el cual se manda a oír a la parte contraria en lo que estime a bien, de la solicitud presentada de certificación del primer auto dictado por esa autoridad en el cual se admite la demanda y el auto de notificación del emplazamiento. El estado de Nicaragua no se opone a que sea librada dicha certificación.

En este sentido es necesario aclarar que durante el trámite de excusa de los Magistrados Chamorro Mora y Trejos Somarriba, la parte demandante solicita que se le certifiquen por parte del Tribunal, el primer auto dictado por esa

autoridad en el cual se admite la demanda y el auto de notificación del emplazamiento, mandado la Corte a oír por tercero día a la parte contraria.

Es decir, que es sobre esta solicitud que la parte demandada se pronuncia y por ser la primera acción ante el Tribunal se persona, acreditando, en este caso la representación con fotocopia certificada del nombramiento del señor Carlos Hernández López, en su calidad de Procurador General de Justicia de la República de Nicaragua.

En el análisis y revisión del Expediente en cuestión no se observa el Informe correspondiente que el Estado de Nicaragua debía de remitir a la Corte, en respuesta al Emplazamiento que se le hiciera.

9. PRUEBAS PRESENTADAS DURANTE EL PROCESO

De acuerdo con el artículo 41, 42 y 43 de la Ordenanza de Procedimiento, se pueden presentar las pruebas en el término de ocho días siguientes a la contestación de la demanda, el Tribunal, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre la necesidad de prueba. Si el Tribunal resolviere que no ha lugar a la etapa de prueba, el Presidente fijará día y hora para la audiencia y dispondrá para el efecto la convocatoria a las partes.

Si el Tribunal resolviere abrir la etapa de prueba, señalará los hechos y el término en que deberán probarse. De lo resuelto se notificará a las partes y se les ordenará lo que corresponda.

Los medios de pruebas que se reconocen y admite el Tribunal son:

- a) La declaración de las partes;
- b) El informe rendido a solicitud del Tribunal y la documental;
- c) El testimonio;
- d) El informe de expertos; y
- e) La inspección ocular.

Sin perjuicio de lo anterior La Corte podrá exigir o aceptar otros medios de prueba que crea conveniente para declarar, establecer y ejecutar los derechos que tengan o reclamen las partes.

En el presente caso rolan en el expediente las pruebas siguientes:

- El informe rendido a solicitud del Tribunal y la Documental.
- El testimonio.
- La declaración de las partes.

En escrito de la parte demandante con fecha del veinte nueve de octubre del año mil novecientos noventa y seis expone entre otras cosas que el Estado de Nicaragua no ha rendido informe solicitado por La Corte al momento del emplazamiento a pesar de que ya han transcurrido termino señalado en el mismo ya que el Poder Ejecutivo en su calidad de demandado no ha delegado esa representación que según el artículo 144 de la Constitución de Nicaragua lo ejerce el Presidente de la República.

Solicita además en nombre de la representada que se dicte la sentencia que en derecho corresponde declarando con lugar la demanda y cuantificando las sumas que deben pagarse, considera que es innecesaria la apertura a pruebas y la audiencia.

La Corte de la solicitud hecha por la parte actora, manda a oír por tercero día, después de notificada la presente resolución al Procurador General de la República, el cual no expreso ninguna consideración al respecto.

Posteriormente y en base al artículo 63 y 64 de la Ordenanza, La Corte una vez hecha las consideraciones en acta de las diez de la mañana del trece de noviembre de mil novecientos noventa y seis, considera pertinente y necesario abrir a prueba por medio de treinta días hábiles a partir de la fecha de la última notificación, previene al demandante para que dentro de ese término presente de certificación de las siguientes diligencias judiciales: Resolución del juez competente en que declara pasada en autoridad de cosa juzgada la sentencia arbitral de cuyo cumplimiento se trata, resolución del juez competente de que

en trámite de ejecución de sentencia, se ordena al Poder Ejecutivo e cumplimiento de dicha sentencia y notificación al Poder Ejecutivo de la resolución en que se ordena el cumplimiento del fallo arbitral y de los anexos que se acompañaron en su caso.

En auto con fecha del tres de diciembre de mil novecientos noventa y seis, la parte actora solicita: que la Presidenta de la República Violeta Barrios de Chamorro, sea declarada rebelde, y que a la hora y fecha que La Corte Considere se cite a absolver posiciones al Señor Procurador General Judicial de la República. La Corte se pronuncia no dando a lugar a lo solicitado, expresando que en el auto antes mencionado, donde se admite a pruebas, ya quedó establecida las que deben ser presentadas circunstancias que han de hacerse.

La parte demandante expresa que de conformidad a la legislación interna de Nicaragua, especialmente del Código de Procedimiento Civil, referida a la ejecutoria de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, del oficio enviado por el Juzgado Primero Civil del Distrito en donde se manad a pagar a su representante las cantidades establecidas en el laudo arbitral y otras consideraciones hechas en referencia a pruebas solicitadas, pidiendo que se le dé el valor probatorio a dicho documento aunque no sean exactamente los ordenados por la Corte ya que demuestran que la sentencia arbitral se encuentra ejecutoriada y pasada de autoridad de cosa juzgada, la existencia de la orden para que el titular del Poder Ejecutivo procediera a darle cumplimiento a dicha sentencia y Comunicación a la titular del Poder Ejecutivo mediante oficio.

También se acompaño como prueba de documental al escrito original y fotocopia de carta fechada del catorce de agosto de mil novecientos noventa y cinco dirigida a presidencia de la República.

Las pruebas documentales presentadas y expresadas en el escrito anterior rolan del folio 174 al 181 del Expediente.

10.POSIBILIDAD DE UN ARREGLO ENTRE LAS PARTES

En base a Escrito presentado por el Estado, a través del Procurador, con fecha del veinte uno de Febrero de mil novecientos noventa siete se expresa la voluntad del Estado de cumplir con el pago de la indemnización de la parte demandante, por lo tanto ofrece a la parte actora acudir a las oficinas del Ministerio de Finanzas para establecer, previo acuerdo, la modalidad en que se efectuará dicho pago, monto que será incluido, en partida específica del Presupuesto General de la República del próximo año.

Por su parte la parte actora, a través de su representante expresa en escrito que por la propuesta emanada del Procurador General de la República, Doctor Julio Centeno Gómez, hace saber a la Corte que antes de llegar a una sentencia definitiva se ha arreglado con la contraparte para buscar una forma de arreglo directo, solicitando al Honorable Tribunal una audiencia, para expresar las condiciones de dicho arreglo, dejando a su criterio la forma de terminación del juicio que se ha incoado.

La Corte expresa que de acuerdo al artículo 64, mismos que establece que La Corte, en lo no previsto en esta Ordenanza, podrá señalar los procedimientos a seguirse manteniendo la objetividad de los derechos y la salvaguardia de los propósitos y principios del Sistema de la Integración Centroamericana, la igualdad de las partes y la garantía del debido proceso. Por tanto en auto del cinco de febrero de mil novecientos noventa y siete La Corte acepta lo solicitado y concede audiencia para el día lunes diez de febrero a las once horas en adelante debiendo citarse a las partes para que concurran a dicha audiencia.

Por Acuerdo Numero Cuarenta y Dos, emitido por el Doctor Julio Centeno Gómez, en su calidad de Procurador General de Justicia, delega al Doctor José Denis Maltez Rivas en su carácter de Sub Procurador General de Justicia para que en nombre y representación del Estado de la República de Nicaragua y en tanto lo permitiese la ley, participe en las sesiones, análisis, discusiones y determinaciones que pudiere tomar la Corte Centroamericana de Justicia sobre

la demanda por incumplimiento de fallo de sentencia arbitral, promovida por la señora Jeanette del Carmen Vega Baltodano .

El Sub Procurador Doctor José Denis Maltez Rivas en escrito del siete de febrero de mil novecientos noventa y siete se apersona ante la Corte y pide la intervención de ley que en derecho le corresponde y dándose por notificado además de la resolución que rola en el folio numero ochenta y nueve

La Corte Centroamericana de Justicia por auto del diez de febrero de mil novecientos noventa y siete, expresa que se tiene como parte, en el presente proceso al Doctor José Denis Maltez Rivas como Sub Procurador.

A las once de la mañana del día diez de febrero de mil novecientos noventa y siete, reunidos en la Sede de la Corte Centroamérica de Justicia los Señores Doctor Orlando Corrales Mejía, Apoderado General Judicial de la Señora Jeanette del Carmen Vega Baltodano y Doctor Denis Maltez Rivas, Sub Procurador General de Justicia de la República de Nicaragua ante los Señores Magistrados: Favio Hercules Pineda, Jorge Antonio Giammattei Avilés, Adolfo León Gomez, Doctor Uriel Mendieta Gutierrez y el Doctor Leonte Valle Lopez, el Doctor Francisco Darío Lobo Lara, el Secretario General Doctor Orlando Guerrero Mayorga, procedió a dar lecturas a escritos presentados por las partes en los que se pedía a este Tribunal una Audiencia con el objeto de darle a conocer los acuerdos y las condiciones de un arreglo extrajudicial que fundamentara la terminación de este juicio.

El Doctor Denis Maltez Rivas, manifestó que su mandante (Estado), estaría de acuerdo en pagar la cantidad total solicitada por la parte actora, no de una sola vez sino en la forma que pudiera convenir con la otra parte, reconociendo desde la fecha del acuerdo el interés legal sobre el saldo. Por su parte el Doctor Orlando Corrales Mejía manifestó que lo que reclamaba su mandante es la cantidad establecida en el laudo arbitral y los intereses legales desde la fecha en que se dicto el mismo hasta el día de su efectivo pago.

Luego de que las partes conversaran privadamente en busca de un acuerdo que conviniera para ambas, pidieron formalmente a La Corte, se les conceda prorroga de una semana para efectuar consultas con sus representadas. El Dr.

Fabio Hércules Pineda, expreso que quedaba entendido que de llegar a un acuerdo presentarían la documentación adecuada a la Corte, para poder dar por terminado el juicio. Por lo tanto los Señores Magistrados acuerdan, que en beneficio de un arreglo directo entre las partes, se prorroga la audiencia para el día miércoles diecinueve de los corrientes a las once de la mañana.

Siendo las once de la Mañana del diecinueve de Febrero de mil novecientos noventa y siete se continúa el desarrollo de la Sesión con la asistencia de los Magistrados que forman el Tribunal y la del Sub Procurador General de Justicia de Nicaragua, a la que no asistió el Doctor Orlando Corrales Mejía, no obstante el compromiso adquirido en la audiencia anterior. El Sub Procurador manifestó que es voluntad del Estado de Nicaragua cumplir con el fallo de que se trata, por lo tanto ofrece presentar por escrito una oferta concreta de la forma en que el Estado de Nicaragua, de acuerdo a su situación económica, estaría dispuesto a cancelar su obligación, solicitándole se le conceda para este efecto hasta el día viernes veintiuno del corriente mes, para presentar dicha oferta. No habiendo más que hacer constar se dio por cerrada la Sesión.

Por escrito presentado el veinticuatro de Febrero de mil novecientos noventa y siete el señor Orlando Corrales Mejía, siempre en el carácter con que actúa expone que por motivos de fuerza mayor se vio imposibilitado de participar en la conclusión de la audiencia que ese Honorable Tribunal había conferido con la finalidad de lograr un avenimiento entre las partes. Por lo que lamenta no haber podido estar presente en el referido acto.

Que en reunión sostenida con el Señor Sub Procurador de Justicia, no fue posible encontrar una solución, pues en definitiva las partes representadas mantuvieron las posiciones que ya habían sido puestas de manifiesto ante el pleno de la Corte. La parte cuya representación ostento solicita nuevamente el pago de la cantidad ordenada en el laudo arbitral, más los intereses legales desde la fecha de dicha resolución hasta el efectivo pago. La parte contraria sostiene que únicamente puede pagar a plazos lo indicado en la sentencia arbitral, ofreciendo intereses sobre los saldos.

Continua expresando el representante de la parte actora que estando debidamente probado los extremos de la demanda, solicita se proceda a dictarse la correspondiente sentencia, mandando a pagar de inmediato el pago de la cantidad indicada en la sentencia incumplida y los intereses legales en la forma ya expresada.

11.SENTENCIA DE LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA

11.1 Considerandos

El día diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y siete a las diez de la mañana, reunidos en la Sala de Sesiones de la Corte Centroamericana de Justicia para dictar Sentencia la Demanda interpuesta por la Señora Jeanette del Carmen Vega Baltodano contra el Poder Ejecutivo del Estado de Nicaragua, demandando el cumplimiento de la sentencia arbitral de fecha ocho de junio de mil novecientos noventa y dos, en que ordenó al Fondo para la Investigación y Desarrollo Tecnológico adscrito al ahora Ministerio de Agricultura y Ganadería de Nicaragua a pagarle en concepto de honorarios profesionales, otros gastos y costas un total general de Doscientos Diecinueve Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro Córdobas, equivalentes a Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Dólares con Ochenta Centavos de dólares americanos, los intereses legales y moratorios en que se ha incurrido desde la fecha de la sentencia, el reconocimiento del menor valor que tiene actualmente el Córdoba con relación al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica como también lo previene la sentencia, más los daños y perjuicios ocasionados a partir de la fecha en que se debió ejecutar la referida sentencia

Los Magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia, expresa en sus considerandos que con base en la normativa indicada, aplicable por esta Corte al caso planteado según el Artículo 63 inciso final de su Ordenanza de Procedimientos, la demanda está correctamente incoada contra el Poder Ejecutivo de la República de Nicaragua, que en este juicio ha sido

representado, sucesivamente por el Procurador General de Justicia y el Sub Procurador de Justicia, cuyas generales se han expresado.

Que el demandante pide, previa la tramitación de ley, se ordene a la Presidenta de la República que fungía a la fecha de la demanda, en su calidad de Titular del Poder Ejecutivo de Nicaragua, dar las instrucciones necesarias para el cumplimiento de la sentencia arbitral de las cinco de la tarde del ocho de junio de mil novecientos noventa y dos, cuyo cumplimiento fue ordenado por el Juez Primero para lo Civil de Distrito de Managua y, en consecuencia, se pague a su representada las cantidades que en dicha sentencia se expresan, con los intereses legales y moratorios en que se ha incurrido desde la fecha de la sentencia, el reconocimiento del menor valor que tiene actualmente el córdoba con relación al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica como también lo previene la referida sentencia, más daños y perjuicios ocasionados a partir de la fecha en que se debió ejecutar la misma, ofreciendo probar los extremos de su demanda, especialmente los perjuicios evidentes que el incumplimiento de la sentencia causa a su mandante.

Que el demandante presentó la documentación que consideró pertinente tanto con su demanda, la cual se agregó legalmente a folios 5 a 30, como con su escrito de folio 71 a 73, que corre agregada a folios 74 a 80 de este juicio, la cual no ha sido redargüida en forma alguna por la parte contraria.

Que tanto el Procurador General de Justicia en su escrito a folio 88, como su sucesor, el Sub Procurador de Justicia en escrito a folio 97 y este último además en acta a folios 93 a 96, reconocen la existencia del fallo cuyo cumplimiento se pide al Poder Ejecutivo de Nicaragua y expresan y admiten la buena disposición del demandado a cumplir con el mismo, lo cual conforme a la sana crítica constituye una aceptación a la pretensión de la demanda que releva este hecho de prueba.

Que de conformidad con el Artículo 35 de su Estatuto, en sus sentencias “La Corte apreciará las pruebas en su conjunto, razonando en su fallo los criterios de valoración que hubiere aplicado” y, que de acuerdo con el Art. 42 de su

Ordenanza de Procedimientos, entre otras, las pruebas admisibles son la declaración de las partes y la documental.

Que como se ha expresado en los Considerandos anteriores, el fallo se puede fundamentar en la apreciación en conjunto de las pruebas presentadas y con aplicación del principio de la sana crítica, para valoración de las mismas.

Que es competencia de este Tribunal, conocer y resolver a solicitud del agraviado de conflictos cuando de hecho no se respeten los fallos judiciales. Que de hecho un fallo no se respeta, aún cuando se reconozca la intención de cumplirlo en un futuro, y que, el actor de este irrespeto sea uno de los Poderes u Órganos Fundamentales del Estado; y ello resulte en este caso, de la apreciación en conjunto de la prueba, entre las que se encuentran afirmaciones de intención de posterior cumplimiento.

Que conforme a la legislación nicaragüense, los fallos arbitrales tienen carácter judicial y que en el presente caso, se incumplió además, el del Juez Primero para lo Civil del Distrito de Managua que ordena el cumplimiento de dicho laudo.

11.2 Parte Resolutiva de la Sentencia

La Corte en Pleno expresa que: “En nombre de Centroamérica y en aplicación de los artículos 22 letra f), 30, 32, 34, 35, 37, 38 y 39 del Estatuto de La Corte; 3 letra d), 4, 5 numeral 4º, 7, 8, 10, 12, 15,16, 22 numeral 1º, 25 inciso segundo, 27, 32, 37 literal c), 38, 41 inciso 3º, 42, 62, 63 y 64 de la Ordenanza de Procedimientos; Ley de 27 de febrero de 1913 de la Asamblea Nacional Constituyente de la República de Nicaragua; Artículo 27 párrafo 3 de la Ley del Régimen Presupuestario y sus Modificaciones, de la República de Nicaragua; Resolvieron: PRIMERO: Declarar procedente la demanda interpuesta por la Señora Jeanette del Carmen Vega Baltodano, de las generales antes expresadas, contra el Poder Ejecutivo del Estado de Nicaragua. SEGUNDO: Declarar que el Poder Ejecutivo del Estado de Nicaragua, de hecho no ha respetado el fallo del Juez Primero Civil del Distrito de Managua, de las once y

treinta de la mañana del día veintiuno de abril de mil novecientos noventa y cinco, en el que declara que deben pagarse a la Señora Jeanette Vega Baltodano las sumas establecidas en la Resolución del Tribunal de Arbitraje de las cinco de la tarde del ocho de junio de mil novecientos noventa y dos, ordenando a la Presidenta de la República, Titular del Poder Ejecutivo en esa época, para que por medio de la Secretaría de Estado correspondiente y en cumplimiento de las resoluciones judiciales, dicte el acuerdo y ejecute el pago de las sumas debidas a la Señora Vega Baltodano, sumas que totalizaban a esa fecha el equivalente en moneda nacional, la cantidad de Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenticuatro dólares con Ochenta Centavos de dólar. TERCERO: Que el Poder Ejecutivo de la República de Nicaragua, por medio de su Presidente Constitucional, debe proceder de conformidad a la Ley del veintisiete de febrero de mil novecientos trece, acordando y ejecutando el pago de la cantidad que resulte al aplicar lo resuelto en el fallo arbitral de las cinco de la tarde del ocho de junio de mil novecientos noventa y dos, con sujeción a las reglas contenidas en el mismo fallo .en la forma y dentro de los límites que señale la Ley de Presupuesto y especialmente a lo dispuesto en el Art. 27, párrafo tercero de la Ley del Régimen Presupuestario y sus Modificaciones, (Ley No. 51). CUARTO: En cuanto a los intereses legales y moratorios desde la fecha de la sentencia, más los daños y perjuicios ocasionados a partir de la fecha en que se debió ejecutar el laudo arbitral que se demanda contra el Poder Ejecutivo de Nicaragua, no corresponde determinar su procedencia y monto a este Tribunal, sino al Juez Primero Civil de Distrito de Managua, a cuyo cargo se encuentra la ejecución del aludido laudo. QUINTO: Esta sentencia deberá cumplirse conforme lo dispuesto en el Artículo 39 del Convenio del Estatuto de La Corte Centroamericana de Justicia, vigente para el Estado de Nicaragua.

12. INCUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA CCJ POR PARTE DEL ESTADO

Por escrito presentado ante la Corte Centroamericana de Justicia, el día cuatro de junio de mil novecientos noventa y siete, por el Señor Orlando Corrales Mejía, en calidad de Apoderado General Judicial de la señora Jeanette del Carmen Vega Baltodano, se hace referencia a la demanda que por incumplimiento de resolución Judicial se tramitó en este Excelentísimo Tribunal, cuyo proceso culminó con Sentencia de la cual se le entregó la correspondiente certificación.

Expresa que el Estado de Nicaragua ha llamado a la parte actora por medio de asesoría legal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero no ha hecho ninguna propuesta seria que demuestre siquiera, ánimos de cumplir con lo resuelto.

Ante la situación planteada, se decidió además de comunicarlo a ese Excelentísimo Tribunal, tratar de ejercer otras gestiones legales, aun y cuando existe frustración ante la renuencia obcecada del Estado de cumplir con lo resuelto por los Tribunales de Justicia.

Para poder lograr lo anterior es indispensable que la certificación que se extendió sea una copia fiel de lo resuelto, pero se han notado algunos errores en ella, por lo cual se solicitó que por medio de Secretaría se ordene librar de nuevo dicha certificación y que sea debidamente cotejada con el original de la sentencia.

Posteriormente, el día veinte tres de Julio de mil novecientos noventa y siete el Doctor Orlando Corrales Mejía, presenta escrito ante la Corte Centroamericana de Justicia, siempre en el carácter con que acciona, en el que expresa que siendo un hecho cierto y notorio que el Gobierno de Nicaragua no ha demostrado tener el menor interés en dar cumplimiento a la sentencia dictada por este Tribunal, a las diez de la mañana del día diecisiete de marzo del corriente año, cuya intención se evidencia con lo siguiente:

- No haber presentado a la Asamblea Nacional petición para que en el Presupuesto General de la República fuese incluida la partida necesaria para al menos pagar la cantidad principal que ordenó la sentencia, habiendo existido posibilidad real para hacerlo.
- Las múltiples y frustrantes gestiones administrativas realizadas sobre lo cual se adjunto documentos en escrito anterior,
- Promesas incumplidas de pago que únicamente han producido más desgaste físico, anímico y económico a la mandante.
- La anuencia del Estado para buscar solución al caso ha sido falsa y siempre mediante funcionarios sin ninguna capacidad decisoria.

Expone que de conformidad con el artículo numero treinta y nueve del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, se conocen los siguientes elementos normativos:

- Que la sentencia de la Corte es de naturaleza definitiva, no admitiendo recurso alguno.
- Que de acuerdo a los Convenios y Tratados suscritos y ratificados por Nicaragua, la sentencia es vinculante para el Estado.
- Que es indispensable y obligatorio para la Corte asegurar la ejecución de la sentencia.

Por tanto solicita:

Que la Corte Centroamericana de Justicia ponga en conocimiento de los otros Estados el incumplimiento de la Sentencia dictada por esa Honorable Corte con la finalidad de que tomen las medidas pertinentes y oportunas que aseguren su ejecución.

Por su parte la Corte en auto del día seis de Agosto de mil novecientos noventa y siete, en vista de lo expuesto por la parte actora en el que se solicita se proceda de conformidad con el artículo 64 de la Ordenanza de Procedimientos, previamente a pronunciarse sobre la solicitud de aplicación del procedimiento

del artículo 39 del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, óigase al representante del Estado de Nicaragua sobre la petición y demás contenido del mencionado escrito, aportando las pruebas que estime pertinentes sobre la ejecución de la sentencia objeto del juicio, otorgándole a tal efecto el termino de diez días hábiles a partir de la notificación, debiendo entregársele la copia presentada con el referido escrito.

13. RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL ESTADO POR PARTE DE LA CCJ

Reunidos en Corte Plena los Magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia a las once horas con treinta minutos del día cinco de septiembre de mil novecientos noventa y siete, para resolver la solicitud relativa al incumplimiento de la sentencia dictada por esta Corte a las diez de la mañana del día diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y siete, presentada por el apoderado de la señora Jeanette del Carmen Vega Baltodano, Doctor Orlando Corrales Mejía contra el Poder Ejecutivo de la República de Nicaragua.

13.1 Vistos Resultas

Que el cuatro de Julio de mil novecientos noventa y siete la actora presento escrito poniendo en conocimiento de este Tribunal el irrespeto al fallo judicial referido, folios 126 y 127, a su vez la parte demandada presento escrito del veinte uno de julio del mismo año, negando lo aseverado, folio 135.

Con base en el artículo 10 de la Ordenanza de Procedimientos de la Corte Centroamericana de Justicia, el presidente en funciones de este Tribunal por excusa del Propietario, resolvió entregar al representante del demandado la copia del escrito anteriormente mencionado, folio 136.

Que la parte actora en escrito de veinte tres de Julio del Presente año, pidió que la Corte pusiera en conocimientos de los otros Estados el incumplimiento por el Poder Ejecutivo de la República de Nicaragua, de la sentencia de que se trata, con la finalidad de que se tomaran las medidas pertinentes y oportunas que aseguraran su ejecución, folio 141. La Corte resolvió que previamente a pronunciarse sobre la solicitud de aplicación del procedimiento del artículo treinta y nueve del Estatuto de la Corte, se oyera al representante del Estado de Nicaragua sobre la petición y demás contenido del mencionado escrito, aportando las pruebas que estimare pertinentes sobre la realización de los actos de ejecución de la sentencia objeto del juicio, en su caso, otorgándole a tal efecto, el termino de diez días hábiles a partir de la notificación de esa resolución, folio 142.

Que la parte actora acompañó a su escrito certificación de la sentencia cuya ejecución se pide dictada por este Tribunal, agregada de folios ciento treinta y ocho a ciento cuarenta

Que el termino concedido al Representante del Estado de Nicaragua para que informara sobre el no cumplimiento de la sentencia referida, acreditando en su caso, la ejecución de los actos que hubiere realizado para su cumplimiento, con las respectivas pruebas, según informe de la Secretaria General venció el veintidós de agosto de presente año, sin que hubiese presentado el informe ordenado.

13.2 Considerandos

Que cada uno de los Estados Centroamericanos ha puesto en vigor el “Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA)” y han firmado de conformidad al artículo primero de este instrumento, “ser una comunidad económica-política que aspira a la Integración Centroamericana y que con tal propósito se constituye el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)”.

Que para la realización de los propósitos del Sistema de la Integración Centroamericana, los Estados miembros se han comprometido a constituir a Centroamérica como Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo lo que comprende el estar sometidos a los principios del Estado de Derecho que incluyen en el cumplimiento irrestricto de los fallos judiciales ya actuar de conformidad con el principio de buena fe en el cumplimiento de sus obligaciones, según lo estipulado en los artículos 3 y 4 literal h del Protocolo de Tegucigalpa.

Que la Corte Centroamericana de Justicia según el artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa, es la institución que garantizara el respeto del derecho en la interpretación y ejecución del protocolo de Tegucigalpa y de sus instrumentos complementarios o derivados del mismo y, que según ese mismo artículo deberá emitirse el Estatuto que regulará su organización y funcionamiento.

Que conforme al artículo primero del Estatuto de la Corte, esta es el órgano judicial principal y permanente del Sistema de la Integración Centroamericana, cuya jurisdicción y competencias regionales son de carácter obligatorio para los Estados sujetos al Protocolo de Tegucigalpa.

Que La Corte garantizara el respeto al derecho tanto en la interpretación como en la ejecución del Protocolo de Tegucigalpa de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA) y de sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo, y que según el artículo 22, literal f del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, esta es competente para conocer y pronunciarse “cuando de hecho no se respeten los fallos judiciales”, como sucede en el caso de autos.

Que es criterio de este Tribunal que la carga de la prueba del cumplimiento de una obligación corresponde al obligado a ella, y que el Poder Ejecutivo del Estado de Nicaragua, como parte obligada no aportó la prueba pertinente.

Que el cumplimiento de las resoluciones interlocutorias laudos y sentencias definitivas que dicte La Corte, constituye elemento esencial para que este Tribunal pueda cumplir con la atribución específica que le atribuyeron los Estados que conforman el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA),

y garantizar la seguridad jurídica y la vivencia del ordenamiento jurídico del mismo, por lo que este Tribunal estima que la participación de los Estados Miembros para asegurar la ejecución de sus fallos, es ineludible para los efectos de la credibilidad del Sistema por los Centroamericanos que esperen respuestas concretas y tangibles a sus solicitudes y demandas.

Que conforme al artículo 39 del Estatuto de La Corte, cuando no se diere cumplimiento a los resuelto por este Tribunal, este incumplimiento deberá comunicarse a los Estados Miembros del Sistema, para que utilizando los medios pertinentes aseguren su ejecución.

Que en el caso de los autos la sentencia dictada por La Corte, no se ha acreditado en su cumplimiento por el Poder Ejecutivo del Estado de Nicaragua.

13.3 Parte Resolutiva

La Corte Centroamericana de Justicia, en nombre de Centroamérica y en aplicación de los artículos 1, 4 letra h, 10 y 12 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA), 1, 22 literal f y 39 del Estatuto de la Corte, 22 numeral 1, 25, 29 y 64 de la Ordenanza de Procedimientos Resuelve: Como se pide, hágase saber a los Estados Centroamericanos para quienes se encuentra vigente el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA, y sus instrumentos complementarios y derivados: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, el incumplimiento por el Poder Ejecutivo del Gobierno de la República de Nicaragua, de la sentencia pronunciada por esta Corte a las diez de la mañana del día diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y siete, en el juicio promovido por la señora Jeanette del Carmen Vega Baltodano contra el Poder Ejecutivo de la República de Nicaragua, en la que se declaró el irrespeto del Fallo Judicial de Juez Primero para lo Civil del Distrito de Managua, pronunciado el veintiuno de abril

de mil novecientos noventa y cinco, para que utilizando los medios pertinentes, aseguren su ejecución.

Para los efectos de la presente Resolución, la Secretaria General del Tribunal, una vez que ésta sea firme, curse respetuosa comunicación a los Estados Centroamericanos mencionados, por medio de su respectiva cancillería o Secretaria de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores del Poder Ejecutivo, insertando esta resolución y certificando la sentencia incumplida dictada por este Tribunal el diecisiete de enero de mil novecientos noventa y siete.

14.CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA

Por escrito Presentado el día veintidós de octubre de mil novecientos noventa y siete ante la Corte Centroamericana de Justicia, el Sub Procurador General de la República de Nicaragua, hace saber que se ha recibido la comunicación por parte del Ingeniero Esteban Duque Estrada, Ministro de Finanzas, en el que se expresa que el monto mandado a pagar por la Corte en la sentencia dictada el 7 de Marzo de 1997 ha sido incluida en el Presupuesto de 1998, ya que la misma no pudo ser cumplida este año, pues la sentencia emitida por el Honorable Tribunal fue posterior a la elaboración del presupuesto de éste periodo.

Se alega que la Ley del 27 de Febrero de 1913 en su artículo 29 dice expresamente: “los Tribunales competentes para conocer sobre reclamaciones de créditos a cargo de la Hacienda Pública y a favor de particulares, dictaran sus fallos declaratorios del derecho de las partes y podrán mandar que se cumplan cuando hubiesen causado ejecutoria: pero este cumplimiento tocará exclusivamente al Ejecutivo, quien acordará y ejecutará el pago en la forma y dentro de los límites que señale la ley de presupuesto”

Por lo tanto La Corte por auto del veinticuatro de Octubre de mil novecientos noventa y siete, a las once de la mañana, y visto el escrito presentado por el

Doctor Denis Maltez Rivas en su carácter de subprocurador General de Justicia de la República de Nicaragua, en la cual hace diversas afirmaciones referente al cumplimiento de la sentencia pronunciada por el Tribunal, resuelve que por no existir en el escrito petición concreta, se agregue a sus antecedentes.

“Para el año dos mil ocho al ejecutarse el Presupuesto General de la República de Nicaragua, se le indemnizó a la Señora Jeanette Del Carmen Vega Baltodano, por la cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CÓRDOBAS (C\$ 219, 744.00), equivalente a CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA DÓLARES, CON OCHENTA CENTAVOS DE DÓLAR (\$ 46, 444.80), cumpliendo así la Sentencia dictada por la Corte Centroamericana de Justicia.”

15.DE LAS MEDIDAS CAUTELARES (Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, 1992)

Es necesario mencionar que aunque en este caso no se solicitaron, la Corte Centroamericana de Justicia da cabida a la posibilidad de que se pidan la declaración de medidas cautelares, esto según el artículo 31 del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, el que literalmente dice “La Corte podrá dictar las medidas prejudiciales o cautelares que considere convenientes para resguardar los derechos de cada una de las partes, desde el momento en que se admita alguna reclamación contra uno o más Estados, Órganos u Organismos del Sistema de la Integración Centroamericana, hasta que se falle definitivamente. En ese sentido podrá fijar la situación en que deban permanecer las partes contendientes a solicitud de cualquiera de ellas, a fin de no agravar el mal y de que las cosas se conserven en el mismo estado mientras se pronuncia la resolución correspondiente.”

16. PROCEDIMIENTO VERBAL ABREVIADO (Corte Centroamericana de Justicia, 2009)

La Ordenanza de Procedimientos de la Corte Centroamericana, fue reformada en sesión de las tres de la tarde del día once de marzo del año dos mil diez en la cual se aprobó el Procedimiento Especial Abreviado, el que fue elaborado por el Presidente Alejandro Gómez Vides, de igual manera se le agregaron las observaciones del Magistrado Carlos Guerra Gallardo.

De conformidad al Artículo 43 del Convenio de Estatuto y Artículos 31 y 64 de la Ordenanza de Procedimientos, considera que es de inminente necesidad reformar la Ordenanza de Procedimientos, para darle mayor celeridad a los juicios que por su extrema importancia tienen que ser resueltos rápidamente dentro de los términos establecidos, dadas las consecuencias que para el Sistema de la Integración significaría tomar una resolución tardía y urgiendo un fallo de este Tribunal; no pudiéndolo hacer con los términos establecidos en el Juicio ordinario, por lo que es conveniente crear un procedimiento especial que venga a fortalecer la celeridad del Sistema de la Integración en el ámbito jurisdiccional

16.1 Contenido de la Reforma

16.1.1 Causas en las que puede Tramitarse a través de este Procedimiento

Capítulo VI del procedimiento abreviado, Artículo 64: Este procedimiento abreviado se aplicará en aquellos casos en que se considere que exista violación a los derechos comunitarios relacionados con los Tratados, Convenios o Acuerdos, que regulan el libre tránsito a través de los países que integran el SICA.

16.1.2 Iniciación del procedimiento

Artículo 65: El procedimiento se iniciará con la demanda que interponga cualquier interesado y se presentará por escrito en la Secretaría General de este Tribunal o en la Secretaría de cualquiera de las Cortes Supremas de Justicia de Centroamérica, acompañada de tantas copias como partes demandadas sean.

Artículo 66: Las partes deberán estar representadas por un abogado con Poder suficiente para intervenir en el proceso.

16.1.3 Contenido de la Demanda

Artículo 67: El escrito de demanda deberá contener una identificación plena de la contraparte, un relato de los hechos que supuestamente violan el Derecho Comunitario del demandante, los fundamentos de Derecho y las pruebas en que basa su pretensión. Así mismo, señalará un lugar para recibir notificaciones y podrá, a su conveniencia, señalar cualquier medio técnico a través del cual desea ser notificado.

16.1.4 Admisión de la demanda

Artículo 68: Si la demanda cumpliera todos los requisitos mencionados a juicio de este Tribunal, se emitirá un Auto admitiéndola y ordenando el emplazamiento del demandado. Dicho emplazamiento se hará a través del Secretario General de La Corte o quien haga sus veces, y deberá acompañarse por una copia de la demanda y de los documentos anexos, si los hubiere. El funcionario notificante levantará un Acta dando fe de haber llevado a cabo la notificación. Dicha Acta deberá ser firmada por el demandado, pero si este no pudiere o no quisiere firmar, lo podrá hacer cualquier persona que se encuentre en el lugar señalado, y si ésta tampoco quisiera firmar, bastará que el Secretario o quien haga sus veces, lo haga constar en el Acta.

16.1.5 Posibilidad de Medidas Cautelares

Artículo 69: Si las partes solicitaran medidas cautelares en su demanda, en el mismo auto de admisión de la misma deberá esta Corte pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas. De la decisión de admitir las medidas cautelares se librará un Mandato para el Juez de la jurisdicción en que se ejecutará la medida cautelar tomada, para que proceda a cumplir con la misma.

16.1.6 Contestación del Emplazamiento

Artículo 70: El demandado tendrá tres días hábiles contados a partir de su notificación para contestar el emplazamiento. Si transcurrido ese plazo, no se contesta la demanda, se considerará trabada la litis y continuará el proceso, teniéndose por parte al demandado. Este último podrá comparecer en cualquier momento, pero no podrá hacer retroceder el juicio.

Artículo 71: La Corte podrá actuar de Oficio para impulsar el proceso, razón por la cual no existirá la rebeldía. Sin embargo, el otorgamiento de medidas cautelares solo procederá a petición de parte.

16.1.7 Apertura a prueba y Audiencias

Artículo 72: La Corte, si lo considera necesario, podrá ordenar un período de pruebas de cinco días hábiles comunes contados a partir de la última notificación, el cual no podrá ser ampliado, terminado dicho periodo se ordenará una Audiencia oral y pública en donde las partes presentarán sus alegatos finales. La Audiencia se celebrará en el local de La Corte situada en la ciudad de Managua, pero el Tribunal podrá señalar cualquier otro lugar para su celebración. Las partes podrán solicitar que la Audiencia se celebre por conferencia virtual, en cuyo caso podrán presentar sus alegatos desde las Cortes Supremas de Justicia de cualquiera de los países de Centroamérica.

16.1.8 Incidentes de Recusación o Excusa

Artículo 73: Los incidentes de recusación o excusa de Magistrados serán resueltos sumariamente en dicha Audiencia, con sólo la vista del escrito de solicitud, después de oídos los argumentos de las partes.

Artículo 74: Las solicitudes de tercería, serán resueltas en cualquier estado del Procedimiento especial abreviado, inmediatamente después de presentado el escrito, sin más trámite.

16.1.9 Acerca de la Sentencia de La Corte

Artículo 75: La Corte pronunciará sentencia tres días hábiles después de terminada la audiencia oral y pública y se notificará a las partes. Sobre dicha sentencia no habrá recurso alguno con excepto el de explicación o aclaración.”

CONCLUSIONES

A manera de conclusión es importante dejar claro que ser sujeto del Derecho Internacional significa ser titular de derechos y obligaciones según las reglas del ordenamiento jurídico internacional las cuales atribuyen situaciones jurídicas subjetivas, activas o pasivas.

Al hacer un análisis de la evolución del Derecho Internacional en los últimos tiempos nos damos cuenta de la transformación de sus sujetos. La diversificación de los objetivos y de las funciones de la comunidad jurídica internacional ha ocasionado una renovación cuantitativa del Derecho internacional.

Nuestro campo social internacional ha sido muy complejo por lo tanto se ha visto la necesidad de otorgar personalidad jurídica a diferentes entidades, dando vida a diferentes sujetos de Derecho internacional, a través de la voluntad de los Estados expresadas en instrumentos internacionales, en la mayoría de los casos, conservando los Estados su carácter de sujetos originarios de este orden jurídico.

Hoy en día se conocen como sujetos de derecho internacional además de los Estados, a los pueblos, los grupos beligerantes, la Santa Sede, la Ciudad del Vaticano, la Soberana Orden de Malta y a los individuos.

No cabe duda que el hecho de que los individuos tengan la oportunidad de acceder a instancias internacionales es un tema polémico y muy poco puesto en práctica, por eso se afirma que éste es un sujeto excepcional dentro de la comunidad internacional, y posee subjetividad internacional tanto activa como pasiva. Es activa, entre otras cosas cuando implica la posibilidad de reclamar de manera directa ante instancias internacionales por la vulneración de sus derechos y sin la necesidad de la intermediación de otras entidades, como por ejemplo el Estado, me refiero al tema de la protección diplomática y es pasiva

cuando el individuo es responsable internacionalmente de violaciones, delitos y crímenes de carácter internacional y por lo tanto puede recibir una pena.

La Corte de Justicia Centroamericana, mejor conocida como Corte de Cartago, creada en el año de 1907, fue el primer Tribunal Internacional en su género que dio cabida a que los particulares, sean éstos personas naturales o jurídicas, fueran considerados parte de los procesos contenciosos ante la misma. Creando así jurisprudencia en este tipo de casos de *ius standi*, que visibiliza para todos los individuos la posibilidad de acceder a esta instancia internacional.

Esta novedosa participación del individuo es un significativo antecedente jurídico para la región Centroamericana. La actual Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), es heredera del acervo jurídico de aquel Tribunal, por ello, su jurisdicción y competencia se extiende a los particulares, de conformidad con el artículo 3 de la Ordenanza de Procedimientos.

La Corte Centroamericana de Justicia es el órgano jurisdiccional supranacional, principal y permanente del Sistema de la Integración Centroamericana y es el encargado de velar por la Interpretación y aplicación del Derecho Comunitario Centroamericano, ella representa los más altos valores de la conciencia integracionista de la región.

Ante este Tribunal se han interpuesto hasta el momento de 110 casos, de los cuales 64 han sido demandas interpuestas por particulares; ya sean personas naturales o jurídicas. Estos hechos de subjetividad activa del individuo de la comunidad centroamericana, refuerza el ejercicio que esta corte desarrolla por la Integración y de su función como tribunal de hacer justicia, de dar justicia y acceder a ella.

En éste caso la Corte Centroamericana de Justicia brinda ésta servicio a los particulares de manera gratuita por lo que es aún más accesible para cualquier persona, a la cual se le ha violentado algún derecho, siempre y cuando éste se encuentre consignado en el marco de la competencia de La Corte, una vez que se hayan agotado las vías internas del Estado presuntamente responsable.

El Individuo puede presentar una demanda y ser parte de un proceso ante La Corte, ejerciendo el *ius standi* en todos aquellos casos donde el individuo en su propio Estado no encuentre la debida justicia, aun cuando haya agotado todo el procedimiento interno que dicho Estado ha establecido.

Este Derecho da la oportunidad al individuo de poner su demanda a otro nivel, que es el nivel internacional, que de manera imparcial pueden revisar, estudiar y resolver apegado a derecho la petición de la parte actora.

A lo interno de La Corte, en los procesos interpuestos se observó que de 64 casos de *ius standi*, solo fueron admitidos 20 casos. Lo que muestra que alrededor de 40 casos no pudieron acceder a La Corte. Las debilidades supuestas que presentaron los casos no admitidos fueron por razones de forma de presentación y de fondo relacionado a la claridez de la petición.

De tal manera que La Corte, debe de hacer análisis de cómo eliminar los obstáculos que pueden ser de forma y / o procedimiento para facilitar el acceso a la justicia en su competencia.

RECOMENDACIONES

Al haber concluido la presente Investigación Monográfica, estimo conveniente, expresar las recomendaciones siguientes:

Se debe contribuir al fortalecimiento y reconocimiento de la Corte Centroamericana de Justicia ya que es el representante de la conciencia de Centroamérica y es depositaria y custodia de los valores que constituyen la nacionalidad Centroamericana, dándoles mayores atribuciones y no quitándole competencias, manteniendo a la Corte como Órgano Judicial Principal y Permanente del SICA.

De igual manera se debe de dar mayor importancia a la divulgación del funcionamiento y competencias de éste Tribunal, para que así todos las personas conozcan la existencia de la misma y, que si llegase a ser el caso, en algún determinado momento puedan acceder a su jurisdicción, con el fin de reclamar algún derecho de los que se le hayan sido vulnerados siempre y cuando sean competentes para el Tribunal.

Es necesario que se revise a nivel interno de La Corte, los obstáculos que los particulares han encontrado al intentar acceder a la jurisdicción de la misma, para lo cual se haría necesario eliminar estos obstáculos a través de reformas y mecanismos que faciliten los procedimientos para interponer un caso del *ius standi*.

Las resoluciones emitidas por dicho Tribunal son de ineludible cumplimiento para los Estados parte de ella y si en algún caso los Estados incumplen lo resuelto por La Corte sería conveniente hacer una reforma al Estatuto de la misma, para así poder establecer o aplicar sanciones económicas para quienes no acaten dichas resoluciones, pues no se puede obviar la importancia que este Organismo tiene para fortalecer la democracia, el Estado de Derecho, la Seguridad Jurídica y así llegar a constituirnos en la Gran Patria Centroamericana.

BIBLIOGRAFÍA

- a. Ahlf, L. O. (1998). *Derecho Internacional Público*. México: Oxford.
- b. Carrión, A. R. (1998). *Lecciones de Derecho Internacional Público*. Madrid: Tecnos.
- c. *Corte Centroamericana de Justicia (CEDOC)*. (2009). Recuperado el 12 de Agosto de 2010, de Corte Centroamericana de Justicia (CEDOC): <http://cendoc.ccj.org.ni/>
- d. *Corte Centroamericana de Justicia*. (2009). Recuperado el 12 de Agosto de 2010, de Corte Centroamericana de Justicia: <http://portal.ccj.org.ni/CCJ2/Default.aspx?tabid=57>
- e. Demanda por Falta de Cumplimiento de Sentencia Arbitral, 8-3-6-1996 (Corte Centroamericana de Justicia 1996).
- f. Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia. (diez de Diciembre de 1992). Managua, Nicaragua.
- g. Gonzáles, A. V. (1997). *Derecho Comunitario*. Managua.
- h. Gutierrez, C. J. (2009). *La Corte de Cartago (Corte de Justicia Centroamericana)*. Managua.
- i. Opinion Consultiva sobre Reparación de daños sufridos al Servicio de las Naciones Unidas (Tribunal Internacional de Justicia 1949).
- j. Ordenanza de Procedimiento de la Corte Centroamericana de Justicia. (1995). Managua, Managua, Nicaragua.
- k. Perez-León, J. P. *El individuo como Sujeto Excepcional del Derecho Internacional*.
- l. Ridruejo, J. A. (2001). *Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales*. Madrid.
- m. Salazar Grande, C. E., & Ulate Chacón, E. N. (1999). *Derecho Comunitario Centroamericano*. Managua.
- n. *Sistema de la Integración Centroamericana*. (2009). Recuperado el 12 de Agosto de 2010, de SICA: http://www.sica.int/sica/resena_sica.aspx?IdEnt=401
- o. Velasco, M. D. (2007). *Instituciones de Derecho Internacional Público*. Madriz.

ANEXO I

ESTATUTO DE LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA

CAPITULO I ATRIBUCIONES Y ORGANIZACIÓN

Artículo 1. La Corte Centroamericana de Justicia, establecida por el artículo 12 del “Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA)”, queda constituida y funcionará conforme a las disposiciones del presente Estatuto, ordenanzas, reglamentos y resoluciones que emita ella misma.

La Corte Centroamericana de Justicia es el Organo Judicial principal y permanente del “Sistema de la Integración Centroamericana”, cuya jurisdicción y competencia regionales son de carácter obligatorio para los Estados. En el texto de este Convenio, a la Corte Centroamericana de Justicia se le llamará también “La Corte”.

Artículo 2. La Corte garantizará el respeto al derecho, tanto en la interpretación como en la ejecución del “Protocolo de Tegucigalpa de reformas a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA)”, y de sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo.

Artículo 3. La Corte tendrá competencia y jurisdicción propias, con potestad para juzgar a petición de parte y resolver con autoridad de cosa juzgada, y su doctrina tendrá efectos vinculantes para todos los Estados, Organos y organizaciones que formen parte o participen en el “Sistema de la Integración Centroamericana”, y para sujetos de derecho privado.

Artículo 4. La Corte emitirá las ordenanzas de procedimiento y los reglamentos generales, operativos o de servicio, mediante los cuales determinará el procedimiento y la manera de ejercer sus funciones, pero éstos no podrán contener normas que contravengan el presente Estatuto.

Artículo 5. Los procedimientos previstos en este Estatuto y los que se establezcan en los reglamentos y las ordenanzas, tendrán por finalidad la salvaguarda de los propósitos y principios del “Sistema de la Integración Centroamericana”, la objetividad de los derechos, la igualdad de las partes y la garantía del debido proceso.

Artículo 6. La Corte representa la conciencia nacional de Centroamérica y se considera, además, depositaria y custodia de los valores que constituyen la nacionalidad centroamericana. En tal virtud, los Magistrados que la integran no podrán considerarse inhibidos del ejercicio de sus funciones por el interés que puedan tener, en algún caso o cuestión, los Estados de donde proceda su nombramiento.

Artículo 7. La Corte ejercerá sus funciones en sesión plenaria. Tendrá además, las facultades y atribuciones para dividir o distribuir su competencia y jurisdicción en Salas o Cámaras, para conocer de las cuestiones litigiosas que se sometan a su decisión o fallo. Estas Cámaras o Salas emitirán sus fallos o resoluciones en única instancia.

La Corte tendrá su sede en ciudad de Managua, República de Nicaragua, donde funcionará permanentemente. Sin embargo, podrá celebrar sesiones en el territorio de cualesquiera de los Estados si así lo acuerda.

Artículo 8. La Corte se integrará con uno o más Magistrados Titulares por cada uno de los Estados. Cada Magistrado titular tendrá su respectivo suplente, los que deberán reunir las mismas cualidades de los titulares.

Artículo 9. Los Magistrados deberán ser personas que gocen de alta consideración moral y reunir las condiciones requeridas en su país para el ejercicio de las más altas funciones judiciales. Del requisito de edad se podrá dispensar a Jurisconsultos de notoria competencia, a juicio y resolución de la Corte de su respectivo país.

Artículo 10. Los Magistrados titulares y suplentes de La Corte serán electos por las Cortes Supremas de Justicia de los Estados.

Los así electos, declararán solemnemente y bajo juramento prestado ante el Consejo Judicial Centroamericano, que ejercerán el cargo con justicia, imparcialidad e independencia.

Artículo 11. Los Magistrados de La Corte desempeñarán sus cargos durante diez años y podrán ser reelectos. Los designados para un período continuarán en funciones hasta que tomen posesión de sus cargos los sustitutos.

Artículo 12. Los Magistrados de La Corte y sus Suplentes sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causales y el procedimiento establecido en el Reglamento y mediante decisión adoptada por el voto afirmativo de los dos tercios de los otros Magistrados.

Artículo 13. En caso de ausencia temporal de un Magistrado de La Corte, el Presidente de ésta llamará al respectivo suplente, quien desempeñará el cargo por el tiempo que dure la ausencia del titular. Si esa ausencia fuere definitiva, el Presidente lo pondrá en conocimiento del Órgano o Poder Judicial respectivo, para que proceda a nombrar un nuevo titular por un período completo. Todo sin perjuicio de que el suplente pueda ejercer funciones, hasta que el nuevo designado asuma el cargo.

Artículo 14. En el ejercicio de sus funciones los Magistrados gozarán de plena independencia, inclusive del Estado del cual sean nacionales y ejercerán sus atribuciones con imparcialidad.

Artículo 15. Los Magistrados no podrán desempeñar otras actividades profesionales, remuneradas o no, excepto las de carácter docente y se abstendrán de cualquier actuación incompatible con el carácter y la dignidad de su cargo.

Artículo 16. La Corte tendrá un Presidente y un Vicepresidente, los cuales ejercerán sus cargos por un año. La Presidencia será ejercida sucesivamente por uno de los Magistrados Titulares en el orden alfabético de los nombres de sus respectivos Estados. El Vicepresidente se elegirá por La Corte de acuerdo con el reglamento, debiendo ser siempre su titular de distinta nacionalidad a la del Presidente.

Artículo 17. En caso de ausencia temporal del Presidente, la Presidencia será ejercida por el Vicepresidente. Si ésta fuese definitiva, el Vicepresidente ejercerá por el resto del período de su predecesor.

Artículo 18. El Presidente será el representante de La Corte, representación que ejercerá el Vicepresidente en el caso mencionado en el artículo anterior. En ausencia de ambos, la representación podrá delegarse en otro Magistrado.

Artículo 19. La Corte nombrará su Secretario General y podrá disponer el nombramiento de los demás funcionarios que fueren menester, quienes deberán rendir promesa de reserva de los casos que allí se ventilen.

Artículo 20. Los requisitos que debe reunir el Secretario General y los demás funcionarios, se establecerán en el Reglamento.

Artículo 21. Los miembros titulares de La Corte y el Secretario General residirán en el país de la sede. Los Magistrados de La Corte tienen la obligación de asistencia y permanencia. En caso de estar impedidos de asistir, deberán informar al Presidente o al que haga sus veces.

CAPITULO II DE LA COMPETENCIA Y OTRAS FACULTADES

Artículo 22. La competencia de La Corte será:

a) Conocer, a solicitud de cualquiera de los Estados miembros, de las controversias que se susciten entre ellos. Se exceptúan las controversias fronterizas, territoriales y marítimas, para cuyo conocimiento se requiere la solicitud de todas las partes concernidas. Previamente las respectivas Cancillerías deberán procurar un avenimiento, sin perjuicio de poder intentarlo posteriormente en cualquier estado del juicio;

b) Conocer de las acciones de nulidad y de incumplimiento de los acuerdos de los organismos del Sistema de la Integración Centroamericana;

c) Conocer, a solicitud de cualquier interesado, acerca de las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o de cualquier otra clase dictadas por un Estado,

cuando afecten los Convenios, Tratados y de cualquier otra normativa del Derecho de la Integración Centroamericana, o de los Acuerdos o resoluciones de sus Organos u organismos;

ch) Conocer y fallar, si así lo decide, como árbitro, de los asuntos en que las partes la hubieren solicitado como Tribunal competente. También podrá decidir, conocer y resolver un litigio ex aequo et bono, si los interesados, lo convienen;

d) Actuar como Tribunal de Consulta Permanente de las Cortes Supremas de Justicia de los Estados, con carácter ilustrativo;

e) Actuar como órgano de Consulta de los Organos u organismos del Sistema de la Integración Centroamericana, en la interpretación y aplicación del “Protocolo de Tegucigalpa de reformas a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA)”, y de los instrumentos complementarios y actos derivados de los mismos;

f) Conocer y resolver a solicitud del agraviado de conflictos que puedan surgir entre los Poderes u Organos fundamentales de los Estados, y cuando de hecho no se respeten los fallos judiciales;

g) Conocer de los asuntos que someta directa e individualmente cualquier afectado por los acuerdos del Organo u Organismo del Sistema de la Integración Centroamericana;

h) Conocer de las controversias o cuestiones que surjan entre un Estado centroamericano y otro que no lo sea, cuando de común acuerdo le sean sometidos;

i) Hacer estudios comparativos de las Legislaciones de Centroamérica para lograr su armonización y elaborar proyectos de leyes uniformes para realizar la integración jurídica de Centroamérica. Esta labor la realizará en forma directa o por medio de institutos u organismos especializados como el Consejo Judicial Centroamericano o el Instituto Centroamericano de Derecho de Integración;

j) Conocer en última instancia, en apelación, de las resoluciones administrativas, dictadas por los Organos u Organismos del Sistema de la Integración Centroamericana, que afecten directamente a un miembro del personal del mismo y cuya reposición haya sido denegada;

k) Resolver toda consulta prejudicial requerida por todo Juez o Tribunal Judicial que estuviere conociendo de un caso pendiente de fallo encaminada a obtener la aplicación o interpretación uniforme de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del “Sistema de la Integración Centroamericana”, creado por el “Protocolo de Tegucigalpa”, sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo.

Artículo 23. Los Estados podrán formular consultas con carácter ilustrativo a La Corte sobre la interpretación de cualquier Tratado o Convención Internacional vigente; también, respecto a conflictos de los Tratados entre sí o con el Derecho Interno de cada Estado.

Artículo 24. Las consultas evacuadas por La Corte con arreglo al presente Estatuto, ordenanzas y reglamentos, relativas al Sistema de la Integración Centroamericana, serán obligatorias para los Estados que la integran.

Artículo 25. La competencia de La Corte no se extiende a la materia de derechos humanos, la cual corresponde exclusivamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Artículo 26. Los Estados se obligan a otorgar a La Corte todas las facilidades necesarias para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

Artículo 27. La Corte y sus Magistrados gozarán en todos los Estados partes de las inmunidades reconocidas por los usos internacionales y, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en cuanto a la inviolabilidad de sus archivos y de su correspondencia oficial y todo lo referente a las jurisdicciones civiles y penales.

Artículo 28. La Corte tendrá personalidad jurídica, y gozará en todos los Estados miembros de los privilegios e inmunidades que le corresponden como Órgano del Sistema de la Integración Centroamericana y que le aseguren el ejercicio independiente de sus funciones y la realización de los propósitos de su creación. Los Magistrados y el Secretario General de La Corte y los funcionarios a quienes ella designe con el carácter de internacionales, gozarán de las inmunidades y privilegios correspondientes a su cargo. A este efecto, los Magistrados tendrán categoría equivalente al rango de Embajadores y los demás funcionarios la que se establezca, de común acuerdo, entre La Corte y el Gobierno del país sede.

Artículo 29. Los Magistrados estarán exentos de toda responsabilidad por los actos ejecutados y opiniones emitidas en el cumplimiento de sus funciones oficiales y continuarán gozando de tal exención después de haber cesado en sus funciones.

Artículo 30. Conforme a las normas antes establecidas, La Corte tiene facultad para determinar su competencia en cada caso concreto, interpretando los tratados o convenciones pertinentes al asunto en disputa y aplicando los principios del Derecho de Integración y del Derecho Internacional.

Artículo 31. La Corte podrá dictar las medidas prejudiciales o cautelares que considere convenientes para resguardar los derechos de cada una de las partes, desde el momento en que se admita alguna reclamación contra uno o más Estados, Órganos u Organismos del Sistema de la Integración Centroamericana, hasta que se falle definitivamente. En ese sentido podrá fijar la situación en que deban permanecer las partes contendientes a solicitud de cualquiera de ellas, a fin de no agravar el mal y de que las cosas se conserven en el mismo estado mientras se pronuncia la resolución correspondiente.

Artículo 32. Los medios de prueba se establecerán en la ordenanza respectiva. La Corte podrá exigir o aceptar las probanzas que crea conveniente para declarar, establecer y ejecutar los derechos que tengan o reclamen las partes.

Artículo 33. Para la recepción y la práctica de cualquier prueba las comunicaciones que libre La Corte no necesitarán homologación o exequátur

para su ejecución, y deberán practicarse por los funcionarios o autoridades judiciales o administrativas y de cualquier otro orden, a quienes La Corte envíe el requerimiento.

Artículo 34. Los documentos procedentes de cualquier país, de cualquiera clase que fueren, que se presenten como prueba en los juicios, sólo requerirán ser autenticados, en el lugar de origen por funcionario competente del mismo o Notario en el ejercicio de sus funciones, en su caso. Las pruebas se practicarán en cualquiera de los territorios de los Estados conforme a las ordenanzas de procedimiento dictadas por La Corte.

CAPITULO III DE LA SENTENCIA Y SU CUMPLIMIENTO

Artículo 35. La Corte apreciará las pruebas en su conjunto, razonando en su fallo los criterios de valoración que hubiere aplicado.

Artículo 36. Todas las decisiones de La Corte y de sus Salas o Cámaras se tomarán con el voto favorable de al menos la mayoría absoluta de los que las integran. El Magistrado o Magistrados disidentes o concurrentes tendrán derecho a que se consigne su criterio.

La resolución será motivada y mencionará los nombres de los Magistrados que hayan tomado parte en ella y contendrá sus firmas, salvo que motivos justificados lo impidan.

Artículo 37. El fallo deberá resolver cada uno de los puntos en litigio; será obligatorio únicamente para las partes, respecto al caso decidido.

Artículo 38. El fallo será definitivo e inapelable; no obstante La Corte podrá, de oficio o a solicitud de parte, aclarar o ampliar lo resolutivo del mismo, dentro de los treinta días siguientes a partir de la notificación.

Artículo 39. Las resoluciones interlocutorias, laudos y sentencias definitivas que dicte La Corte no admitirán recurso alguno, son vinculantes para los Estados o para los Organos u Organismos del Sistema de la Integración Centroamericana, y para las personas naturales y jurídicas, y se ejecutarán como si se tratara de cumplir una resolución, laudos o sentencias de un tribunal nacional del respectivo Estado, para lo cual bastará la certificación extendida por el Secretario General de La Corte. En el caso de incumplimiento de los fallos y resoluciones por parte de un Estado, La Corte lo hará saber a los otros Estados para que, utilizando los medios pertinentes, aseguren su ejecución.

Artículo 40. En los casos sometidos al ámbito jurisdiccional de La Corte, ésta no podrá negarse a fallar alegando silencio u oscuridad en los Convenios y Tratados invocados como aplicables.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES GENERALES, TRANSITORIAS Y VIGENCIA

Artículo 41. Los Estados sufragarán por partes iguales el presupuesto general elaborado por La Corte.

Artículo 42. En el presupuesto de cada Estado deberá existir una partida específica destinada al presupuesto de La Corte. Cada Estado entregará el total de su aportación a La Corte, dentro de los tres meses anteriores al inicio del año calendario.

Artículo 43. Para emitir y reformar los reglamentos y ordenanzas de procedimientos, se necesitarán los votos afirmativos de la mayoría de los Magistrados. Estas modificaciones no tendrán efecto retroactivo.

Artículo 44. Cada Magistrado Titular de La Corte devengará un sueldo y tendrá derecho a gastos de representación, viáticos, gastos de viaje y de establecimiento y permanencia. El Magistrado que haya cumplido su período gozará de una pensión de retiro en cuantía y condiciones que La Corte establezca.

Artículo 45. En tanto no se integre e instale La Corte, la aplicación, interpretación y ejecución de las disposiciones contenidas en el presente Estatuto, le corresponderá al Consejo Judicial Centroamericano, integrado por los Presidentes de las Cortes Supremas de Justicia de los Estados. También corresponderá al Consejo Judicial Centroamericano tomar todas las medidas pertinentes y hacer cuanta gestión fuera necesaria para asegurar la pronta instalación y funcionamiento de La Corte.

Artículo 46. El Consejo Judicial Centroamericano, dentro de las atribuciones antes señaladas, fijará la fecha de instalación solemne e inicio de funciones de la Corte Centroamericana de Justicia; elaborará sus proyectos de Reglamentos, Ordenanza de Procedimientos y presupuesto, y fijará el número inicial de Magistrados que integrará La Corte.

Artículo 47. Los Estados deberán, previo a que La Corte inicie sus funciones, dotarla de los recursos financieros apropiados, de modo que pueda desempeñar adecuadamente sus delicadas y trascendentales funciones.

Artículo 48. Este Estatuto no admite reservas. Tendrá duración indefinida y entrará en vigencia ocho días después de la fecha en que los Estados que han ratificado el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA), que constituye el “Sistema de la Integración Centroamericana”, hayan efectuado el depósito correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 36 del Protocolo citado. Los Estados

que a la fecha de vigencia no hayan aún ratificado el Protocolo antes mencionado podrán pasar a integrar La Corte previa ratificación y depósito de los instrumentos respectivos en la forma señalada en los mismos. EN FE DE LO CUAL, los Presidentes Centroamericanos firman el presente Estatuto en seis originales en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, en seis ejemplares originales, a los diez (10) días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y dos (1992).

RAFAEL A. CALDERON FOURNIER
Presidente de la República de Costa Rica

EDGAR CERVANTES VILLALTA
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica

ALFREDO F. CRISTIANI BURKARD
Presidente de la República de El Salvador

GABRIEL MAURICIO GUTIÉRREZ
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador

JORGE SERRANO ELIAS
Presidente de la República de Guatemala

JUAN JOSÉ RODILL PERALTA
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala

RAFAEL L. CALLEJAS ROMERO
Presidente de la República de Honduras

ORLANDO LOZANO MARTÍNEZ
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras

VIOLETA BARRIOS DE CHAMORRO
Presidente de la República de Nicaragua

ORLANDO TREJOS S.
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua

GUILLERMO ENDARA GALIMANY
Presidente de la República de Panamá

CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá

ANEXO II

ORDENANZA DE PROCEDIMIENTOS

TITULO PRELIMINAR DEL OBJETO Y LA FINALIDAD

Artículo 1. En las disposiciones de esta Ordenanza se denominan:

LA CORTE: A la Corte Centroamericana de Justicia.

ESTATUTO: Convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia.

ESTADO MIEMBRO: Estados que suscribieron el Convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia; y para quienes se encuentra vigente.

SISTEMA: El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), incluyendo sus Organos, los Organos subsidiarios, los organismos de integración y las Comisiones Permanentes.

MAGISTRADO: Miembros integrantes titulares o suplentes.

ORDENANZA: Instrumento Jurídico dictado por La Corte, que determina y regula el procedimiento y la forma de ejercer las funciones jurisdiccionales de la misma.

Artículo 2. La presente Ordenanza determina y regula el procedimiento y la forma de ejercer las funciones de la Corte Centroamericana de Justicia, teniendo por objeto y finalidad el respeto al derecho en la interpretación y ejecución del Protocolo de Tegucigalpa y del Convenio de Estatuto de La Corte, sus instrumentos complementarios o actos derivados de los mismos; la salvaguarda de los propósitos y principios del “Sistema de la Integración Centroamericana”, la objetividad de los derechos, igualdad de las partes y la garantía del debido proceso.

TITULO I DE LOS SUJETOS PROCESALES

Artículo 3. Serán sujetos procesales:

- a) Los Estados miembros y, en su caso, cualquier otro Estado;
- b) Los Poderes u Organos fundamentales de los Estados miembros en los casos contemplados en el Estatuto de La Corte;
- c) Los Organos u Organismos del Sistema de la Integración Centroamericana; y,
- d) Los particulares, sean personas naturales o jurídicas.

CAPITULO I DEL TRIBUNAL

Artículo 4. La Corte Centroamericana de Justicia tiene en los negocios de su jurisdicción la autoridad y atribuciones que expresamente le confi eren su Estatuto; y, desde el momento que se inicie una demanda, posee la facultad de decidir sobre su competencia, interpretando los Tratados y Convenciones y aplicando los Principios del Derecho de Integración y del Derecho Internacional referentes al punto o puntos en cuestión.

Artículo 5. La jurisdicción y competencia de La Corte comprende:

1.- Todas las cuestiones o controversias, que entre los Estados centroamericanos ocurran, cualquiera que sea su origen y naturaleza, si las Cancillerías interesadas no hubieren podido llegar a un avenimiento; ya se demuestre esto por actas u otra clase de documentos fehacientes, o bien por el hecho de hallarse las partes en estado de guerra.

2.- Los litigios que un particular promueva contra alguno de los Estados miembros, cuando se refieran a violación de Tratados o Convenciones o a otros asuntos de carácter regional.

3.- La potestad de proceder, conforme el artículo 31 del Estatuto de La Corte.

4.- Los casos comprendidos en el artículo 22 letra f) del Estatuto.

5.- Las cuestiones no comprendidas en el literal 2) de este artículo, que sobrevengan entre uno de los Gobiernos centroamericanos y personas particulares, cuando de común acuerdo le fueren sometidas.

6.- Las controversias de orden internacional, entre alguno de los Gobiernos de Centroamérica y del de una Nación extranjera, que por convención celebrada al efecto, decidan ventilar y dirimir ante La Corte.

Artículo 6.4 (Reformado) La jurisdicción y competencia de La Corte se ejercerá con arreglo a las formas y plazos fijados en el Estatuto de la misma.

En los asuntos mencionados en el numeral 5) del Artículo anterior, la extensión de las facultades de La Corte, así como el procedimiento aplicable, serán los que exprese el acuerdo o compromiso de las partes; y a falta de ellos el Tribunal determinará el procedimiento que deberá aplicarse.

En las controversias a que alude el numeral 6) del artículo 5 es potestativa para La Corte su intervención; y en ella no tendrá más facultades, ni usará de otros procedimientos, que los estatuidos en el pacto compromisorio.

CAPITULO II DE LAS PARTES

Artículo 7. Podrán comparecer a la tramitación del juicio los sujetos procesales señalados en el artículo 3 de estas Ordenanzas.

Cada parte deberá conferir Poder a un Abogado en ejercicio para que intervenga en el proceso.

Artículo 8. Los documentos que se presenten para acreditar la personería, deberán ser autenticados en la forma prescrita en el artículo 34 del Estatuto de La Corte.

TITULO II DE LOS ACTOS PROCESALES CAPITULO I

Artículo 9. Los actos Procesales deberán constar en documentos escritos.

Artículo 10. De todo escrito que se presente en juicio, acompañará la parte peticionaria tantas copias literales firmadas por ella, como sean las partes contendientes a quienes se entregarán para su conocimiento.

La Secretaría pondrá constancia de la presentación y conformidad de tales copias.

El Tribunal no dará curso a escritos en que no se cumplan los requisitos exigidos y prevendrá a las partes que subsanen las omisiones en que hayan incurrido.

Artículo 11. Los expedientes y los comprobantes anexos no serán entregados a las partes, pero podrán ser examinados por ellas en la oficina bajo la vigilancia del Secretario.

Artículo 12. Las partes tienen derecho a solicitar copia certificada de las piezas constitutivas del expediente.

Artículo 13. Todo escrito deberá ser presentado en la Secretaría del Tribunal. Si esto no fuere posible por razón de la distancia, podrá presentarse al Secretario de la Corte Suprema de Justicia de cualesquiera de los Estados miembros, quien deberá remitirlo al Secretario de La Corte dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recibo, por cualesquiera de los medios técnicos de comunicación que garantice su autenticidad y reserva.

CAPITULO II DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN

Artículo 14. Toda resolución se hará saber a las partes. La primera notificación deberá practicarse personalmente o por medio de su representante legal.

Artículo 15 (Reformado)⁵. Las resoluciones que La Corte dicte producirán efecto legal para las partes litigantes, desde el momento de su notificación con arreglo a las disposiciones del presente Capítulo.

Artículo 16. Para admitir una demanda contra los sujetos procesales establecidos en el artículo 3 de esta Ordenanza, será requisito esencial que la parte actora identifique plenamente a la contraparte, de acuerdo a la legislación vigente de cada Estado.

Admitida una demanda se dará copia de ella a la parte demandada con las inserciones pertinentes, lo cual tendrá la calidad de emplazamiento para que comparezca a manifestar su defensa, en un plazo prudencial que fijará La Corte y el cual no podrá exceder de sesenta días.

Artículo 17. Las medidas que La Corte dicte, según lo previsto en el artículo 31 del Estatuto, para establecer la situación en que deban permanecer las partes contendientes mientras se pronuncia el fallo definitivo, se comunicarán inmediatamente por la vía más rápida a las partes interesadas, así como a los demás Estados miembros.

Artículo 18. El actor, en el Libelo de demanda y el demandado en su primer escrito, designarán a la persona y oficina del mismo domicilio de La Corte, con quién se entenderá o recibirán cualesquiera notificaciones. En el caso en que La Corte trasladare temporalmente su asiento, decretará que las partes en el término improrrogable de seis días hagan en dicho lugar, nuevo señalamiento de persona u oficina para notificaciones.

Artículo 19. Si en uno u otro caso de los indicados en el artículo anterior, los litigantes no hicieren el señalamiento previsto, se tendrán por notificadas las resoluciones por solo el transcurso de cuarenta y ocho horas después de dictadas.

Artículo 20. Toda notificación será efectuada por el Secretario del Tribunal y se hará constar en el expediente mediante razón que ha de expresar el día, la hora, el lugar y las circunstancias de la diligencia y que firmarán dicho funcionario y la persona notificada o que recibiere la notificación.

En caso de negativa de ésta a firmar o de impedimento para ello, se mencionará esa circunstancia en la diligencia.

Cuando la parte ocurra a la oficina o cuando el Secretario la encuentre, le hará la notificación leyéndole íntegramente el proveído de que se trate. En los demás casos la notificación se hará por medio de esquila o cédula que se entregará a la persona designada, o a cualquier empleado de la oficina señalada al efecto.

Cuando quien deba recibir la esquila o cédula no se hallare en su domicilio, o cuando la oficina señalada no estuviere abierta, la esquila o cédula se enviará por correo y bajo certificación o por cualesquiera de los medios técnicos de comunicación que garanticen su autenticidad y reserva, a dicha persona y en

su caso al Jefe, Secretario u Oficial Mayor de la oficina, con lo cual el acto de notificación quedará legalmente cumplido.

Artículo 21. Toda esquila o cédula de notificación expresará la naturaleza y el objeto del pleito; designará las partes, contendrá transcripción literal de la resolución. Si se tratare de sentencia, la transcripción será de su encabezamiento y parte resolutive.

CAPITULO III DE LOS ACTOS DE DECISION

Artículo 22. Las resoluciones de La Corte se denominan:

1.- Sentencias, si deciden definitivamente el asunto controvertido; o, si recayendo sobre un incidente, pone término a la litis por hacer imposible su continuación.

2.- Autos, si tienen por objeto resolver una cuestión incidental.

3.- Providencias, si son de mera tramitación.

Artículo 23. Toda resolución se encabezará con el nombre de La Corte, expresará lugar, hora, día, mes y año en que se pronuncie y deberá ser firmada por todos los Magistrados y por el Secretario.

Artículo 24. Si un Magistrado se negare a firmar una resolución o si falleciere, o si por cualquier otro motivo se incapacitare o imposibilitare para hacerlo, el Secretario pondrá al pie la razón explicativa de la falta y con ello quedará aquella regularizada para todos sus efectos legales.

El Magistrado disidente podrá razonar su voto consignándolo tal como dispone el artículo 36 del Estatuto, siempre que lo haga en el curso de los tres días siguientes de pronunciada la resolución.

Artículo 25. Las providencias se dictarán dentro del plazo de tres días, y los autos dentro de los cinco días siguientes a la conclusión de las diligencias del incidente, salvo los casos que especialmente se exceptúen.

La sentencia deberá pronunciarse dentro del plazo de treinta días siguientes a quedar el juicio o las diligencias, en estado de pronunciar fallo.

Artículo 26. La Corte llevará un Libro de Resoluciones, destinado a copiar los autos y sentencias que pronunciare.

Artículo 27. Las providencias se formularán expresando claramente el trámite o diligencia que decretaren, con cita de los artículos del Estatuto o de ésta Ordenanza y sus derivados, que les sirvieren de fundamento.

Artículo 28. Los autos contendrán una relación fundamentada de los puntos de hecho y de derecho que resuelvan.

Artículo 29. Las sentencias se pronunciarán de conformidad con los artículos 35, 36 y 37 del Estatuto de La Corte.

Artículo 30. La facultad acordada a las partes por el artículo 38 del Estatuto para pedir la aclaración o ampliación de un fallo, deberá ejercerse en el curso de los diez días siguientes a su notificación.

TITULO III

DE LA ACTIVIDAD PROCESAL

CAPITULO I

DE LA INICIACION DEL PROCESO

Artículo 31. El ejercicio de la acción ante La Corte deberá ajustarse a las disposiciones de esta Ordenanza.

Artículo 32. No se dará curso a una demanda en que dejen de exponerse los hechos y los fundamentos de derecho constitutivos de la cuestión o cuestiones controvertibles, y que no señale las pruebas que aportará en sustento de su demanda.

Tampoco se le dará curso a las demandas que carezcan de fundamento razonable a juicio del Tribunal.

Artículo 33. Se acumularán en un solo juicio todas las acciones que el demandante ejercite contra el demandado, siempre que no se excluyan entre sí.

Las acciones acumuladas se discutirán oportunamente y se resolverán en una sola sentencia.

Artículo 34. Resuelta una acción por La Corte, no podrá admitirse nuevo reclamo fundado en los mismos hechos y derechos que le sirvieren de base y dirigido al mismo propósito.

CAPITULO II

DE LOS IMPEDIMENTOS, RECUSACIONES Y

EXCUSAS

Artículo 35. Los Magistrados en ejercicio están obligados a integrar el quórum, sin que, en caso alguno, puedan abstenerse de ello, ni negarse a dar su voto sobre el asunto de que se trate.

Artículo 36. El impedimento o la recusación de los Magistrados podrá tener lugar en cualquier estado del Procedimiento.

Artículo 37. Son motivos de impedimento o recusación de los Magistrados, en relación con las partes o sus representantes o mandatarios:

- a) Parentesco del Magistrado o de su cónyuge dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;
- b) Interés del Magistrado o de su cónyuge en el asunto sometido al Tribunal o en otro que verse sobre objeto similar;
- c) Intervención anterior en el asunto; y,
- d) Enemistad manifiesta del Magistrado o de su cónyuge, con las partes o sus representantes o mandatarios.

Artículo 38. Sin esperar que se le recuse, el Magistrado que conociere que existe respecto a él alguno de los motivos señalados en el artículo anterior, estará obligado a declararlo al Tribunal.

El Presidente, recibida la declaración, suspenderá la causa hasta que el Tribunal resuelva el incidente.

Artículo 39. La recusación se propondrá al Tribunal mediante escrito en el que se expresarán los motivos que la fundamentan.

Propuesta la recusación, el Presidente suspenderá la causa hasta que el Tribunal decida el incidente y, si hubiere lugar, ordenará las pruebas que deberán recibirse en el término de ocho días.

Concluido el término, el Tribunal se pronunciará definitivamente.

Artículo 40. Ni el impedimento ni la recusación tienen efecto sobre lo anteriormente actuado en el procedimiento.

CAPITULO III DE LAS PRUEBAS

Artículo 41. En el término de ocho días siguientes a la contestación de la demanda, el Tribunal, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre la necesidad de prueba.

Si el Tribunal resolviere que no ha lugar a la etapa de prueba, el Presidente fijará día y hora para la audiencia y dispondrá para el efecto la convocatoria a las partes.

Si el Tribunal resolviere abrir la etapa de prueba, señalará los hechos y el término en que deberán probarse. De lo resuelto se notificará a las partes y se les ordenará lo que corresponda.

Artículo 42. Los medios de prueba podrán ser:

- a) La declaración de las partes;
- b) El informe rendido a solicitud del Tribunal y la documental;
- c) El testimonio;
- d) El informe de expertos; y
- e) La inspección ocular.

Sin perjuicio de lo anterior La Corte podrá exigir o aceptar otros medios de prueba que crea conveniente para declarar, establecer y ejecutar los derechos que tengan o reclamen las partes.

El Tribunal determinará las modalidades con arreglo a las cuales las partes sufragarán los gastos originados por la prueba.

Artículo 43. A la expiración del término de prueba, el Presidente fijará día y hora para la audiencia y dispondrá para el efecto la convocatoria a las partes.

CAPITULO IV DE LA AUDIENCIA

Artículo 44. Las audiencias serán públicas, a menos que por motivos graves el Tribunal, de oficio o a petición de parte, resuelva realizarlas en privado. El Presidente abrirá y dirigirá los debates. La inasistencia de una o ambas partes no anula lo actuado.

Artículo 45. El Tribunal conocerá los casos que se le hubieren sometido en el orden según el cual estuvieren para audiencia. Entre varios casos que estuvieren simultáneamente para audiencia, el orden se determinará según la fecha de presentación de la demanda. El Tribunal, en consideración de circunstancias especiales y mediante resolución motivada, podrá otorgar prioridad a un caso para ser juzgado.

Artículo 46. La audiencia se iniciará con el relato del proceso por parte del Secretario, quién se limitará a resumir objetivamente el desarrollo del mismo.

Artículo 47. Bajo la autoridad e instrucciones del Presidente podrán intervenir, en su orden, la parte demandante y la parte demandada, permitiéndose la réplica y la dúplica.

Artículo 48. Terminado el debate, las partes podrán presentar por escrito sus conclusiones en la misma audiencia o dentro de los tres días siguientes.

Artículo 49. Cuando el Tribunal estimare que de las intervenciones de las partes surge la necesidad de practicar pruebas o ampliar las ya practicadas, resolverá suspender por una sola vez la audiencia, conceder un término prudencial para la práctica de la prueba y señalar día y hora para la reapertura de la audiencia.

Artículo 50. El Secretario levantará un acta de cada audiencia, la que será firmada por el Presidente y el Secretario.

TITULO IV
DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
CAPITULO I
DE LA APELACION

Artículo 51. En el caso del literal j) del artículo 22 del Estatuto, la parte interesada podrá interponer el Recurso de Apelación dentro de los diez días posteriores a la notificación de la resolución denegatoria.

Se entenderá denegada la reposición cuando el órgano u organismos correspondientes, no se pronunciaren sobre la misma dentro de los treinta días posteriores a su interposición.

Artículo 52. En el escrito de interposición del recurso el apelante deberá expresar agravios.

Artículo 53. Interpuesto en tiempo y forma el recurso, La Corte lo admitirá y emplazará al apelado para que se persone y conteste los agravios dentro de los diez días posteriores a la notificación del emplazamiento. Dentro de los veinte días posteriores a la contestación de los agravios o de haber sido declarado rebelde el demandado por no haberse personado, La Corte dictará sentencia.

CAPITULO II
DE LAS CONSULTAS

Artículo 54. Las consultas en el caso del literal d) del artículo 22 del Estatuto, serán enviadas a La Corte por el organismo de comunicación del Tribunal de Justicia respectivo.

Artículo 55 (Reformado). Las consultas que hagan a La Corte los Organismos u Organos del Sistema, deberán enviarse por medio de la Secretaría del Sistema de la Integración Centroamericana.

Artículo 56. La Corte responderá a la consulta por resolución dictada en el pleno de la misma.

CAPITULO III
DE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL

Artículo 57. La solicitud de interpretación que los jueces o tribunales nacionales formulen a La Corte, de conformidad con el literal k) del artículo 22 del Estatuto, deberá contener:

- a) La designación del juez o tribunal nacional;
- b) La relación de las normas del ordenamiento jurídico cuya interpretación se solicita;
- c) La identificación de la causa que origine la solicitud y una relación sucinta de los hechos que el solicitante considere fundamentales para la interpretación; y
- d) El lugar y dirección en que el Juez o Tribunal recibirá toda comunicación de La Corte.

Artículo 58. Recibida la solicitud, el Secretario la sellará, pondrá razón en ella de la fecha de su presentación y la pasará al Presidente para su consideración por La Corte.

Artículo 59. Dentro de los treinta días posteriores a la recepción de la solicitud, La Corte emitirá su interpretación de la cual se enviará una certificación al solicitante.

CAPITULO IV DE LAS DEMANDAS DE NULIDAD E INCUMPLIMIENTO

Artículo 60. En el caso del literal b) del artículo 22 del Estatuto, la demanda de nulidad deberá llevar anexa:

- a) Si el actor es un Estado miembro, la certificación del organismo respectivo de que la decisión que impugna no fue aprobada con su voto afirmativo;
- b) Si el actor es una persona natural o jurídica, el ofrecimiento de prueba de que la decisión o la resolución impugnada le causa perjuicio; y,
- c) La copia de la decisión o de la resolución que se impugna.

Artículo 61. La demanda de incumplimiento deberá llevar anexa:

- a) La copia certificada de la decisión o resolución por cuyo incumplimiento, total o parcial, se reclama; y,
- b) El ofrecimiento de prueba de que el incumplimiento le causa perjuicio.

CAPITULO V DE LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES

Artículo 62. En el caso que establece el artículo 22 literal f) del Estatuto, presentada la demanda, se pedirá informe detallado al Poder u Organo Fundamental que se demande, quien deberá rendirlo en el plazo de veinte días, acompañando cuando lo crea necesario, las certificaciones de actas, discusiones, antecedentes y demás comprobantes que a su juicio fundamenten su actuación.

Artículo 63. Recibido el informe, La Corte en el plazo de los ocho días siguientes, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre la necesidad de presentar prueba.

Si resolviere que no ha lugar a la etapa de prueba, pronunciará sentencia en el plazo de veinte días sin necesidad de audiencia; y, si resolviere abrir a prueba, señalará el objeto de la misma y el plazo en que debe rendirse. Rendida la prueba en la forma señalada en el inciso anterior, La Corte pronunciará sentencia en el plazo y forma establecidos en el plazo y forma establecidos en

el mismo. El fallo se fundamentará en el Derecho Público del Estado respectivo.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 64. La Corte, en lo no previsto en esta Ordenanza, podrá señalar los procedimientos a seguirse manteniendo la objetividad de los derechos y la salvaguardia de los propósitos y principios del Sistema de la Integración Centroamericana, la igualdad de las partes y la garantía del debido proceso.

Artículo 65. En los casos sometidos al ámbito jurisdiccional de La Corte que sean admitidos, ésta no podrá negarse a fallar alegando silencio u oscuridad en los convenios o tratados invocados.

Artículo 66. La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y cinco y deberá comunicarse a la Secretaría del Sistema de la Integración Centroamericana y publicarse en las Gacetas o Diarios Oficiales de los países integrantes de La Corte”. No habiendo otro asunto de que tratar, se levantó la sesión, se dio por terminada firmándose el acta por los Magistrados presente y la Secretaria Interina.

Jorge Giammattei A.- Rafael Chamorro M.- F. Hércules P.- Roberto Ramírez.- Adolfo León.- L. Valle López.- M. Guerrero G.

Esta Ordenanza fue publicada en las siguientes Gacetas:

Nicaragua: La Gaceta Diario Oficial No. 244 del 28 de Diciembre de 1994.

Honduras: La Gaceta Diario Oficial No. 27.545 del 5 de enero de 1995.

El Salvador: Diario Oficial No. 17 del 25 de enero de 1995.

ANEXO III

PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO

Reforma a la Ordenanza de Procedimientos de La Corte LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA, en sesión de las tres de la tarde del día once de marzo del año dos mil diez, aprobó el Procedimiento Especial Abreviado que dice:

“(....)**1. PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO.** Después de una amplia discusión, **SE APROBÓ POR UNANIMIDAD** el Proyecto de Procedimiento Especial Abreviado elaborado por el Señor Presidente Alejandro Gómez Vides, al que se le agregaron las observaciones del Magistrado Guerra Gallardo, reformándose la Ordenanza de Procedimientos de la manera siguiente: “**A N E X O S** La Corte Centroamericana de Justicia, en uso de sus atribuciones conferidas en el Convenio de Estatuto de la Corte y en Sesión Plenaria, **CONSIDERANDO ÚNICO:** De conformidad al Arto. 43 del Convenio de Estatuto y Artículos 31 y 64 de la Ordenanza de Procedimientos. Que es de inminente necesidad reformar la Ordenanza de Procedimientos, para darle mayor celeridad a los juicios que por su extrema importancia tienen que ser resueltos rápidamente dentro de los términos establecidos, dadas las consecuencia que para el Sistema de la Integración significaría tomar una resolución tardía y urgiendo un fallo de este Tribunal y no pudiéndolo hacer con los términos establecidos en el Juicio ordinario, es conveniente crear un procedimiento especial que venga a fortalecer la celeridad del Sistema de la Integración en su parte jurisdiccional, **CAPÍTULO VI1 DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO ARTÍCULO 64** Este procedimiento abreviado se aplicará en aquellos casos en que se considere que exista violación a los derechos comunitarios relacionados con los Tratados, Convenios o Acuerdos, que regulan el libre tránsito a través de los países que integran el SICA. **ARTICULO 65** El procedimiento se iniciará con la demanda que interponga cualquier interesado y se presentará por escrito en la Secretaría General de este Tribunal o en la Secretaría de cualquiera de las Cortes Supremas de Justicia de Centroamérica, acompañada de tantas copias como partes demandadas sean. **ARTÍCULO 66** Las partes deberán estar representadas por un abogado con Poder suficiente para intervenir en el proceso. **ARTÍCULO 67** El escrito de demanda deberá contener una identificación plena de la contraparte, un relato de los hechos que supuestamente violan el Derecho Comunitario del demandante, los fundamentos de Derecho y las pruebas en que basa su pretensión. Así mismo, señalará un lugar para recibir notificaciones y podrá, a su conveniencia, señalar cualquier medio técnico a través del cual desea ser notificado. **ARTÍCULO 68** Si la demanda cumpliera todos los requisitos mencionados a juicio de este Tribunal, se emitirá un Auto admitiéndola y ordenando el emplazamiento del demandado. Dicho emplazamiento se hará a través del Secretario General de La Corte o quien haga sus veces, y deberá acompañarse por una copia de la demanda y de los documentos anexos, si los hubiere. El funcionario notificante levantará un Acta dando fe de haber llevado a cabo la notificación. Dicha Acta deberá ser firmada por el demandado, pero si este no pudiere o no quisiere firmar, lo podrá hacer cualquier persona que se encuentre en el lugar señalado, y si ésta tampoco quisiera firmar, bastará que

el Secretario o quien haga sus veces, lo haga constar en el Acta. **ARTÍCULO 69** Si las partes solicitaran medidas cautelares en su demanda, en el mismo auto de admisión de la misma deberá esta Corte pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas. De la decisión de admitir las medidas cautelares se librará un Mandato para el Juez de la jurisdicción en que se ejecutará la medida cautelar tomada, para que proceda a cumplir con la misma. **ARTÍCULO 70** El demandado tendrá tres días hábiles contados a partir de su notificación para contestar el emplazamiento. Si transcurrido ese plazo, no se contesta la demanda, se considerará trabada la litis y continuará el proceso, teniéndose por parte al demandado. Este último podrá comparecer en cualquier momento, pero no podrá hacer retroceder el juicio. **ARTÍCULO 71** La Corte podrá actuar de Oficio para impulsar el proceso, razón por la cual no existirá la rebeldía. Sin embargo, el otorgamiento de medidas cautelares solo procederá a petición de parte. **ARTÍCULO 72** La Corte, si lo considera necesario, podrá ordenar un período de pruebas de cinco días hábiles comunes contados a partir de la última notificación, el cual no podrá ser ampliado, terminado dicho periodo se ordenará una Audiencia oral y pública en donde las partes presentarán sus alegatos finales. La Audiencia se celebrará en el local de La Corte situada en la ciudad de Managua, pero el Tribunal podrá señalar cualquier otro lugar para su celebración. Las partes podrán solicitar que la Audiencia se celebre por conferencia virtual, en cuyo caso podrán presentar sus alegatos desde las Cortes Supremas de Justicia de cualquiera de los países de Centroamérica. **ARTÍCULO 73** Los incidentes de recusación o excusa de Magistrados serán resueltos sumariamente en dicha Audiencia, con sólo la vista del escrito de solicitud, después de oídos los argumentos de las partes. **ARTÍCULO 74** Las solicitudes de tercería, serán resueltas en cualquier estado del Procedimiento especial abreviado, inmediatamente después de presentado el escrito, sin más trámite. **ARTÍCULO 75** La Corte pronunciará sentencia tres días hábiles después de terminada la audiencia oral y pública y se notificará a las partes. Sobre dicha sentencia no habrá recurso alguno con excepto el de explicación o aclaración.”

Acta Número Dos de Asuntos Administrativos de las tres de la tarde del día once de marzo del año dos mil diez,

ANEXO IV

**SENTENCIA DEL LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA CASO #
JEANETTE DEL CARMEN VEGA BALTODANO CONTRA EL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE NICARAGUA**

Folio 110



Corte Centroamericana de Justicia



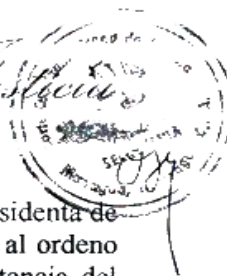
CEDULA JUDICIAL

Yo, Dr. Orlando Guerrero Mayorga, Secretario General de La Corte Centroamericana de Justicia, a usted Excelentísimo Señor Doctor José Denis Maltez Rivas, en su carácter de Sub-Procurador General de Justicia de la República de Nicaragua y en representación legal del Estado de Nicaragua, por vía de notificación y por la presente Cédula, le hago saber: Que en Demanda por falta de cumplimiento de Sentencia Arbitral, que ha promovido Jeanette del Carmen Vega Baltodano, contra el Poder Ejecutivo de la República de Nicaragua, se ha dictado la Sentencia de las diez de la mañana del diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y siete que literalmente dice: **"CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA.** Managua, Centroamérica, diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y siete, diez de la mañana. VISTA: Para dictar Sentencia la Demanda interpuesta por la señora Jeanette del Carmen Vega Baltodano contra el Poder Ejecutivo del Estado de Nicaragua, demandando el cumplimiento de la sentencia arbitral de fecha ocho de junio de mil novecientos noventa y dos, en que ordenó al Fondo para la Investigación y Desarrollo Tecnológico adscrito al ahora Ministerio de Agricultura y Ganadería de Nicaragua a pagar a la demandante en concepto de honorarios profesionales, otros gastos y costas un total general de Doscientos Diecinueve Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro Córdobas, equivalentes a Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Dólares con Ochenta Centavos de dólares americanos, los intereses legales y moratorios en que se ha incurrido desde la fecha de la sentencia, el reconocimiento del menor valor que tiene actualmente el Córdoba con relación al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica como también lo previene la sentencia, más los daños y perjuicios ocasionados a partir de la fecha en que se debió ejecutar la referida sentencia. Son partes en dicho asunto la demandante Jeanette del Carmen Vega Baltodano por medio de su apoderado Dr. Orlando Corrales Mejía y el Poder Ejecutivo del Estado de Nicaragua, representado sucesivamente por el Procurador General de Justicia, Dr. Carlos Hernández López y por el Sub-Procurador General de Justicia, Dr. José Dennis Maltez Rivas, la primera Arquitecta y los demás abogados, todos mayores de edad y de este domicilio. RESULTA: Que el demandante alega que el Poder Ejecutivo de Nicaragua, no obstante las gestiones particulares y judiciales realizadas, de hecho se ha negado a respetar el fallo judicial que le ordenó el cumplimiento del laudo arbitral antes relacionado, y, acompañó a su demanda los siguientes documentos: a) Poder General Judicial con que actúa (folios 5 y 6); b) Original de Certificación expedida por el Juzgado Primero para lo Civil de Distrito de Managua, contentiva de la Sentencia Arbitral incumplida (folios 7 a 9); c) Original de Cédula Judicial, en la que se notifica que no ha lugar al recurso de Casación de la Sentencia Arbitral; (folio 10) d) Copia fotostática notariada de Sentencia No. 16 la Corte Suprema de Justicia, de fecha uno de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, en que resuelve declarando improcedente el Recurso de Casación interpuesto por el Procurador General de Justicia (folios 11 a 13 v.); e) Fotocopia

Notarizada de la nota dirigida por el Juez Primero para lo Civil del Distrito de Managua a la Presidenta de la República, transcribiéndole Providencia dictada por ese juzgado el veintiuno de abril de mil novecientos noventa y cinco, que contiene la Orden de pagar a la demandante, las sumas establecidas en la resolución del Tribunal de Arbitraje del ocho de junio de mil novecientos noventa y dos, cuyo texto también transcribe su cabeza y parte resolutive y transcripción de la parte resolutive de la Sentencia No. 16 de la Corte Suprema de Justicia del primero de marzo de mil novecientos noventa y cuatro; (folios 26 a 30) y f) fotocopia de diferentes notas sobre gestiones de tipo personal realizadas por la Arquitecta Jeanette Vega Baltodano, para buscar el cumplimiento de la sentencia arbitral (folios 14 a 25). RESULTA: Que el Tribunal en resolución de fecha trece de junio de mil novecientos noventa y seis admitió la Demanda, ordenando que la parte demandada rindiera informe sobre los extremos de la pretensión deducida, en un término de sesenta días hábiles, informe que no fue rendido en tiempo alguno (folio 32). RESULTA: Que los señores Magistrados Don Rafael Chamorro Mora y Don Orlando Trejos Somarriba, presentaron excusas para no conocer del asunto, en su carácter de Ex-Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al haber intervenido en el Recurso de Casación que se tramitó ante aquel Tribunal contra dicha sentencia arbitral. Admitidas las excusas se llamó a integrar La Corte, a los Magistrados Suplentes Don Uriel Mendieta Gutiérrez y Don Leonte Valle López, (folios 35 a 51). RESULTA: Que en Escrito presentado por el Procurador General de Justicia, Dr. Carlos Hernández López, compareció en representación del Estado de Nicaragua y del Poder Ejecutivo, contestando la audiencia concedida en el sentido de que se extendiera la certificación solicitada por la parte contraria (folios 57 a 60). En auto de folios 61, el Tribunal lo tuvo como parte en el juicio en el carácter con que compareció y ordenó extender la certificación solicitada. RESULTA: Que La Corte en aplicación del artículo 63 de la Ordenanza de Procedimientos, abrió a pruebas el juicio y ordenó a la parte demandante: Que en el término de treinta días hábiles, presente Certificación de las siguientes diligencias judiciales: “1.- Resolución del juez competente en que declara pasada en autoridad de cosa juzgada la sentencia arbitral de cuyo cumplimiento se trata, con base en el Art. 976 del Código de Procedimiento de Nicaragua; 2.- Resolución del juez competente de que en trámite de ejecución de sentencia, se ordena al Poder Ejecutivo el cumplimiento de dicha sentencia arbitral; y, 3.- Notificación al Poder Ejecutivo de la resolución en que se ordena el cumplimiento del fallo arbitral y de los anexos que se acompañaron, en su caso” (folio 66 a 67). RESULTA: Que la parte demandante pidió se declarara en rebeldía a la parte demandada por no haber comparecido dentro del término del emplazamiento a contestar la demanda y se citara para absolver posiciones al Sr. Procurador General de Justicia sobre hechos que propuso en sobre cerrado que acompañó a su solicitud (folio 69), petición que el Tribunal resolvió, declarando sin lugar la solicitud de rebeldía y desechando por impertinente la absolución de posiciones, (folio 70). RESULTA: Que la parte demandante presentó los siguientes documentos: a) Nota original de fecha 14 de agosto de 1995, dirigida por la Señora Jeanette Vega Baltodano a la



Corte Centroamericana de Justicia



Excelentísima Señora Doña Violeta Barrios de Chamorro, en su condición de Presidenta de la República de Nicaragua, solicitándole su orden para que se de cumplimiento al ordeno judicial del Juzgado Primero de lo Civil de la Ciudad de Managua, sobre sentencia del Tribunal de Arbitraje del 8 de junio de 1992 (folios 74 a 75); b) Original de Ejecutoria de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, de Sentencia No.16 de dicho Tribunal (folios 76 a 78); y c) Certificación de la resolución de ejecución de sentencia, que ordena a la Presidenta de la República, ejecute el pago de las sumas debidas a la Señora Jeanette Vega Baltodano, (folio 79). **RESULTA:** Que en Escrito presentado por el representante de la parte demandada, manifestó que sus mandantes tienen la voluntad de darle cumplimiento al fallo objeto de la demanda por lo que se ha invitado a la demandante que acuda a las oficinas del Ministerio de Finanzas para un acuerdo, con el propósito de efectuar el pago dentro del presupuesto del año mil novecientos noventa y siete (folios 82 a 84). **RESULTA:** Que en Escrito presentado por el Apoderado de la parte demandante, se manifestó en relación al Escrito antes relacionado, expresando, entre otras cosas, que el Estado de Nicaragua, después de cincuenta y cinco meses de negativa a cumplir sentencia que ha motivado el presente juicio, confiesa conocerla y reconoce su obligación de cumplimiento. Que en virtud de haberse vencido el término probatorio y existiendo confesión de la parte demandada, solicita se proceda a dictar sentencia, sin que pueda incidir en ella, la supuesta voluntad de cumplimiento (folio 86). **RESULTA:** Que en Escrito de folios 87, el Apoderado de la parte demandante, solicitó al Tribunal una audiencia para asistir junto con la contraparte, a discutir arreglo directo, lo cual también solicitó el Procurador General de Justicia, en escrito de folio 88. **RESULTA:** Que el Tribunal en auto de folios 89, resolvió conceder la audiencia solicitada por ambas partes, de conformidad al artículo 64 de la Ordenanza de Procedimientos. **RESULTA:** Que en Escrito de folios 97, el Señor Sub-Procurador General de Justicia de la República de Nicaragua, solicita intervención en el proceso de conformidad a la delegación expresa realizada por el Señor Procurador General de Justicia, acompañando los atestados respectivos, habiéndosele tenido por parte en sustitución dicho Procurador General (folio 96 v.). **RESULTA:** Que con fecha diez de febrero de mil novecientos noventa y siete, se celebró audiencia para arreglo directo, en la cual cada parte presentó sus posiciones para llegar a un acuerdo extrajudicial. Se invitó a las partes a conversar privadamente en busca de un acuerdo que les fuese conveniente, resolviéndose conceder prórroga de una semana para efectuar las consultas respectivas con sus partes representadas. Con fecha diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y siete se continuó el desarrollo de la audiencia, no habiéndose presentado el Dr. Orlando Corrales Mejía, representante de la parte demandante. Por su parte el Señor Sub-Procurador manifestó que en la conversación privada sostenida con la parte demandante no se pudo llegar a ningún acuerdo. Solicitó a su vez, se hiciera constar la voluntad del Estado de Nicaragua de cumplir con el fallo de sentencia arbitral y plazo para presentar oferta concreta de la forma en que el Estado de Nicaragua, de acuerdo a su situación económica estaría dispuesto a cancelar su obligación

(folios 93 a 96). RESULTA: Que en Escrito de folios 97, el Señor Sub-Procurador General de Justicia, reitera la voluntad del actual gobierno de la República de Nicaragua para hacer efectivo el cumplimiento del Laudo Arbitral y solicita al Tribunal mediación para establecer finalmente un acuerdo sobre la modalidad de pago del monto señalado en el laudo de conformidad a las posibilidades económicas y presupuestarias del país. RESULTA: Que en Escrito de folios 98, el apoderado de la parte demandante solicita, se proceda a dictar la correspondiente sentencia, en virtud de estar debidamente probados los extremos de la demanda, haciendo especial condenatoria del demandado a fin de lograr el inmediato pago de la cantidad indicada en la sentencia incumplida y los intereses legales en la forma ya expresada. RESULTA: Que por resolución de las diez horas del día veintiocho de febrero del corriente año, La Corte mandó agregar con citación de parte contraria, los documentos presentados por el demandando con su demanda y con su escrito de folio 71 a 73, señalando para tal efecto las once horas del día cuatro del siguiente mes en la Secretaría de esta Corte, y ordenó se trajera este juicio para sentencia (folios 89 v.). La agregación de los documentos se realizó según acta agregada a folio 101, sin asistencia de las partes. CONSIDERANDO: Que en el presente caso se trata de la reclamación de créditos a cargo de la Hacienda Pública y en favor de un particular, por lo cual su ejecución está regulada en la Ley de la Asamblea Nacional Constituyente del Estado de Nicaragua de fecha veintisiete de febrero de mil novecientos trece, en cuyo artículo segundo dispone que los Tribunales competentes cuando los fallos respectivos hubiesen causado ejecutoria podrán mandar que se cumplan, pero este cumplimiento tocará exclusivamente al Ejecutivo, quién acordará y ejecutará el pago en la forma y dentro de los límites que señala la Ley de Presupuesto. CONSIDERANDO: Que con base en la normativa indicada, aplicable por esta Corte al caso planteado según el Artículo 63 inciso final de su Ordenanza de Procedimientos, la demanda está correctamente incoada contra el Poder Ejecutivo de la República de Nicaragua, que en este juicio ha sido representado, sucesivamente por el Procurador General de Justicia y el Sub Procurador de Justicia, cuyas generales se han expresado. CONSIDERANDO: Que el demandante pide que previa la tramitación de ley, se ordene a la Presidenta de la República que fungía a la fecha de la demanda, en su calidad de Titular del Poder Ejecutivo de Nicaragua, dar las instrucciones necesarias para el cumplimiento de la sentencia arbitral de las cinco de la tarde del ocho de junio de mil novecientos noventa y dos, cuyo cumplimiento fue ordenado por el Juez Primero para lo Civil de Distrito de Managua y, en consecuencia, se pague a su representada las cantidades que en dicha sentencia se expresan, con los intereses legales y moratorios en que se ha incurrido desde la fecha de la sentencia, el reconocimiento del menor valor que tiene actualmente el córdoba con relación al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica como también lo previene la referida sentencia, más daños y perjuicios ocasionados a partir de la fecha en que se debió ejecutar la aludida sentencia, ofreciendo probar los extremos de su demanda, especialmente los perjuicios evidentes que el incumplimiento de la sentencia causa a su mandante. CONSIDERANDO: Que el demandante presentó la documentación que



Corte Centroamericana de Justicia



Consideró pertinente tanto con su demanda, la cual se agregó legalmente a folios 5 a 30, como con su escrito de folio 71 a 73, que corre agregada a folios 74 a 80 de este juicio, la cual no ha sido redargüida en forma alguna por la parte contraria. CONSIDERANDO: Que tanto el Procurador General de Justicia en su escrito a folio 88, como su sucesor, el Sub Procurador de Justicia en escrito a folio 97 y este último además en acta a folios 93 a 96, reconocen la existencia del fallo cuyo cumplimiento se pide al Poder Ejecutivo de Nicaragua y expresan y admiten la buena disposición del demandado a cumplir con el mismo, lo cual conforme a la sana crítica constituye una aceptación a la pretensión de la demanda que releva este hecho de prueba. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 35 de su Estatuto, en sus sentencias "La Corte apreciará las pruebas en su conjunto, razonando en su fallo los criterios de valoración que hubiere aplicado" y, que de acuerdo con el Art. 42 de su Ordenanza de Procedimientos, entre otras, las pruebas admisibles son la declaración de las partes y la documental. CONSIDERANDO: Que como se ha expresado en los Considerandos anteriores, el fallo se puede fundamentar en la apreciación en conjunto de las pruebas presentadas y con aplicación del principio de la sana crítica, para valoración de la prueba. CONSIDERANDO: Que es competencia de este Tribunal, conocer y resolver a solicitud del agraviado de conflictos cuando de hecho no se respeten los fallos judiciales. Que de hecho un fallo no se respeta, aún cuando se reconozca la intención de cumplirlo en un futuro, y que, el actor de este irrespeto sea uno de los Poderes u Organos Fundamentales del Estado; y ello resulte en este caso, de la apreciación en conjunto de la prueba, entre las que se encuentran afirmaciones de intención de posterior cumplimiento. CONSIDERANDO: Que conforme a la legislación nicaragüense, los fallos arbitrales tienen carácter judicial y que en el presente caso, se incumplió además, el del Juez Primero para lo Civil del Distrito de Managua que ordena el cumplimiento de dicho laudo. POR TANTO: La Corte Centroamericana de Justicia en nombre de Centroamérica y en aplicación de los artículos 22 letra f), 30, 32, 34, 35, 37, 38 y 39 del Estatuto de La Corte; 3 letra d), 4, 5 numeral 4º, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 22 numeral 1º, 25 inciso segundo, 27, 32, 37 literal c), 38, 41 inciso 3º, 42, 62, 63 y 64 de la Ordenanza de Procedimientos; Ley de 27 de febrero de 1913 de la Asamblea Nacional Constituyente de la República de Nicaragua; Artículo 27 párrafo 3 de la Ley del Régimen Presupuestario y sus Modificaciones, de la República de Nicaragua; RESUELVE: PRIMERO: Declarar procedente la demanda interpuesta por la Señora Jeanette del Carmen Vega Baltodano, de las generales antes expresadas, contra el Poder Ejecutivo del Estado de Nicaragua. SEGUNDO: Declarar que el Poder Ejecutivo del Estado de Nicaragua, de hecho no ha respetado el fallo del Juez Primero para lo Civil del Distrito de Managua, de las once y treinta de la mañana del día veintiuno de abril de mil novecientos noventa y cinco, en el que declara que deben pagarse a la señora Jeanette Vega Baltodano las sumas establecidas en la Resolución del Tribunal de Arbitraje de las cinco de la tarde del ocho de junio de mil novecientos noventa y dos, ordenando a la Presidenta de la República, Titular del Poder Ejecutivo en esa época, para que por medio de la Secretaría de Estado correspondiente y en

cumplimiento de las resoluciones judiciales, dicte el acuerdo y ejecute el pago de las sumas debidas a la señora Vega Baltodano, sumas que totalizaban a esa fecha el equivalente en moneda nacional a la cantidad de Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenticuatro dólares con Ochenta Centavos de dólar. TERCERO: Que el Poder Ejecutivo de la República de Nicaragua, por medio de su Presidente Constitucional, debe proceder de conformidad a la Ley del veintisiete de febrero de mil novecientos trece, acordando y ejecutando el pago de la cantidad que resulte al aplicar lo resuelto en el fallo arbitral de las cinco de la tarde del ocho de junio de mil novecientos noventa y dos, con sujeción a las reglas contenidas en el mismo fallo en la forma y dentro de los límites que señale la Ley de Presupuesto y especialmente a lo dispuesto en el Art. 27, párrafo tercero de la Ley del Régimen Presupuestario y sus Modificaciones, (Ley No. 51). CUARTO: En cuanto a los intereses legales y moratorios desde la fecha de la sentencia, más los daños y perjuicios ocasionados a partir de la fecha en que se debió ejecutar el laudo arbitral que se demanda contra el Poder Ejecutivo de Nicaragua, no corresponde determinar su procedencia y monto a este Tribunal, sino al Juez Primero para lo Civil del Distrito de Managua, a cuyo cargo se encuentra la ejecución del aludido laudo. QUINTO: Esta sentencia deberá cumplirse conforme lo dispuesto en el Artículo 39 del Convenio del Estatuto de La Corte Centroamericana de Justicia, vigente para el Estado de Nicaragua. NOTIFÍQUESE. (f) F Hércules P. (f) Jorge Giammattei A. (f) Adolfo León Gómez (f) L. Valle López (f) Uriel Mendieta G. (f) OGM.

Es conforme con su original y para todos los fines legales notifico a Vuestra Excelencia por medio de la presente Cédula, en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, Centroamérica a las tres y cuarenta minutos de la tarde del día veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete.

OGM
ORLANDO GUERRERO MORALES

Secretario General



ANEXO V

RESOLUCION POR INCUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA



Corte Centroamericana de Justicia Folio 152



CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario General de La Corte Centroamericana de Justicia, Certifica la Resolución emitida por La Corte Centroamericana de Justicia, en el caso de la Demanda por falta de cumplimiento de Sentencia Arbitral, que ha promovido Jeanette del Carmen Vega Baltodano contra el Poder Ejecutivo de la República de Nicaragua, la que íntegra y literalmente dice: "**CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA**. Managua, Centroamérica, diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y siete, diez de la mañana. VISTA: Para dictar Sentencia la Demanda interpuesta por la señora Jeanette del Carmen Vega Baltodano contra el Poder Ejecutivo del Estado de Nicaragua, demandando el cumplimiento de la sentencia arbitral de fecha ocho de junio de mil novecientos noventa y dos, en que ordenó al Fondo para la Investigación y Desarrollo Tecnológico adscrito al ahora Ministerio de Agricultura y Ganadería de Nicaragua a pagar a la demandante en concepto de honorarios profesionales, otros gastos y costas un total general de Doscientos Diecinueve Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro Córdobas, equivalentes a Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Córdobas con Ochenta Centavos de dólares americanos, los intereses legales y moratorios en que se ha incurrido desde la fecha de la sentencia, el reconocimiento del menor valor que tiene actualmente el Córdoba con relación al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica como también lo previene la sentencia, más los daños y perjuicios ocasionados a partir de la fecha en que se debió ejecutar la referida sentencia. Son partes en dicho asunto la demandante Jeanette del Carmen Vega Baltodano por medio de su apoderado Dr. Orlando Corrales Mejía y el Poder Ejecutivo del Estado de Nicaragua, representado sucesivamente por el Procurador General de Justicia, Dr. Carlos Hernández López y por el Sub-Procurador General de Justicia, Dr. José Dennis Maltez Rivas, la primera Arquitecta y los demás abogados, todos mayores de edad y de este domicilio. RESULTA: Que el demandante alega que el Poder Ejecutivo de Nicaragua, no obstante las gestiones particulares y judiciales realizadas, de hecho se ha negado a respetar el fallo judicial que le ordenó el cumplimiento del laudo arbitral antes relacionado, y, acompañó a su demanda los siguientes documentos: a) Poder General Judicial con que actúa (folios 5 y 6); b) Original de Certificación expedida por el Juzgado Primero para lo Civil de Distrito de Managua, contentiva de la Sentencia Arbitral incumplida (folios 7 a 9); c) Original de Cédula Judicial, en la que se notifica que no ha lugar al recurso de Casación de la Sentencia Arbitral; (folio 10) d) Copia fotostática notarizada de Sentencia No. 16 la Corte Suprema de Justicia, de fecha uno de

marzo de mil novecientos noventa y cuatro, en que resuelve declarando improcedente el Recurso de Casación interpuesto por el Procurador General de Justicia (folios 11 a 13 v.); e) Fotocopia Notarizada de la nota dirigida por el Juez Primero para lo Civil del Distrito de Managua a la Presidenta de la República, transcribiéndole Providencia dictada por ese juzgado el veintiuno de abril de mil novecientos noventa y cinco, que contiene la Orden de pagar a la demandante, las sumas establecidas en la resolución del Tribunal de Arbitraje del ocho de junio de mil novecientos noventa y dos, cuyo texto también transcribe su cabeza y parte resolutive y transcripción de la parte resolutive de la Sentencia No. 16 de la Corte Suprema de Justicia del primero de marzo de mil novecientos noventa y cuatro; (folios 26 a 30) y f) fotocopia de diferentes notas sobre gestiones de tipo personal realizadas por la Arquitecta Jeanette Vega Baltodano, para buscar el cumplimiento de la sentencia arbitral (folios 14 a 25). RESULTA: Que el Tribunal en resolución de fecha trece de junio de mil novecientos noventa y seis admitió la Demanda, ordenando que la parte demandada rindiera informe sobre los extremos de la pretensión deducida, en un término de sesenta días hábiles, informe que no fue rendido en tiempo alguno (folio 32). RESULTA: Que los señores Magistrados Don Rafael Chamorro Mora y Don Orlando Trejos Somarriba, presentaron excusas para no conocer del asunto, en su carácter de Ex-Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al haber intervenido en el Recurso de Casación que se tramitó ante aquel Tribunal contra dicha sentencia arbitral. Admitidas las excusas se llamó a integrar la Corte, a los Magistrados Suplentes Don Uriel Mendieta Gutiérrez y Don Leonte Valle López, (folios 35 a 51). RESULTA: Que en Escrito presentado por el Procurador General de Justicia, Dr. Carlos Hernández López, compareció en representación del Estado de Nicaragua y del Poder Ejecutivo, contestando la audiencia concedida en el sentido de que se extendiera la certificación solicitada por la parte contraria (folios 57 a 60). En auto de folios 61, el Tribunal lo tuvo como parte en el juicio en el carácter con que compareció y ordenó extender la certificación solicitada. RESULTA: Que La Corte en aplicación del artículo 63 de la Ordenanza de Procedimientos, abrió a pruebas el juicio y ordenó a la parte demandante: Que en el término de treinta días hábiles, presente Certificación de las siguientes diligencias judiciales: “1.- Resolución del juez competente en que declara pasada en autoridad de cosa juzgada la sentencia arbitral de cuyo cumplimiento se trata, con base en el Art. 976 del Código de Procedimiento de Nicaragua; 2.- Resolución del juez competente de que en trámite de ejecución de sentencia, se ordena al Poder Ejecutivo el cumplimiento de dicha sentencia arbitral; y, 3.- Notificación al Poder Ejecutivo de la resolución en que se ordena el cumplimiento del fallo



Corte Centroamericana de Justicia

FOLIO 153



arbitral y de los anexos que se acompañaron, en su caso” (folio 66 a 67).
RESULTA: Que la parte demandante pidió se declarara en rebeldía a la parte demandada por no haber comparecido dentro del término del emplazamiento a contestar la demanda y se citara para absolver posiciones al Sr. Procurador General de Justicia sobre hechos que propuso en sobre cerrado que acompañó a su solicitud (folio 69), petición que el Tribunal resolvió, declarando sin lugar la solicitud de rebeldía y desechando por impertinente la absolución de posiciones, (folio 70). RESULTA: Que la parte demandante presentó los siguientes documentos: a) Nota original de fecha 14 de agosto de 1995, dirigida por la Señora Jeanette Vega Baltodano a la Excelentísima Señora Doña Violeta Barrios de Chamorro, en su condición de Presidenta de la República de Nicaragua, solicitándole su orden para que se de cumplimiento al ordeno judicial del Juzgado Primero de lo Civil de la Ciudad de Managua, sobre sentencia del Tribunal de Arbitraje del 8 de junio de 1992 (folios 74 a 75); b) Original de Ejecutoria de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, de Sentencia No.16 de dicho Tribunal (folios 76 a 78); y c) Certificación de la resolución de ejecución de sentencia, que ordena a la Presidenta de la República, ejecute el pago de las sumas debidas a la Señora Jeanette Vega Baltodano, (folio 79). RESULTA: Que en Escrito presentado por el representante de la parte demandada, manifestó que sus mandantes tienen la voluntad de darle cumplimiento al fallo objeto de la demanda por lo que se ha invitado a la demandante que acuda a las oficinas del Ministerio de Finanzas para un acuerdo, con el propósito de efectuar el pago dentro del presupuesto del año mil novecientos noventa y siete (folios 82 a 84). RESULTA: Que en Escrito presentado por el Apoderado de la parte demandante, se manifestó en relación al Escrito antes relacionado, expresando, entre otras cosas, que el Estado de Nicaragua, después de cincuenta y cinco meses de negativa a cumplir sentencia que ha motivado el presente juicio, confiesa conocerla y reconoce su obligación de cumplimiento. Que en virtud de haberse vencido el término probatorio y existiendo confesión de la parte demandada, solicita se proceda a dictar sentencia, sin que pueda incidir en ella, la supuesta voluntad de cumplimiento (folio 86). RESULTA: Que en Escrito de folios 87, el Apoderado de la parte demandante, solicitó al Tribunal una audiencia para asistir junto con la contraparte, a discutir arreglo directo, lo cual también solicitó el Procurador General de Justicia, en escrito de folio 88. RESULTA: Que el Tribunal en auto de folios 89, resolvió conceder la audiencia solicitada por ambas partes, de conformidad al artículo 64 de la Ordenanza de Procedimientos. RESULTA: Que en Escrito de folios 97, el Señor Sub-Procurador General de Justicia de la República de Nicaragua,

solicita intervención en el proceso de conformidad a la delegación expresa realizada por el Señor Procurador General de Justicia, acompañando los atestados respectivos, habiéndosele tenido por parte en sustitución dicho Procurador General (folio 96 v.). RESULTA: Que con fecha diez de febrero de mil novecientos noventa y siete, se celebró audiencia para arreglo directo, en la cual cada parte presentó sus posiciones para llegar a un acuerdo extrajudicial. Se invitó a las partes a conversar privadamente en busca de un acuerdo que les fuese conveniente, resolviéndose conceder prórroga de una semana para efectuar las consultas respectivas con sus partes representadas. Con fecha diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y siete se continuó el desarrollo de la audiencia, no habiéndose presentado el Dr. Orlando Corrales Mejía, representante de la parte demandante. Por su parte el Señor Sub-Procurador manifestó que en la conversación privada sostenida con la parte demandante no se pudo llegar a ningún acuerdo. Solicitó a su vez, se hiciera constar la voluntad del Estado de Nicaragua de cumplir con el fallo de sentencia arbitral y plazo para presentar oferta concreta de la forma en que el Estado de Nicaragua, de acuerdo a su situación económica estaría dispuesto a cancelar su obligación (folios 93 a 96). RESULTA: Que en Escrito de folios 97, el Señor Sub-Procurador General de Justicia, reitera la voluntad del actual gobierno de la República de Nicaragua para hacer efectivo el cumplimiento del Laudo Arbitral y solicita al Tribunal mediación para establecer finalmente un acuerdo sobre la modalidad de pago del monto señalado en el laudo de conformidad a las posibilidades económicas y presupuestarias del país. RESULTA: Que en Escrito de folios 98, el apoderado de la parte demandante solicita, se proceda a dictar la correspondiente sentencia, en virtud de estar debidamente probados los extremos de la demanda, haciendo especial condenatoria del demandado a fin de lograr el inmediato pago de la cantidad indicada en la sentencia incumplida y los intereses legales en la forma ya expresada. RESULTA: Que por resolución de las diez horas del día veintiocho de febrero del corriente año, La Corte mandó agregar con citación de parte contraria, los documentos presentados por el demandando con su demanda y con su escrito de folio 71 a 73, señalando para tal efecto las once horas del día cuatro del siguiente mes en la Secretaría de esta Corte, y ordenó se trajera este juicio para sentencia (folios 89 v.). La agregación de los documentos se realizó según acta agregada a folio 101, sin asistencia de las partes. CONSIDERANDO: Que en el presente caso se trata de la reclamación de créditos a cargo de la Hacienda Pública y en favor de un particular, por lo cual su ejecución está regulada en la Ley de la Asamblea Nacional Constituyente del Estado de Nicaragua de fecha veintisiete de febrero de mil



Corte Centroamericana de Justicia

FOLIO 154



novecientos trece, en cuyo artículo segundo dispone que los Tribunales competentes cuando los fallos respectivos hubiesen causado ejecutoria podrán mandar que se cumplan, pero este cumplimiento tocará exclusivamente al Ejecutivo, quién acordará y ejecutará el pago en la forma y dentro de los límites que señala la Ley de Presupuesto. CONSIDERANDO: Que con base en la normativa indicada, aplicable por esta Corte al caso planteado según el Artículo 63 inciso final de su Ordenanza de Procedimientos, la demanda está correctamente incoada contra el Poder Ejecutivo de la República de Nicaragua, que en este juicio ha sido representado, sucesivamente por el Procurador General de Justicia y el Sub Procurador de Justicia, cuyas generales se han expresado. CONSIDERANDO: Que el demandante pide que previa la tramitación de ley, se ordene a la Presidenta de la República que fungía a la fecha de la demanda, en su calidad de Titular del Poder Ejecutivo de Nicaragua, dar las instrucciones necesarias para el cumplimiento de la sentencia arbitral de las cinco de la tarde del ocho de junio de mil novecientos noventa y dos, cuyo cumplimiento fue ordenado por el Juez Primero para lo Civil de Distrito de Managua y, en consecuencia, se pague a su representada las cantidades que en dicha sentencia se expresan, con los intereses legales y moratorios en que se ha incurrido desde la fecha de la sentencia, el reconocimiento del menor valor que tiene actualmente el córdoba con relación al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica como también lo previene la referida sentencia, más daños y perjuicios ocasionados a partir de la fecha en que se debió ejecutar la aludida sentencia, ofreciendo probar los extremos de su demanda, especialmente los perjuicios evidentes que el incumplimiento de la sentencia causa a su mandante. CONSIDERANDO: Que el demandante presentó la documentación que consideró pertinente tanto con su demanda, la cual se agregó legalmente a folios 5 a 30, como con su escrito de folio 71 a 73, que corre agregada a folios 74 a 80 de este juicio, la cual no ha sido redargüida en forma alguna por la parte contraria. CONSIDERANDO: Que tanto el Procurador General de Justicia en su escrito a folio 88, como su sucesor, el Sub Procurador de Justicia en escrito a folio 97 y este último además en acta a folios 93 a 96, reconocen la existencia del fallo cuyo cumplimiento se pide al Poder Ejecutivo de Nicaragua y expresan y admiten la buena disposición del demandado a cumplir con el mismo, lo cual conforme a la sana crítica constituye una aceptación a la pretensión de la demanda que releva este hecho de prueba. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 35 de su Estatuto, en sus sentencias "La Corte apreciará las pruebas en su conjunto, razonando en su fallo los criterios de valoración que hubiere aplicado" y, que de acuerdo con el Art. 42 de su Ordenanza de Procedimientos, entre otras, las

pruebas admisibles son la declaración de las partes y la documental.

CONSIDERANDO: Que como se ha expresado en los Considerandos anteriores, el fallo se puede fundamentar en la apreciación en conjunto de las pruebas presentadas y con aplicación del principio de la sana crítica, para valoración de la prueba.

CONSIDERANDO: Que es competencia de este Tribunal, conocer y resolver a solicitud del agraviado de conflictos cuando de hecho no se respeten los fallos judiciales. Que de hecho un fallo no se respeta, aún cuando se reconozca la intención de cumplirlo en un futuro, y que, el actor de este irrespeto sea uno de los Poderes u Organos Fundamentales del Estado; y ello resulte en este caso, de la apreciación en conjunto de la prueba, entre las que se encuentran afirmaciones de intención de posterior cumplimiento.

CONSIDERANDO: Que conforme a la legislación nicaragüense, los fallos arbitrales tienen carácter judicial y que en el presente caso, se incumplió además, el del Juez Primero para lo Civil del Distrito de Managua que ordena el cumplimiento de dicho laudo.

POR TANTO: La Corte Centroamericana de Justicia en nombre de Centroamérica y en aplicación de los artículos 22 letra f), 30, 32, 34, 35, 37, 38 y 39 del Estatuto de La Corte; 3 letra d), 4, 5 numeral 4º, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 22 numeral 1º, 25 inciso segundo, 27, 32, 37 literal c), 38, 41 inciso 3º, 42, 62, 63 y 64 de la Ordenanza de Procedimientos; Ley de 27 de febrero de 1913 de la Asamblea Nacional Constituyente de la República de Nicaragua; Artículo 27 párrafo 3 de la Ley del Régimen Presupuestario y sus Modificaciones, de la República de Nicaragua;

RESUELVE: PRIMERO: Declarar procedente la demanda interpuesta por la Señora Jeanette del Carmen Vega Baltodano, de las generales antes expresadas, contra el Poder Ejecutivo del Estado de Nicaragua.

SEGUNDO: Declarar que el Poder Ejecutivo del Estado de Nicaragua, de hecho no ha respetado el fallo del Juez Primero para lo Civil del Distrito de Managua, de las once y treinta de la mañana del día veintiuno de abril de mil novecientos noventa y cinco, en el que declara que deben pagarse a la señora Jeanette Vega Baltodano las sumas establecidas en la Resolución del Tribunal de Arbitraje de las cinco de la tarde del ocho de junio de mil novecientos noventa y dos, ordenando a la Presidenta de la República, Titular del Poder Ejecutivo en esa época, para que por medio de la Secretaría de Estado correspondiente y en cumplimiento de las resoluciones judiciales, dicte el acuerdo y ejecute el pago de las sumas debidas a la señora Vega Baltodano, sumas que totalizaban a esa fecha el equivalente en moneda nacional a la cantidad de Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenticuatro dólares con Ochenta Centavos de dólar.

TERCERO: Que el Poder Ejecutivo de la República de Nicaragua, por medio de su Presidente Constitucional, debe proceder de conformidad a la Ley del veintisiete de febrero de mil novecientos




Corte Centroamericana de Justicia

FOLIO 155



trece, acordando y ejecutando el pago de la cantidad que resulte al aplicar lo resuelto en el fallo arbitral de las cinco de la tarde del ocho de junio de mil novecientos noventa y dos, con sujeción a las reglas contenidas en el mismo fallo en la forma y dentro de los límites que señale la Ley de Presupuesto y especialmente a lo dispuesto en el Art. 27, párrafo tercero de la Ley del Régimen Presupuestario y sus Modificaciones, (Ley No. 51). CUARTO: En cuanto a los intereses legales y moratorios desde la fecha de la sentencia, más los daños y perjuicios ocasionados a partir de la fecha en que se debió ejecutar el laudo arbitral que se demanda contra el Poder Ejecutivo de Nicaragua, no corresponde determinar su procedencia y monto a este Tribunal, sino al Juez Primero para lo Civil del Distrito de Managua, a cuyo cargo se encuentra la ejecución del aludido laudo. QUINTO: Esta sentencia deberá cumplirse conforme lo dispuesto en el Artículo 39 del Convenio del Estatuto de La Corte Centroamericana de Justicia, vigente para el Estado de Nicaragua. NOTIFIQUESE. (f) F Hércules P. (f) Jorge Giammattei A. (f) Adolfo León Gómez (f) L. Valle López (f) Uriel Mendieta G. (f) OGM."

Es conforme, con su original con el cual fue debidamente cotejado y para que tenga todos sus efectos legales, libro la presente Certificación, en virtud de lo ordenado por la misma resolución, en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, Centroamérica, a las doce horas del día veintidós de octubre de mil novecientos noventa y siete.


ORLANDO GUERRERO MAYORGA
Secretario General

